DE ROMA A CASTILLA. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MUNICIPALES

Gonzalo Oliva
Universidad Rey Juan Carlos

Sumario: 1. - El municipio romano clásico (siglos I-III). 1.1 Urbanismo y ciudadanía romana. 1.2. Estructura municipal. 2. - El municipio tardorromano y el municipio visigodo (siglos IV-VIII). 2.1. La crisis del modelo urbano tradicional. 2.2. Magistraturas municipales. 2.3. *Comes et iudex civitatis*. 2.4. Curia municipal. 2.5. Asambleas populares. Conventos. 3. - Las estructuras municipales en la Alta Edad Media (siglos VIII-XI). 3.1. La situación urbana tras la conquista musulmana. 3.2. Instituciones altomedievales. 3.2.1. *Comissas y comites*. 3.2.2. Asambleas. 4. - El renacimiento de la vida urbana (siglos XI-XIII). 4.1. Autonomía ciudadana. 4.2. Tipos de ciudades según su grado de autogobierno. 4.2.1. Ciudades sin autogobierno. 4.2.2. Municipios incompletos. Prevalencia del poder real. 4.2.3. Municipios intermedios. División del poder. 4.2.4. Municipios plenos. Poder municipal desarrollado o completo. 5. - Organismos de poder municipal. 5.1. Concilium. 5.2. Magistraturas. 5.2.1. Juez. 5.2.2. Alcaldes. 5.2.3. Fiadores. 6. - Oficiales reales. 6.1. «Senior» «Dominus ville». 6.2. Merino. 6.3. Jurados o Justicias. 7. - Sayón. 8. - Conclusiones.

1. - El municipio romano clásico (siglos I-III)

1.1. *Urbanismo y ciudadanía romana*

La expansión de Roma por toda la cuenca mediterránea supone el control de un territorio inmenso que es explotado económicamente desde un principio de una forma despiadada, primero mediante el botín de guerra y posteriormente a través de imposiciones tributarias abusivas. Pero junto a esta connotación negativa la conquista romana implica a su vez la entrada de estos territorios en un marco unificado político, económico, cultural. Este último aspecto es particularmente destacable en las regiones occidentales como la Península Ibérica ya que supone su inmersión total en las corrientes culturales mediterráneas ya iniciadas con las colonizaciones griegas y fenicio-púnicas. Algunos pueblos indígenas reconocieron desde un principio la superioridad militar y cultural romana y los miembros pertenecientes a sus oligarquías vieron recompensado su apoyo no sólo con la amistad de Roma sino con su integración en ella, a través de las concesiones de ciudadanía latina o romana. Este expediente aplicado de forma un tanto cicatera a lo largo del siglo II a.C. fue utilizado posteriormente con profusión a lo largo del siglo siguiente en la medida en que los problemas de Italia repercutieron en Hispania. Tras las guerras civiles que auparon al poder a César y Augusto ciudades enteras que se habían colocado en su bando fueron honradas con el derecho latino y, automáticamente, comenzaron a organizarse

a imagen y semejanza de Roma. Paralelamente los romanos fueron fundando colonias, en las que asentar a sus veteranos de guerra y a miembros de la plebe de la capital.

A principios de la era cristiana existía un amplio tejido urbano en la zona de la actual Andalucía, costa mediterránea y valle del Ebro en el que se intercalaban ciudad indígenas regidas según sus formas tradicionales, cada vez más influenciadas por los modos romanos, junto a otras localidades ya constituidas como municipios romanos. Situación inversa era la que se presentaba en el interior, donde las ciudades indígenas eran numéricamente muy superiores pero ya encontramos municipios situados estratégicamente que sirven los intereses romanizadores del poder.

Las noticias de Estrabón, Plinio y Ptolomeo¹ muestran el continuo crecimiento numérico de los municipios romanos, gracias a las decisiones de los emperadores flavios. El último de estos autores ya sólo habla de *civitates*. Primeramente fue Vespasiano (69-79 d.C.) quien tomó la decisión de conceder el *ius latii* a los hispanos y años después su hijo Domiciano (81-96 d.C.) emitió las leyes municipales hispanas que han llegado hasta nosotros: las correspondientes a las localidades de Irni, Malaca, Urso y Salpensa. Las incuestionables semejanzas entre todas ellas hacen pensar en la existencia de una *lex Flavia municipalis* que sirvió de modelo en la que se basaron todas las leyes municipales posteriores².

1.2. Estructura municipal

El espejo de estas ciudades no es otro que el existente en la propia Roma que se ha trasladado con pequeñas modificaciones y que se prolongará casi incólume hasta comienzos del siglo IV. Sólo las injerencias imperiales personificadas en la figura del *curator civitatis* suponen un cambio de cierta entidad. Esta intervención está motivada por la crisis económica que comienza a asomarse a mediados del siglo II y que se prolongará con altibajos durante el resto del siglo y el siguiente.

El municipio romano está formado por tres instituciones: el pueblo, el senado y los magistrados. El pueblo (*populus*) es un concepto más reducido que el actual, y está compuesto exclusivamente por los *cives* o *municipes*, ciudadanos con plenos derechos políticos y que figuran inscritos en el censo; quedando fuera de él los *incolae*, ciudadanos de otras ciudades pero que residen permanentemente en la ciudad quienes pueden votar en las elecciones pero no son elegibles y los libertos autóctonos. Su principal función es la

¹ *Geografía* – fechada entre el 29 a.C. y el 7 d.C. –, *Historia Natural* – finalizada el año 77 d.C. – y *Geografía* – c. 100 d.C. –, respectivamente.

² La transcripción de estas leyes municipales ha sido realizada por A. D'ORS, en varios trabajos: *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953; *La ley Flavia Municipal (Texto y comentario)*, Roma, 1986 y *Lex Irnitana (Texto bilingüe)*, Santiago de Compostela, 1988. Una aproximación a la estructura municipal puede consultarse en la primera obra, pp. 135-166.

elección de los magistrados por votación dirigida por los duunviros en las asambleas de los comicios.

El senado (*senatus*, curia u *ordo decurionum*) es el órgano representativo de la élite de la aristocracia municipal. Tras la reorganización de la sociedad llevada a cabo por Augusto se constituyen en el último de los escalafones en que se subdividen los estamentos privilegiados. La pertenencia está regulada por el derecho público y obliga al cumplimiento de una serie de requisitos. En primer lugar aparece el aspecto económico, el decurión ha de poseer un patrimonio determinado con el que hacer frente a la *summa honoraria* o cantidad que aporta al erario municipal en el momento de su nombramiento, así como otros importes de carácter extraordinario que se destinan a sufragar servicios o espectáculos públicos. Asimismo, viene obligado a residir en la localidad o en sus cercanías, en un perímetro no superior a una milla. La pertenencia a este organismo se consigue por medio de tres procedimientos: la *adlectio*, decisión con la que se promocionaba a un individuo y que tiene lugar fundamentalmente en el momento de la fundación del municipio y mediante la cual se conforma la primera curia, las elecciones reguladas en cada *lex municipalis* y el ejercicio de una magistratura. Una vez obtenida la condición de decurión, ésta tenía carácter vitalicio.

No existía un calendario previo de reuniones de modo que la curia se reunía por decisión de los duunviros a medida que la acumulación de asuntos hiciera precisa la toma de decisiones para solucionar los mismos. Las funciones encomendadas a estos organismos son amplísimas correspondiéndoles la dirección política y social del municipio, tomando las decisiones más relevantes para la localidad a propuesta de los duunviros –*Lex Irmitana*, en adelante L. Irn., 31, 39, 43, 76, 77, 79,...– Los decuriones confirman los resultados electorales y promocionan a sus conciudadanos integrándoles en la curia, nombran a los magistrados y sacerdotes municipales. Controlan las decisiones de los magistrados y resuelven las quejas que se presentan contra su actuación. Fiscalizan la hacienda municipal y administran todos los intereses del municipio. Organizan las milicias locales y modifican los límites del territorio. Deciden sobre la construcción de edificios y obras públicas e imponen las prestaciones personales que corresponde a cada *municipe*, *incolae* o simple poseedor de bienes inmuebles en la ciudad-, en relación con lo anterior fijan las indemnizaciones que correspondan a quienes se vieran afectados por su desarrollo –L. Irn. 82–. Asumen la representación de la ciudad frente a otras ciudades e instancias de la administración provincial y central. Conceden honores y nombran patronos. Con el paso del tiempo la curia concentrará toda la administración municipal en sus manos.

Los magistrados se encargan de la administración y de la toma de decisiones que afectan el día a día del municipio bajo las directrices emanadas de la curia. El ejercicio de las magistraturas se considera un honor, no se perciben emolumentos por la dedicación a las mismas y además se está obligado a la aportación de una *summa honoraria* como en el caso de los decuriones. La gratuidad complementada con la colegialidad –dualidad– y la

anualidad se constituyen en las tres principales características que definen a estos cargos. El acceso a los mismos se produce de forma democrática en elecciones anuales en las que se exigen determinados requisitos personales y económicos para poder presentarse. Las magistraturas se estructuran de forma escalonada siendo preciso el desempeño previo de una para poder acceder a otra que se considera superior. Es el denominado *cursus honorum* que obliga a seguir un orden determinado: primero la cuestura, posteriormente el edilato, para culminar la carrera política con el duunvirato. En ocasiones, particularmente en los municipios, se da el caso de que los duunviros se fusionan con los ediles en un colegio común dando lugar a los cuatorviros o *IIIviri iure dicundo*.

Los duunviros (*duumviri, IIviri iure dicundo*) eran los cargos más importantes en la estructura municipal y dirigían la vida administrativa y política. Entre sus funciones más importantes hay que destacar la convocatoria y presidencia de la curia, presentando los asuntos a debatir. Supervisan el normal desarrollo de la administración, particularmente la gestión de los magistrados menores. Se encargan de la construcción y reforma de las obras públicas del *territorium* –L. Irn. 82–. Administran las finanzas municipales y controlan los terrenos municipales arrendados –L. Irn. 76–. Dirigen la defensa militar en caso de peligro. Llevan la correspondencia con otras instancias administrativas las mismas y firman los acuerdos que se celebren con ellas. Remiten legaciones y embajadas al exterior y reciben las procedentes de otras ciudades y a las autoridades y miembros de la familia imperial. Nombran a los jueces de la ciudad y supervisan sus actuaciones –L. Irn. 86-89–. Se encargan del nombramiento de tutores –L. Irn. 29– y reciben la manumisión de esclavos –L. Irn. 28–. Vigilan el cumplimiento de las obligaciones religiosas que tenía la ciudad para con los dioses y supervisan a los sacerdotes, señalan los días festivos por motivos religiosos. Proponen el gasto en ceremonias religiosas –L. Irn. 77– y fijan los precios de los suministros de artículos necesarios para el culto. Cuando el ejercicio coincide con el fin del quinquenio les corresponde la revisión del censo.

En ocasiones los municipios ofrecían uno de estos cargos al propio emperador. Éste al aceptar tal honor solía ceder sus funciones a su colega en la magistratura, pero en ocasiones nombraba un representante suyo el *praefecti Caesaris* que pasaba a colaborar en la gestión municipal. En ambos casos el resultado era el falseamiento del poder municipal ya que o bien se perdía el principio de colegialidad³ o bien se permitía la entrada de representantes del poder central quedando la autonomía administrativa en entredicho.

³ La infracción de la legalidad que se cometía en aras de la concesión del honor que se hacía al emperador era más grave si se tiene en cuenta que en caso de ausencia del duunviro por más de un día estaba prevista su sustitución por uno de los curiales.

Los ediles (*aediles*), constituían el peldaño inferior en el *cursus honorum* y desempeñaban tres tareas o *curae* que se pueden ejemplificar en estos términos: *urbis*, *annonae* y *ludorum*. El desarrollo de la primera de estas funciones implica la seguridad pública, incluido el control de los extranjeros, la supervisión de los edificios públicos y privados, el cuidado del pavimento de las calles y el servicio contra incendios. El control de la prestación de servicios y de los horarios de establecimientos públicos como baños, lupanares, hosterías y tabernas. Por la segunda *curae* les incumbía el aprovisionamiento de alimentos y la vigilancia general del mercado, por lo que respecta a la calidad de los géneros, precios, pesos y medidas. En último lugar, organizaban y controlaban los juegos públicos. Tenían asimismo potestades policiales en el ejercicio de estas competencias con la posibilidad de imponer multas y nombrar guardias que las apliquen y continuando con todo ello se les dotaba de jurisdicción para la resolución de litigios que surgieran a raíz de sus actuaciones –L. Irn. 19–. Controlan la prestación de servicios personales para la construcción de obras públicas –L. Irn. 83–. Por último, encontramos a los cuestores encargados de la gestión del tesoro municipal. Actúan como tesoreros, reciben los ingresos y realizan los pagos y contabilizan los mismos –L. Irn. 20–.

Aunque no considerados como magistrados hay que referirse en último lugar a los jueces y recuperadores que son particulares que actúan como delegados de los duunviros en el ámbito jurisdiccional y son elegidos por ellos en los primeros cinco días de ejercicio de su cargo. Proceden tanto del *ordo decurionum* como de la *plebs*, y se les exigen los mismos requisitos que a los magistrados. Se distribuyen en tres decurias compuestas de igual número de miembros e intervienen en litigios privados de cuantía inferior a 1.000 sestercios, así como en aquellos de tipo penal que no afecten a la vida o libertad de las personas –L. Irn. 86–. En los asuntos de carácter privado el juez es propuesto por mutuo acuerdo de las partes entre cualquiera de los pertenecientes a una de las tres decurias, y en caso contrario se recurre a un complejo sistema de recusaciones –L. Irn. 87–. En otros casos es nombrado por duunviros o ediles –L. Irn. 84–.

En ocasiones el juez único es sustituido por un tribunal colegiado, la *lex irnitana* no especifica exactamente cuáles, limitándose a señalar que seguirían los patrones existentes en Roma –L. Irn. 89–. En Roma, este tribunal estaba formado corrientemente por tres o cinco integrantes, nombrados por el pretor, y e intervenía en las causas donde una de las partes era un extranjero y, sobre todo a partir de Augusto, en los procesos de libertad.

Esta estructura organizativa no sufrió modificaciones hasta tiempos de Trajano en que aparece el *curator rei publicae* como delegado del poder imperial que se enviaba a determinadas ciudades con carácter extraordinario. El *curator* va a ir acaparando funciones de todos los magistrados y llegará en un momento posterior a despojarles de todas sus atribuciones. En un principio se encargaba de la representación de la ciudad ante la administración imperial y la protegía de posibles abusos de autoridades superior-

res. El resto de las funciones se ceñían fundamentalmente al ámbito económico, vigilando los presupuestos municipales, velando por la prosperidad y conservación del patrimonio, se encargaba del abastecimiento y de los trabajos públicos, etc. El *curator* era nombrado por el gobernador de la provincia, aunque, quizás, a propuesta de la curia ya que al culminar su carrera solía integrarse en ella.

A medida que transcurre este siglo II d.C. los pequeños detalles que indicaban el comienzo de la decadencia del municipio romano clásico se perciben cada vez con más nitidez lo que obligó a una intervención más directa de la autoridad central en la gestión del mismo. Un fragmento de una *lex gladiatoria* de Marco Aurelio limitaba los gastos en los espectáculos de gladiadores y pretendía evitar el continuo dispendio que afectaba a los miembros de unas curias cada vez más renuentes a cumplir con sus funciones tradicionales. Un paso más lo dio Septimio Severo cuando suprimió la prohibición que impedía repetir en el cargo de duunviro hasta que no transcurriera un lustro desde que se ejerció por última vez. Desde ese momento simplemente se impedía el desempeño en períodos consecutivos (*Digesto* 50.1.18). Las magistraturas habían dejado, por tanto, de ser apetecidas por las élites locales. Algunos autores⁴ mantienen que las magistraturas desaparecieron a lo largo del siglo III d.C, y que las curias se encontraban vacías. Las menciones posteriores a las mismas indican únicamente la pervivencia de una serie de titulaciones sin ninguna trascendencia administrativa, ni poder político. Hacia el año 222, Dión Casio proponía una reducción de los gastos en obras públicas y en festivales organizados por las ciudades.

2. - El municipio tardorromano y el municipio visigodo (siglos IV-VIII)

2.1. Crisis del modelo urbano

Tras la gran crisis que supuso el siglo III, particularmente los años de la anarquía militar, la extraordinaria figura de Diocleciano (284-305) emergió para reformar el Imperio romano desde sus propias bases. Sus reformas económicas, administrativas militares continuadas al poco por otra no menos relevante figura como fue Constantino (306-337) dieron nuevos bríos a Roma y permitieron su supervivencia por casi doscientos años más. Las ciudades volvieron a alcanzar de nuevo una importante papel en la vida económica del imperio, aunque sin alcanzar las cotas ya lejanas del siglo I. El panorama urbano que nos encontramos en la Península en estos momentos es una continuación del existente en períodos precedentes. Una zona que comprende la Bética, la costa mediterránea y el valle de Ebro está sur-

⁴ P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle*, París, 1955. Con anterioridad ya habían esbozado argumentos semejantes J. DECLAREUIL «Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romaine», *Revue d'histoire du Droit*, 31, 1907, pp. 632-633; y N. D. FUSTEL DE COULANGES, *L'invasion germanique et la fin de l'empire*, Paris, 1890, p. 64.

cada por un denso tejido urbano y los modos de vida romanos están plenamente aceptados. Por el contrario, en el Norte y el Noroeste continúan perviviendo las formas de agrupación indígenas y el número de ciudades es muy reducido dedicándose fundamentalmente a cuestiones administrativas y militares⁵. Unas y otras pueden considerarse de mediano o pequeño tamaño si las comparamos con otras radicadas en la parte occidental del imperio, las ciudades galas como Lyon, Vienne, Autun,... son varias veces mayores que las hispanas⁶. La comparación es aún más desproporcionada frente a la parte asiática o africana.

El año 409 por los pasos occidentales de los Pirineos entraron a sangre y fuego los invasores bárbaros quienes sometieron a la Península a cincuenta años de continuos saqueos, sólo frenados por esporádicos acuerdos – *foedus*– firmados con la lejana autoridad imperial y garantizados por las continuas intervenciones de los *foederati* visigodos. Mientras los recién llegados optaron mayoritariamente por asentarse en el campo, los hispanorromanos en la medida de lo posible prefirieron acogerse a la precaria seguridad que les ofrecían los recintos amurallados antes que permanecer sometidos a la arbitrariedad bárbara. Aún así la nómina de ciudades periódicamente ocupadas y reiteradamente aliviadas de sus riquezas es amplia y sintomática. No hay más que ver la categoría de las mismas: Braga (419), Sevilla (425, 428), Cartagena (425), Mérida (440), Lérida (449), Astorga (457), Coimbra (467), etc.

Ahora bien, esta inestabilidad política lejos de perjudicar a las ciudades parece ser que las vivificaron, eso siempre que no quedaran destruidas por alguno de los pueblos mencionados. Sánchez-Albornoz formuló su sospecha de «que durante la primera mitad del siglo V el clima político en que vivió mucha parte de Hispania, antes fue favorable que adverso a la perduración en ella de la organización municipal». El estatus de libertad que gozó una Hispania prácticamente abandonada a su suerte por el gobierno de Roma hizo de la organización municipal la única estructura de gobierno que se mantuvo en la Península en todo momento⁷.

La derrota sufrida en el 456 por el rey suevo Requiario a manos del visigodo Teodorico II, que actuaba al servicio de Roma, trajo consigo un período especialmente favorable para el desarrollo del autogobierno municipal en buena parte de la Península. A partir de este momento los suevos que-

⁵ En Oviedo se ha encontrado un fragmento de una *lex municipalis*, que coincide con el precepto 66 de la *lex ursonensis* y que indicaría la posible existencia de una ciudad en el territorio de los astures transmontanos. Por otra parte, en la narración de los hechos del año 468, Hidacio alude al municipio de Lais, cercano al Miño: «In flumine Minio de municipio Lais» (Hydatius, *Chronicon*, Olim, 312,II).

⁶ J. M.^a LACARRA, «Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V hasta el X», *Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, VI (1958), pp. 320-321

⁷ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El gobierno de las ciudades de España del siglo V al X», *Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas*, t. 2, Madrid, 1976, p. 1082.

dan reducidos a la zona NO, mientras que Roma sólo controla zonas de la Tarraconense y la Cartaginense, básicamente el valle del Ebro y las costas mediterráneas. El resto del territorio, incluidos aquellos núcleos urbanos en los que ha quedado acantonada una guarnición visigoda, queda en situación de virtual independencia controlado por las oligarquías locales y la iglesia.

La derrota de Vouillé en el año 506 supondrá la desaparición del reino visigodo de Tolosa y el inmediato traslado de la mayoría de la población goda a la Península. Abandonadas las esperanzas de recuperar los perdidos territorios no quedará a los visigodos sino extender su influencia por las áreas autónomas del interior y de la Bética. Los problemas internos entre las facciones de la aristocracia visigoda y la presión externa de merovingios y bizantinos frenarán este proceso de control que no se culminará hasta el reinado de Leovigildo.

A lo largo de este siglo VI ambas comunidades, godos e hispanorromanos, continúan con su establecimiento separado, aunque progresivamente los primeros se van incorporando a la vida urbana en número relevante como demuestra la existencia de episcopados arrianos en las principales ciudades: Lugo, Oporto, Barcelona, Valencia, Mérida, Toledo,... Junto a las antiguas ciudades surgen otras nuevas al calor de necesidades militares – Victoriacum (581) y Ologicus (621)– o políticas –Recópolis (578), Itálica (584)–. Las fuentes literarias muestran la persistencia del régimen municipal en estas ciudades hispanogodas. La carta del obispo Montano a Toribio, datada a principios del siglo VI, menciona los municipios de Segovia, Buitrago (?) y Coca. San Ildefonso, en la semblanza que hace de la vida de Asturias en *De viris illustribus* (530-560), se refiere al de Complutum; y San Braulio, a la hija de un curial y al *senatus* de Cantabria en la *Vida de San Millán de la Cogolla* († 564).

Pero esta potencia urbana se ve frenada en seco. Las cada vez más constantes calamidades demográficas en forma de pestes y catástrofes naturales se suceden y la crisis socioeconómica se asienta en la Península con carácter permanente. Las ciudades desaparecen en número creciente y pierden su condición de sedes episcopales – Cástulo, Valeria, Segóbriga, Oreto, Mentesa,...– y alguna tan relevante como Cartagena es literalmente destruida por los visigodos tras ser tomada el año 615 a los bizantinos. Tarragona y Valencia pierden importancia y muchas pequeñas ciudades – Ampurias, Osma, Amaya, Oca, Palencia,...– quedan reducidas a meros villorrios, aunque siguen manteniendo el obispado.

Este panorama urbano de Hispania esbozado de forma somera va a asistir a una transformación paulatina y total de las estructuras municipales de modo que el sistema de gobierno existente a la llegada de los musulmanes ya no tiene nada que ver con el sistema clásico instaurado en su momento por Roma.

2.2. Magistraturas municipales

Las ciudades han perdido su soberanía «ya no son reconocidas como sujetos políticos perfectos, sino como simples células instrumentales al servicio del Estado. Antes, su sustantividad formal consistía en ser Estado en sí mismas, ahora consiste en existir para el Estado⁸». Las tradicionales magistraturas: *duumviri*, *aediles*, *quaestores*,... van a ir decayendo a lo largo del siglo IV para desaparecer a comienzos del siglo V⁹. La última cita de una de ellas corresponde al concilio de Elvira. En su canon 56 se prohíbe la entrada a la iglesia al duunviro durante el ejercicio de su cargo¹⁰. El Edicto de Milán (313) y la política filocristiana llevada a cabo por Constantino dieron un papel cada vez más relevante a la Iglesia en la vida cotidiana lo que dejó fuera de lugar esta prohibición establecida en momentos de enfrentamiento con la autoridad imperial. Las tareas de los magistrados fueron asumidas por el *curator* y por la curia. Estas instituciones municipales son las únicas que aparecen en el *Codex Theodosianus* —en adelante C. Th—.

El *curator* se convirtió en la época de Diocleciano y de Constantino en una magistratura permanente cuyo objetivo general era poner en orden las finanzas municipales y asegurar el buen funcionamiento de la administración local. Su creciente importancia ha de incardinarse dentro de las grandes reformas que estos emperadores llevaron a cabo en la administración y en la estructura territorial del imperio. No actuar a nivel municipal conllevaba desestabilizar todo el sistema desde su misma base, al confiar el régimen municipal a estructuras obsoletas. La autonomía del municipio clásico no cuadraba con el régimen piramidal instaurado en el primer tercio del siglo IV y que desde Roma controlaba firmemente una secuencia decreciente de autoridades territoriales: prefectos del pretorio, vicarios de diócesis, gobernadores provinciales y *curatores* municipales. El imperio tardorromano quedaba así constituido en un sistema institucional absolutamente centralizado donde no tenían cabida organismos con excesiva libertad dentro de su ámbito como eran los magistrados clásicos. Entre las funciones asignadas al *curator* existían una de suma importancia como era controlar al único organismo superviviente de la antigua administración local: la curia. Sus cada vez mayores injerencias en la actuación de la misma unidas a la desconfianza que causaba su actividad informadora motivaron numerosas quejas por parte de los curiales. Estos acabaron logrando en momentos de debilitamiento del poder central la elección de este cargo entre sus miembros.

⁸ ESPINOSA, U., «La ciudad en el valle del Ebro durante la Edad Media», *VII Semana de Estudios Medievales, Nájera 29 julio a 2 agosto 1996*, Logroño 1997, pp. 37-59, en p. 42.

⁹ Las últimas menciones en el *Codex Theodosianus* a los duunviros corresponden a dos constituciones de los años 412 y 413. La primera dirigida a Eucario, procónsul de África —C. Th. 12,1,174— y la segunda a Leoncio, prefecto del pretorio de Iliria —C. Th. 12,1,177 pr.—. El edil aparece en única ocasión en una constitución correspondiente a los años 386-388, período en el que Nebridio fue prefecto de Constantinopla —C. Th. 3,4,1—.

¹⁰ LVI. *De magistratibus et dumviratis*: «Magistrados vero uno quo agit dumviratum, prohibendum placet ut se ab ecclesia cohibeat» (J. VIVES, edición preparada por... con la colaboración de T. MARÍN MARTÍNEZ y G. MARTÍNEZ DÍEZ, *Concilios visigóticos e hispano-romanos, España Cristiana, textos*, t. 1, Barcelona-Madrid 1963, p. 11.

Una figura nueva fue el *defensor plebis* o *defensor civitatis*. Su partida de nacimiento parece ser la Constitución emitida por Valentiniano I y Valente el 27 de abril del 364 y dirigida a Probo, Prefecto del Pretorio –C. Th. 1,29,1–. En ella se le ordena el nombramiento de personas de reconocida probidad moral para que actúen en las ciudades de Iliria como *defensores* de los más desfavorecidos frente a las presiones de los poderosos. Otras disposiciones en los años siguientes extienden su vigencia por la parte occidental del Imperio. Conforme a su carácter protector se encargaba de juzgar los delitos de escasa importancia económica en los que se veían implicados los *humiliores*: pago de deudas inferiores a cincuenta *solidi*, reclamación de esclavos fugitivos y pago indebido de impuestos –C. Th. 1,29,2 (año 365)–. También protegía a los ciudadanos frente a los abusos judiciales y a la incompetencia de los abogados –C. Th. 1,29,5 (año 370)–. Otra función más general parece entenderse de forma implícita en las distintas constituciones. El emperador pretendía que el *defensor* se constituyera en un auténtico patrono de la plebe con la única y específica misión de protegerles y evitar que cayeran en la órbita de dependencia de los *potentes*. El *defensor* velaría así por el mantenimiento de los lazos de carácter público entre el emperador y sus súbditos que de forma lenta e inexorable iban sustituidos por otros de carácter privado. Para compensar la falta de curiales que se da en algunas ciudades una Constitución de Arcadio y Honorio del 415 establece que el *defensor civitatis* deberá de presidir la *insinuatio* de las donaciones –C. Th. 8,12,8 (año 415)–.

Inicialmente los defensores eran designados por el Prefecto del Pretorio, entre personas de rango senatorial que hubieran desempeñado cargos importantes en la administración –C. Th., 1,29,1 (año 364); C. Th. 1,29,2 (año 365); C. Th. 1,29,4 (año 368)–, prohibiéndose específicamente la elección de decuriones para el cargo –*Codex Iustiniani* 1,55,2 (años 368-373)–. A finales de este siglo IV, una constitución de Teodosio I y Honorio modifica el sistema de nombramiento, los defensores serán elegidos por las ciudades, castigándose duramente a quien pretendiera obtener este cargo y utilizarlo en beneficio propio –C. Th. 1,29,6–. Sin embargo, poco después se limitó el derecho de sufragio activo a las élites ciudadanas: obispos, *honorables*, *poseedores* y curiales –*Codex Iustiniani* 1,55,8 (c. 409)–.

El panorama que nos presenta el *Breviario de Alarico* o *Lex Romana Visigothorum* –en adelante LRV– de las magistraturas municipales en el año 506 no difiere en gran medida del correspondiente al siglo V. Las magistraturas tradicionales: *duumviri*, *aediles*, *quaestores*,... no aparecen como tampoco lo van a hacer en ninguna otra fuente visigoda posterior, ni literaria ni legislativa. Continúan figurando al frente de la misma el *curator* y el *defensor* y surgen dos figuras de nuevo cuño: el *susceptor* y el *exceptor*, a quienes el texto presenta como encargados del cobro de los tributos, tanto por vía ordinaria como ejecutiva –LRV 12,2,1–. Eran elegidos entre los curiales y, como norma general, ejercían sus funciones a lo largo de un único año –LRV 12,1,2–.

Para Sánchez-Albornoz¹¹ el *curator* había ya perdido su anterior significación; el *Breviario* no le atribuía ninguna función concreta e, incluso, desaparece en una constitución –LRV 1,10,1– cuando originalmente aparecía mencionado en unión del *defensor* en la *interpretatio* teodosiana –C. Th. 1,29,6–. Su designación se efectuaba entre aquellos decuriones que hubiesen desempeñado todos los cargos de la curia y participado en todas sus cargas –LRV 12,1,4–.

El *defensor* continuaba ejerciendo su función principal como protector de la plebe –LRV 8,2,1 y LRV 1,10,2–, aunque parece que tras la celebración del Concilio de Toledo III (589) la perdió en favor de la Iglesia. Habiéndose convertido las élites laicas y eclesiásticas arrianas a la ortodoxia romana dos años después de la conversión real, Recaredo reservó para la Iglesia la tradicional defensa de las clases oprimidas, cuanto menos en el aspecto fiscal¹². Se pretendía la celebración de un concilio anual en cada provincia donde se fijara la tarifa de la *adaeratio*, el reparto entre los contribuyentes de la masa impositiva y se constituyera un tribunal mixto compuesto por los obispos y los magnates para resolver las arbitrariedades fiscales. Asimismo se despojó al *defensor* de su antigua autoridad policial que pasó a los *iudices* –C. Th. 1,29,8–. Perdidas estas competencias el *defensor* continuó desarrollando su función jurisdiccional, pero sólo en cuestiones criminales menores, y no en las civiles como ocurría en época tardorromana –LRV 2,1,8–. Su presencia validando los actos de jurisdicción voluntaria ya aparece mermada pues aunque seguía asistiendo con la curia al inventario de los bienes de menores –LRV 3,19,4–, son de ordinario el *iudex* y la *curia* quienes figuran, en las otras leyes que, referentes al tema, aparecen en el *Breviario* validando los actos de jurisdicción voluntaria. Tampoco parece segura su tradicional intervención en las *gesta municipalia*, pese a haberla mantenido en las Galias, según acreditan sendas constituciones de los años 409 –C. Th. 11,8,3– y 412 –C. Th. 10,22,6–.

A fines del siglo VI una ley de Recaredo trata sobre el modo de nombramiento del *defensor* legislando a este particular que tanto el *numerarius* como el defensor pueden ser elegidos «ab episcopi vel populis» y que en estos casos su período de actuación no está limitado a un año sino por el plazo para el que han sido nombrados –*Liber Iudiciorum*, en adelante LI, 12,2,1–.

¹¹ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El gobierno...», cit., p. 1086.

¹² Canon XVIII: «Iudices vero locorum vel actores fiscalium patrimoniorum ex decreto gloriosissimi domini nostri simul cum sacerdotali concilio autumnale tempore die calendarum novembrium in unum conveniant, ut discant quam pie et iuste cum populis agere debeant, ne in angariis aut in operationibus superfluis sive privatum onerent sive fiscales gravent. Sint etenim prospectatores episcopi secundum regiam admonitionem, qualiter iudices cum populis agant, ut aut pios praemunitos corrigant aut insolentias forum auditibus principis inintescant; quod si correptos emendare nequiverint, et ab ecclesia et a comunione suspendant: a sacerdote vero et a senioribus deliberetur, quid provincia sine suo detrimento praestare debeant iudicium».

La figura del *defensor* está atestiguada hasta mediados del siglo VII como lo atestigua una ley de Recesvinto (649-672) –LI 2,1,25– en la que se sigue mencionando su actuación en causas penales. No obstante, su fin debía estar cercano. Los preceptos de este texto fechados en tiempos de Wamba, Ervigio y Égica, referidos a los *iudices* o a los *curam publicam agentes*, inclinan a creer que desaparecieron a finales de este siglo VII siendo sustituidos por el *comes civitatis* y sus delegados.

2.3. *Comes et iudex civitatis*

El *comes civitatis* es una creación de origen romano nacido de las especialísimas circunstancias de inseguridad y anarquía que se daban en los últimos años del imperio. Este personaje está atestiguado por primera vez en la Galia. Entre los años 451 y 472, las ciudades y sus *territoria* de Tréveris, Marsella y Autun quedan bajo la autoridad de estos oficiales, miembros de la comitiva imperial¹³. Este *comes* va a estar dotado de amplias competencias, reuniendo en su persona funciones administrativas, fiscales, judiciales y militares. Se trata de una solución de emergencia, una única autoridad que aúne los distintos ámbitos de actuación de la tambaleante autoridad romana para tratar de controlar el impetuoso empuje de los reinos bárbaros que campan a sus anchas. Entre los visigodos también está atestiguada su presencia en el *Codex Euricianus* –Frag. 322–, elaborado según Von Schwerin entre el 469 y el 480.

De acuerdo con Sánchez-Albornoz¹⁴, este oficial parece haber sido originariamente un *iudex* que actuaba en las ciudades como delegado temporal del gobernador provincial, al que debido a las circunstancias le han sido ampliadas sus funciones y su período de ejercicio. La conjunción de varias leyes distribuidas en los principales cuerpos legislativos visigodos –CE 322; LRV 3,2,1; LI 10,1,16– le facultan para dar una respuesta afirmativa, como también lo hace la expresión *comes vel iudex civitatis* con la que continuamente se refiere el *Liber Iudiciorum* a este máximo responsable de las ciudades hispanogodas durante los siglos VI y VII. Sólo partiendo de una primitiva autoridad denominada *iudex* que, en ocasiones, era elegida entre los miembros de la comitiva real se puede entender esta doble denominación.

Paulatinamente los *iudices* van a ir compartiendo, cuando no absorbiendo, funciones tradicionalmente desempeñadas por las curias y los magistrados municipales. Con la curia intervenía en la tutoría o curatoría de menores –LRV 3,17,3–, recibía las acciones y excepciones en negocios a ellos concernientes –LRV 2,4,1–, aseguraba los derechos del póstumo de un reo –LRV 9,32,2– y asistía a la validación de las donaciones –LRV 8,5,1–. La ley le presenta concediendo a los curiales *vacationem non debitam* y hasta libe-

¹³ Aunque, con cierta frecuencia, en las *Interpretationes* que acompañan a las Constituciones presentes en el *Breviario de Alarico* es posible encontrar a los *iudex* acompañando a las magistraturas municipales Sánchez-Albornoz no se pronuncia por su presencia en el Imperio tardorromano («El gobierno ...», cit., p. 1083)

¹⁴ *Ibid.* p. 1086.

rándoles de su oficio –LRV 12,1,1– y le muestra, castigándoles, *in corpore et in sanguine* –LRV 12,1,47–. Le correspondía conocer de la elección de los *exactores* y *susceptores* de la urbe –LRV 12,2,1– y penar las irregularidades que en ella pudieran cometerse –LRV 12,2,2–. Ante él podían apelar los contribuyentes, de la *descriptio polyptici* –LRV 13,2,2–. Otro precepto del *Breviario* se refiere a los «iudicibus, qui provincias administrant, vel etiam hiis quibus civitates vel loca commissa sunt» –LRV 3,2,1–.

Las funciones fiscales ya estaban siendo ejercidas por los jueces de las ciudades con anterioridad al año 589 como figura en el antedicho canon XVIII del Concilio de Toledo III y en el canon XXI que prohíbe la opresión tributaria de los siervos eclesiásticos: «Quoniam cognivimus in multis civitatibus ecclesiarum servos et episcoporum vel omnium clericorum a iudicibus vel auctoribus publicis in diversis angariis fatigari,...». Así pues los *iudices* estaban casi completamente caracterizados en tiempos de Leovigildo quien procedió a su difusión definitiva dentro de las profundas reformas administrativas acometidas en su reinado¹⁵.

Además, a partir del año 589, Concilio III de Toledo, los *iudices* también van a recibir la misión de apoyar al episcopado en la defensa de la ortodoxia católica persiguiendo la idolatría y destruyendo las imágenes –Canon XVI–.

2.4. Curia municipal

Al igual que las magistraturas tradicionales, las curias municipales entran a lo largo del siglo IV en una crisis profunda que las llevará a su paulatina desintegración. Poco a poco, de forma imparable las curias van perdiendo prerrogativas y competencias a favor de los nuevos oficiales que aparecen en los últimos momentos del imperio romano y durante el desarrollo del reino visigodo, de modo que a mediados del siglo VI pueden darse por desaparecidas. El reflejo más claro de la decadencia está en la progresiva apertura a miembros que en el Alto Imperio jamás se hubiera pensado en considerarlos como posibles integrantes de la institución. El número de *civites* que cumplan los requisitos necesarios se ha reducido en tal manera que a comienzos del siglo IV, Majencio castigará a los «supersticiosos» cristianos obligándoles a formar parte de las curias y a asumir sus obligaciones¹⁶. En el año 398 serán, a su vez, los cristianos quienes revertirán esta carga sobre los miembros de otras confesiones: paganos, herejes y judíos –C. Th.12,1,157 y C. Th. 12,1,158–. Cinco años antes, se permitía incluso a los plebeyos su entrada en las curias –C. Th. 12,1,133–. Como tan drásticas medidas parece que no servían para mucho se complementaban con otras que limitaban el acceso a los bienes familiares recibidos por vía sucesoria.

¹⁵ Ibid., p. 1094.

¹⁶ F. JORDÁN, «Las Curias en el reinado de Honorio (395-423 d.C.). Tradición y mutación», *La tradición en la Antigüedad Tardía, Antigüedad cristiana*, XIV (1997), pp. 97-133.

Para que las hijas pudieran recibir los bienes dejados en testamento por un padre curial, el marido estaba obligado a incorporarse a la curia –LRV 12,1,7–. Igual obligación recaía en los hijos naturales de los curiales si querían recibir los bienes legados por sus padres –LRV NT II 11,1–. Los religiosos que han abandonado voluntariamente el sacerdocio o han sido expulsados del mismo pasan automáticamente al estado curial –LRV 16,1,5–. A su vez, la salida de las mismas era extremadamente complicada. Teóricamente ninguna autoridad podía eximir a un curial de las obligaciones inherentes a su pertenencia a la curia –LRV 12,1,1–, y sólo en un caso se permitía su salida de la curia. Nada menos que trece hijos era considerado suficiente aporte demográfico a la patria para no ser llamado a la curia –C. Th. 12,1,55–. Pero ni aún así era imposible en determinadas ciudades formar una curia con un quórum mínimo, por lo que se hace necesario reducirlo a dos tercios de su dimensión original –C. Th. 12,1,84 (año 381)–.

La participación ciudadana en la elección de sus magistrados ya desaparecida en el siglo IV implicó que el nombramiento de los pocos magistrados que quedaban: defensores, exactores y susceptores, correspondiera a las curias. La inscripción de las donaciones, los testamentos y demás escrituras pasaron a inscribirse en estas *gesta municipalia* que alcanzaron gran desarrollo –LRV 4,4,4–. Los actos de jurisdicción voluntaria quedaron también adscritos a las curias. Se requería su autorización en las adopciones¹⁷, la emancipación –LRV 5,1,2–, el nombramiento de tutores –LRV 3,17,3–, el inventario y la venta de bienes de menores –LRV 3,1,3–. Paralelamente, se les dotaba en una cierta jurisdicción en el ámbito civil, pudiéndose ejercer ante ellos acciones o excepciones en los negocios de menores –LRV 2,4,1–. Por último tenían encomendadas competencias de carácter tributario. Los curiales organizaban el reparto de los impuestos y de las prestaciones personales que correspondían a los habitantes de la *urbs* y su *territorium* siendo responsables con su patrimonio de la recaudación efectiva de las cantidades asignadas¹⁸.

Aparentemente la relación de sus funciones da una falsa imagen sobre la verdadera realidad de la institución. Ésta continuaba su particular cuesta abajo y cada vez era más complicada su existencia. El *Breviario* permite que el tradicional período anual de ejercicio del cargo se quiebre, la falta de curiales para ocupar las magistraturas obliga a permitir en determinados casos el desempeño bianual –LRV 12,2,2–. Más claro aún se presenta la cuestión en los *Fragmenta Gaudenciana* –Fr. XV– que permiten que las donaciones puedan legalizarse en otras ciudades: «Et donatio ipsa ante curiales deferatur. Quod si in civitate eadem curiales non possunt inveniri, ad aliam civitatem eadem curiales non possunt inveniri, ad aliam civitatem ubi inveniantur, deferatur¹⁹».

¹⁷ LRV 5,1,2. Vid. también LRV 3,17,2; LRV 3,19,4; LRV 8,5,1 y LRV 9,32,2.

¹⁸ LRV 12,2,1. Vid. también entre otros LRV 8,1,1; LRV 11,7,1, LRV 12,2,2.

¹⁹ *Monumenta Germaniae Historiae. Leges*, I, Hannover-Leipzig, 1902, p. 471. La importancia de la cita queda un tanto matizada ya que los investigadores no se han puesto de acuerdo sobre su antigüedad. No es lo mismo constatar la decadencia de las

La curia recibió la puntilla en el momento en que los reyes visigodos desarrollaron un sistema impositivo adecuado a sus escasas necesidades y controlado férreamente por el poder central. Las competencias tributarias eran su verdadera razón de ser, así que una vez perdidas la desaparición de las curias es un proceso irreversible. En el Concilio de Toledo XIII, celebrado el año 683, al relacionarse los integrantes del aparato fiscal ya no aparece ninguno perteneciente a la administración local: «Certe si quisquis ille dux, comes, tiufadus, numerarius, villicus aut quicumque curam publicam agens tributa exacto sibi comiso...» Paralelamente las prácticas jurídicas recogidas en el *Breviario* habían ido simplificándose de forma que se evitaba la autorización o, incluso, la mera presencia de los miembros de la curia. Las *Fórmulas Visigodas*, en el primer tercio del siglo VI, permiten la emancipación por una simple carta (FV 34) y en las donaciones ya no se requería la *insinuatio* (FV 29-31).

Para Sánchez-Albornoz el proceso ya estaba completado en la primera mitad del siglo VII²⁰. Las menciones que por entonces se hace a los *curiales* son debidas a la copia mecánica de modelos antiguos²¹ o por su localización dentro de un contexto literario no erudito²². Acaso aún vivían descendientes directos de los *curiales* en tiempos de Chindasvinto (642-653), pero ya equiparados a simples particulares como pone de manifiesto la autorización para la transmisión de bienes entre ambas clases sociales –LI 5,4,19–, sin más salvedad que se garantice la transmisión a una persona que se pueda hacer cargo de las obligaciones anexas al *fundus* traspasado como era el pago de la contribución rústica y las obligaciones debidas al servicio de correos o *cursus publicus*. No se vuelve a encontrar en las fuentes visigodas ninguna mención a los curiales y el *Edictum de tributis relaxatis* de Ervigio los omite al relacionar los obligados tributarios.

2.5. Asambleas populares. Conventos

Perdido el derecho a la elección de las magistraturas municipales, la participación ciudadana en el gobierno quedó reducida a la nada, y no aparecen en las fuentes ninguna mención a una asamblea urbana, hasta finales del siglo VII. Para esta época aparece el *conventus civitates* cuya actuación es simplemente publicitaria, acabado el concilio provincial en el que se han negociado los impuestos con las autoridades fiscales, el obispo de cada ciudad pone en conocimiento de los vecinos el montante total de impuestos y el reparto de los mismos. Posiblemente una asamblea de este tipo existiera en el imperio tardorromano y por la misma razón organizada por la curia. En

ciudades a mediados del siglo VI como se desprende de la idea de Zeumer de trasladar al reinado de Leovigildo y a la Galia gótica el texto, o adelantarlo cien años como hace Ureña quien los considera restos de un *Edictum Theodorici II Regis*.

²⁰ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El gobierno...», cit., pp. 1097-1098.

²¹ Es el caso de dos *Formulae Visigoticae* (n. 21 y 25).

²² Las *Etimologías* de San Isidoro tratan la curia y las magistraturas municipales, pero también de los *consules*, *praetores*, *tribuno ex plebe*, etc.

el ámbito rural consta la existencia de asambleas con una función más práctica, aunque con un ámbito de actuación muy limitado. Los campesinos hispanorromanos, según San Isidoro, tenían la costumbre de reunirse en asambleas, denominadas *compita* o *conventus rusticorum*, celebradas en los cruces de los caminos²³. Los visigodos, por su parte, también solían celebrar reuniones cuya antigüedad puede remontarse a su asentamiento en la Dacia. Ambas tradiciones convergieron con la llegada de los godos y queda su rastro en la legislación visigoda en leyes que abarcan un amplio rango de fechas, desde alguna *antiquae* leovigildiana hasta otras ya de tiempos de Recesvinto. Orlandis²⁴ deduce de una norma de este monarca –LI 8,5,6– la existencia de dos tipos de asambleas. Una más reducida, formada por los *seniores loci* –ancianos y notables del lugar– y otra de carácter general, el *conventus publicus vicinorum*. La primera tendría un carácter punitivo pudiendo denunciarse en la misma ciertos hechos. El *conventus* tenía una función fundamentalmente publicitaria, ante la ausencia de un organismo donde registrarse los negocios jurídicos, éstos se expondrían en estas reuniones donde alcanzarían un general conocimiento que vendría a tener los mismos efectos legales. También fallaban sobre pequeños problemas de carácter agropecuario como las disputas de lindes, la propiedad de ganados extraviados, etc. En ningún caso, estas asambleas formaban parte de las estructuras municipales teniendo un carácter meramente privado. La resolución de estos conflictos no hay que verla como una función jurídica sino arbitral, que estaba recogida en el *Liber* –LI 2,1,15–.

La única referencia, ya tardía, a una asamblea hispanogoda aparece en la *Crónica Albeldense* cuando relata la condición en que quedaron los «goti qui remanserit in ciuitates ispaniensis». En virtud de los pactos sellados con los musulmanes los cristianos se comprometían al pago de una tributo que sería recaudado por un conde elegido por ellos: «et sic super pactum firmun et uerbum inmutauile descenderunt, ut et homnis ciuitas frangerent et castris et uicis habitarent, et unusquisque ex illorum origine de semet ipsis comites eligerent, qui per omnes hauitantes terre illorum pacta regis congregarentur²⁵».

3. - Las estructuras municipales en la Alta Edad Media (siglos VIII-XI)

3.1. *La situación urbana tras la conquista musulmana*

La invasión en el año 711 de bereberes y árabes, gentes extrañas, ajenas en muy buena medida a la cultura hispanogoda inicia una nueva etapa en el devenir hispano. Son portadores no sólo de una religión diferen-

²³ *Etimologías*, C,II,5

²⁴ *Historia del reino visigodo español*, Madrid, 2003, p. 162.

²⁵ *Crónica Albeldense* XVII 3b (*Crónicas asturianas. Introducción y edición crítica* de J. GIL FERNÁNDEZ; *traducción y notas* de J. L. MORALES; *estudio preliminar* de J. I. RUIZ DE LA PEÑA, Oviedo, 1983, p. 183).

te sino de nuevas ideas sobre la administración, la sociedad, la cultura, etc. que, tras unos primeros momentos en los que respetan las instituciones hispanas, acabarán desarrollando una estructura político-administrativa propia.

Este hecho acabó por dar el golpe de gracia sobre las maltrechas ciudades hispanas. De acuerdo con la *Crónica Albeldense* debió de procederse una reorganización profunda del territorio. Las ciudades que llegaron a acuerdos con el invasor debieron de dismantelar sus defensas quedando así convertidas en zonas abiertas carentes de todo refugio en caso de revueltas. Las ciudades tomadas por la fuerza fueron despojadas de su población cristiana que pasaron a la triste condición de siervos rurales: «omnis quoque ciuitas que illi superarunt, ipsas sunt constrictas a suis omnibus habitante, ipsi quoque sunt serui armis conquisiti²⁶». Aunque ciertamente un tanto exageradas las afirmaciones del cronista el golpe dado a la vida urbana debió ser ciertamente significativo.

En un primer momento, los invasores prefirieron residir en el campo disfrutando de sus nuevas tierras trabajadas por sus recién adquiridos siervos, mientras que una minoría se estableció en las ciudades conformando la élite dirigente y militar y residiendo en las áreas más protegidas desde donde controlarían a los sometidos. Los musulmanes establecidos en las regiones más fuertemente urbanizadas renovaron sus caducas estructuras y la vida ciudadana se desarrolló con fuerza. El resurgimiento económico corrió paralelo al auge urbano. Antiguas y nuevas ciudades se integraron en los circuitos comerciales internacionales. Al-Andalus es en estos momentos la zona más rica y urbanizada de Europa Occidental, sin embargo no conocemos en detalle la estructura administrativa de estas ciudades hasta ya entrada la etapa califal.

Con el transcurso del tiempo, a medida que aumentaron su número, los musulmanes fueron desplazando a los cristianos hacia barrios propios de modo que ambas comunidades se encontraron en todo momento separadas, no sólo mental sino físicamente. En sus zonas los cristianos conservaron sus costumbres y leyes y gozaron de una amplia autonomía sin mayores obligaciones para con el Estado que actuar lealmente y pagar los onerosos tributos que se les impusieran en cada momento. Se conoce con cierto detalle la estructura administrativa de la comunidad cristiana de Córdoba, pero ningún otro testimonio nos permite extrapolarla a otras ciudades. Al frente de la comunidad se encontraba un *comes*, nombrado por el emir, a quien le correspondía la representación de la misma frente a las autoridades musulmanes y, sobre todo, la entrega del tributo. También actuaba como juez de apelación, revisando las sentencias que procedían del *ensor*, quien ejercía como juez de primera instancia en las disputas entre cristianos. Por último, el *exceptor* se encargaba de la recaudación de la capitación o impuesto personal y la contribución territorial.

²⁶ *Ibid.*

Se observa el mantenimiento de las antiguas magistraturas godas pero sólo a efectos competenciales, cambiándose su denominación para subrayar la extinción a todos los efectos del antiguo régimen. La máxima autoridad pierde el término más general de *iudex* para adoptar el de *comes*, que ahora está despojado de toda connotación clientelar u honorífica, pero seguía ejerciendo un papel similar, aunque más reducido. Se recupera la denominación de *ensor*, pero no sus características definitorias, y se le otorgan las competencias judiciales que en tiempos visigodos ejercían varios jueces menores como *vicarios*, *tiufados* y *defensores*. El *exceptor*, figura desaparecida en el organigrama administrativo visigodo y que había sido sustituido por el *numerarius* vuelve a resurgir en estos momentos con sus antiguas funciones.

Mientras tanto en la España cristiana no se puede hablar propiamente de la existencia de ciudades. Los núcleos de resistencia establecidos en las montañas norteñas del Cantábrico y de los Pirineos nunca habían contado con un tejido urbano relevante, fuera en época romana o visigoda. Flavia Navia (Santianes de Pravia), Lucus Asturum (Lugo de Llanera) no superaron el final del Imperio, como parece que tampoco lo consiguió Flavio-briga (Castro Urdiales) el núcleo urbano más importante de la zona. Algunos autores –Barbero y Vigil²⁷– interpretan las menciones que hizo Ptolomeo a la existencia de núcleos urbanos en la zona, como es el caso de Vadina, como entidades tribales asimiladas a efectos administrativos a ciudades. Sí se mantuvo Gigio (Gijón) que debió de alcanzar una cierta relevancia con los visigodos como parece indicar el establecimiento de un gobernador árabe en la localidad. También destacaron Pesicos, ceca visigoda en dos ocasiones y un puerto de la costa, probablemente Santander, que mantenía constantes relaciones con la costa atlántica francesa. Algunas de estas zonas septentrionales controladas por los cristianos habían permanecido en una situación de práctica independencia desde que a comienzos del siglo V la llegada de los bárbaros terminara con la tenue administración romana de esas zonas hasta que Leovigildo ocupó Asturias, Cantabria y las zonas llanas de Vasconia.

Los territorios inmediatamente aledaños, tampoco destacaron durante el período visigodo por su ímpetu urbano y donde la población se desperdigaba siguiendo una pauta poblacional más dispersa. Los centros urbanos más relevantes coincidían con las sedes episcopales y en toda la zona al norte del Duero sólo existían cuatro: Auca, Uxama, Palentia y Asturica. Por el lado gallego la situación aparentemente mejoraba, se podían contar hasta siete obispados y la sede metropolitana de Bracara; sin embargo, ninguno de ellos quedó en la zona controlada por los cristianos. La invasión musul-

²⁷ A. BARBERO y M. VIGIL, «La organización social de los cántabros y sus transformaciones en relación con los orígenes de la Reconquista», *Sobre los orígenes sociales de la Reconquista*, Barcelona, 1974, pp. 163-164,

mana golpeó duramente la escasa vida urbana del norte peninsular y las campañas de Alfonso I (739-757) la arruinaron definitivamente.

En el pequeño reducto norteño, las primeras victorias cristianas harían un efecto de llamada sobre elementos descontentos con la ocupación musulmana. Las fuentes medievales tanto cristianas como islámicas²⁸ corroboran el traslado de numerosos godos, magnates y pueblo, a estas tierras mientras que sólo unos pocos se decidieron por refugiarse en el reino franco: «Goti uero partim gladio, partim fame perierunt. Sed qui ex semine regio remanserunt, quidam ex illis Franciam petierunt, maxima uero pars in patria Asturiensium intrauerunt²⁹». Años más tarde el flujo migratorio se amplió con el traslado de grandes grupos poblacionales por parte de Alfonso I tras sus exitosas campañas lo que daría definitivamente un vuelco demográfico a la población del incipiente reino a favor de elementos foráneos frente a los primitivos habitantes astures. Estos inmigrantes procedían de los *Campus Gothorum*, zonas donde los godos se habían establecido mayoritariamente hacía dos siglos y donde la estructura urbana era más tenue por lo que habrían conservado mejor sus usos y costumbres ancestrales.

En los dos siglos siguientes el pequeño reino cristiano fue afianzándose en sus tierras cantábricas a la vez que comenzaba a recuperar zonas al sur de la Cordillera Cantábrica. Salvo contadas excepciones: Oviedo (750), Burgos (884), quizás Santiago de Compostela (800), el tejido urbano del reino astur-leonés se limita a las recién recuperadas viejas *civitas* romanas y visigodas: León (854), Astorga (854), Tuy (854), Amaya (860), Zamora (893). Estas localidades no cuentan con una población demasiado importante y están dedicadas a actividades agropecuarias. Su renacimiento se debe a factores exclusivamente militares, se trata de garantizar la defensa de unas gentes que han acudido a poblar unos territorios cuasi-despoblados frente al más que previsible ataque de un enemigo receloso ante el avance cristiano. La decisión corresponde al rey o a un magnate que considera que puntos han ser fortificados por sus evidentes ventajas estratégicas. Fuera de este esquema predominante están los casos de Oviedo, nacida como residencia y corte de la monarquía asturiana y Santiago de Compostela, vinculada al «descubrimiento» de la tumba del apóstol Santiago y pronto convertida en un centro importantísimo de peregrinación.

Para Sánchez-Albornoz, durante los siglos VIII al IX, el gobierno de estas aglomeraciones altomedievales semejaría una simplificación del modelo presente en los últimos tiempos visigodos³⁰. Los hispanogodos perdieron en buena medida sus propias instituciones simplemente porque no tenían un espacio socio-económico similar al perdido sobre el que imponerlas. Retazos sueltos de ellas continuaron utilizándose en la vida administrativa

²⁸ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Despoblación y repoblación del valle del Duero*, Buenos Aires, 1966, p. 152.

²⁹ *Crónica de Alfonso III. Versión «ad Sebastianum»*, cap. 8. (J. GIL FERNÁNDEZ, *Crónicas...*, cit.)

³⁰ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El gobierno...», cit., p. 1103.

altomedieval mientras otras se conservaron en la documentación jurídica, en los ejemplares del *Liber Iudiciorum* que se llevaran consigo o, simplemente, en una tradición oral transmitida entre los escasos conocedores del pasado. El resultado, como se verá, es la coincidencia terminológica en instituciones vagamente semejantes que sirven para articular un Estado y una sociedad completamente diferentes de sus precedentes visigodos. Además estas nuevas instituciones son creadas y puestas en práctica por una población completamente modificada no solo mental sino étnicamente. En ningún caso la organización municipal puede ser una continuación de la existente antes de la llegada de los musulmanes, mucho menos la existente en el imperio tardorromano.

Esta pervivencia de la terminología institucional visigoda aparece en la *Crónica Mozárabe* cuando se llama *iudices* y *dux* a determinadas autoridades musulmanas. Estos *iudices* son para Sánchez-Albornoz una simple denominación genérica bajo la que se encubren unos personajes cuyos nombres y competencias permanecen ignotas³¹. Las apreciaciones de nuestro predecesor son correctas, de las cuatro ocasiones en que aparecen estos *iudices*, dos se refieren a España y las otras dos a África. Siendo territorios que se han incorporado al Estado omeya procedentes de estructura políticas diferentes parece correcto considerar que estos *iudices* están englobando a oficiales diferentes. Sin embargo, creemos se puede extraer algo más de información a las noticias aportadas por esta *Crónica*. Los *iudices* aparecen en España relacionados con los sucesos acaecidos en los años 732-734, correspondientes al gobierno del *dux* Abd-al Malik al-Fihri³². El texto nos presenta una España aún rica pese a largos años de guerra pero que tras el paso, cual plaga de langosta, de este *dux* y los *iudices* nombrados por él queda asolada y sin posibilidad de recuperación. De estos textos se entresacan dos cuestiones, la primera es directa los *iudices* son nombrados directamente por el *dux* y la segunda es que éstos desempeñan un cargo de alta relevancia pues se aprovechan de él de tal manera que llegan a despojar un país entero de sus riquezas. Estos *iudices* son las personalidades situadas inmediatamente por debajo del valí en la pirámide administrativa y serían, por tanto, los jefes de distrito en que se dividiría la provincia de España. El autor de la crónica encuentra complejo la transcripción de los términos árabes

³¹ Ibid., p. 1102.

³² «81. Tunc in era DCCLXXII, anno imperii eius XIII^o, Arabum CXVI^o. Iscam XII^o. Abdelmelec ex nobili familia super Spamam dux mittitur a principalia iussa. Qui dum cam post toth tantaque pericula repperit omnibus bonis opimam et ita floride post tantos dolores repletam, ut diceres augustalem esse malogranatam, tantam in eam tene per quattuor annos inrogat petulantiam, ut paulatim labefacta a diuersis ambagibus maneat executa. Iudicesque eius prerepti cupiditate ita blandiendo in eam inrogant maculam, ut non solum ex eo tempore declinando extet ut mortua, uerum etiam a cunctis optimis mancad usquequaque priuata adque a recuperandi spe omnimode desolata... 82. Cui et mox post modicum in era DCCLXXV, anno Leonis imperii XVII^o, Arabum CXVIII^o, Iscam XV^o, successor uenit nomine Aucupa. Qui dum potestate, precelsa genealogiam et legis suae custodiam cuncta tremet Spania, precessorem uinculo alligans, iudices ab eo prepositos fortiter damnat...» (J. E. LOPEZ PEREIRA, *Crónica mozárabe de 754*, Zaragoza, 1980).

–*valí, a'mil*–y utiliza otros más acordes a su cultura hispanogoda –*dux, iudices*–. Estos *iudices* son pues un cargo referido a la organización territorial musulmana, no extrapolable en este caso a la organización que rigiera en las comunidades cristianas, que como hemos visto estaban comandadas por un *comes* con la específica función de recaudar los tributos.

3.2. Instituciones altomedievales

3.2.1. Comissas y comites

En la Alta Edad Media el reino astur-leonés se encontraba dividido en pequeños distritos que reciben el nombre de *commissum*³³ de *committere* «encomendar a alguien el ejercicio de una función pública en el gobierno de un territorio». Se trata de entidades fundamentalmente rurales carentes de un núcleo urbano de importancia que los aglutine y defina. Su extensión es variable quedando supeditada la definición de sus límites a la voluntad regia. A partir del siglo X, no resulta extraño ver también en los diplomas asturleoneses la voz *comitatus* para definir estas entidades territoriales. Se trata de una palabra completamente nueva no existente con anterioridad y que deriva del título detentado por su regidor el *comites*.

Desde mediados de este mismo siglo una nueva terminología hace su aparición. A la par que los *commissa* van espaciándose en la documentación, cada vez más se menciona a las *mandationes* y *mandamenta*, de *mandatum* «poder dado a fin de ser representado en un negocio jurídico». A su vez parece que se constituye una jerarquización territorial ya que los *comitatus* pasan a desempeñar un papel más importante superponiéndose sobre las *mandationes*, que acabarán en algunos casos por ser concedidas a particulares como propiedad privada acompañada generalmente del privilegio de inmunidad. En los diplomas encontramos al frente de estas circunscripciones a los *iudices*, como categoría genérica, pero también otras voces como: *comites*, *mandante* o *potestates*³⁴. Pero estas referencias predominantes no hacen sino ocultar otras múltiples denominaciones de las autoridades territoriales que de forma alternativa o superpuesta se emplean con las anteriores: *tenente*, *principiante*, *dominante*, *dominator*, *iudicante*, *villicante*, *presidente*, *potente*, *regente*, *gobernante*, *imperante*,... La multiplicidad semántica más parecen indicar licencias del escribano para caracterizar al representante regio, es decir estaríamos hablando antes de meras adjetivaciones que de titulaciones oficiales propiamente dichas.

Esta cuestión terminológica puede clarificarse un poco a partir del fuero de Cervatos (999) donde se nos da una lista de las autoridades del re-

³³ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Homines...», cit., pp. 443-474.

³⁴ «El vocablo *potestas* que con el calificativo de regia se usó, como queda probado, para designar a la autoridad del rey y mediante una paráfrasis a la persona misma del monarca, se empleó también en el reino asturleonés con el doble significado de poder gobernar o de juzgar y de funcionario público adornado con él, cualquiera que fuese su rango» (C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Imperantes y potestates en el reino asturleonés (718-1037)», CHE, 4-46 (1967), pp. 300-306.)

ino: «Et uolo que nullam potestatem nec dominium habeant super predictas nec reges nec comites nec dominus terre nec iudices nec maiorinus nec sayon nec ullus alius homo vel persona quicumque, cuiuscumque condicionis existat». En primer lugar se aprecia, como la relación está graduada de mayor a menor siendo el rey, lógicamente, quien se sitúa en la cúspide de la organización administrativa y continuando con el «comites», apelativo con el que se honra a determinados cargos cercanos al rey, y el «dominus terre», genérico bajo el que se agrupan todas las denominaciones del párrafo anterior. Estas tres categorías ejercen las funciones directoras en la sociedad en un amplio marco estatal o territorial. La tres últimas se caracterizan por su ámbito local, por su cercanía y trato directo con la gente: «nec dictus maiorinus vel sayon nec iudices quicumque vel alia persona audeant intrare temerarie uel habitare seu hospicium recipere contra uoluntatem tuam... nec pignorare nec occidere nec inquietare neque pro quacumque causa uel occasione iniuriam facere in perpetuum».

El entronque del conde con su herencia visigoda es manifiesta, no sólo es la terminología utilizada que se mantiene³⁵, sino también en la condición misma del personaje como oficial real de carácter territorial. Su nombramiento corresponde al monarca y sus funciones en cuanto representante suyo en la zona abarcan todos los campos, no existe ninguna división de poderes ni en cuanto a su naturaleza, ni en cuanto a su relevancia. Estas competencias incluso adquieren más importancia que anteriormente al no estar sometido a la superior autoridad del *dux*. Entre ellas está el gobierno local que sólo va a existir en cuanto parte de la esfera de actuación de este funcionario de carácter territorial, no se puede, por tanto, hablar en puridad de administración municipal. En las sedes episcopales, controladas por la Iglesia, y en los territorios sometidos a los señores laicos esta administración municipal tampoco va a existir. Su gestión y control no va a diferir en demasía del existente en otras propiedades inmobiliarias, prolongándose en ellas la administración dominical.

3.2.2. Asambleas

En estos primeros siglos altomedievales se comprueba en el reino asturleonés la existencia de *concilia* en varios ámbitos. En primer lugar, están las reuniones del *Palatium* regio también denominadas, más infrecuentemente, como *concilium regis*, *senatus* y *conuentus principis* y, también, con carácter excepcional en los primeros momentos del reinado de Alfonso

³⁵ La utilización del término *commissa* tiene antecedentes visigodos apareciendo en dos leyes contenidas en el *Liber Iudiciorum* y que corresponden a los últimos momentos del reino visigodo: una ley de Wamba del año 673 (LI 9,2,8) y otra de Égica del 702 (LI 9,1,21). Los *comites civitatis* están ampliamente documentadas en las fuentes visigodas, la ley egiciana anterior los contempla, pero el espacio sobre el que ejercen su autoridad aparece caracterizado como *territorium*. Un ejemplo claro de esta influencia goda en la organización territorial surge en el fuero Villafraía (1039) donde en una relación muy breve de tres oficiales se cita un cargo de origen visigodo que no aparece en el resto del corpus foral castellano-leonés: «et uetuimus de eas tiufadus et iudices et sayones nostros siue et anutuba, et per suos iudicios et colonias de iudeos foro burgense aueant, ut sint ingenuas ab omni rem»

III (866-910) como *sinodus* y *collegium regis*³⁶. Si nos fijamos en tres ocasiones el término aparece adjetivado aludiendo a la personalidad que las preside, la máxima autoridad del reino, dos veces como *regis* y una como *principis*. Con ello los diplomas nos diferencian claramente estas asambleas de otras de menor importancia presididas por los oficiales regios en los territorios por ellos gobernados. En el caso de la expresión *conventus principis* se podría inferir un intento claro de diferenciarlo otras reuniones territoriales o locales que como los *conventus rusticorum* y *conventus publicus vicinorum* de raigambre goda quizás continuaran llevándose a cabo en el ámbito local, aunque bajo otras denominaciones alternativas.

En estas reuniones participaban los moradores de cada *commisa* o *comitatus* como ocurre en Galicia, territorio integrado desde antiguo en el reino y, por ello, plenamente vertebrado y estructurado. Sin embargo, en las tierras recién ocupadas en las vertientes meridionales que abarcaban una extensión considerablemente mayor las asambleas revestían un carácter marcadamente local³⁷. En Castilla las formas de presura espontáneas y privadas realizadas por grupos familiares alcanzaron una mayor importancia que en otras zonas del reino astur-leonés. Estas «sociedades de frontera» compuestas mayoritariamente de campesinos libres tendrían una estructura administrativa simple y comunal, adelantándose a la llegada de la Administración propiamente dicha. La abundancia de pequeños propietarios en el reino asturleonés quedó plenamente acreditada en los trabajos de Sánchez-Albornoz³⁸. Al reclamo de la llamada repobladora un número considerable de hombres libres saltaron la barrera física y política de las montañas cantábricas desparramándose por las llanuras sureñas. Las fuentes documentales nos muestran la rica vida jurídica de los recién llegados. En los tumbos monacales o catedralicios de Celanova, León, Sahagún, Cardeña, etc. se conservan gran número de documentos donde se transmiten pequeñas parcelas de tierra cultivada. Sánchez-Albornoz extrae entre esta marea documental una serie de documentos muy característicos y relevantes para nuestro estudio. En Castilla³⁹ aparecen unos embrionarios concejos ya dotados de ciertos privilegios y dueños de sus destinos que pleitean por sus bienes demaniales, fundamentalmente dehesas, montes y aguas, frente a la presión señorial y que comparten estos mismos bienes con otras comunidades locales. La interrogante surge al plantearse la administración de este patrimonio comunal que hay que relacionar con un órgano colectivo que asume la voluntad de la localidad, el *concilium*. En 1014 el conde Sancho García reconoce unos derechos privativos que sobre ciertas dehesas de

³⁶ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El 'Palatium regis' astur-leonés», *Viejos y nuevos...*, t. III, pp. 1636-1637.

³⁷ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «Repoblación del reino astur-leonés», *Viejos y nuevos...*, t. II, p. 755.

³⁸ «Pequeños propietarios libres en el reino asturleonés. Su realidad histórica», *Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas*, Santiago de Chile, 1970, pp. 178-201.

³⁹ *Ibid.*, pp. 189-195. Vid. también otros muchos ejemplos en *Despoblación y repoblación...*, cit., pp. 333-337. *Repoblación del reino...*, cit., pp. 693-696.

hierba y madera poseen los habitantes de Berzosa y Alfania facultándoles para establecer límites y multas a los vecinos de éstas y de otras villas que hicieran uso de las mismas sin autorización: «et si aliquis omo de alias villas infra ipsos terminos tomaremos tagante sine grato de concilio⁴⁰».

La venta de este patrimonio también incumbe a todos ellos, la venta en 1044 que hicieron los vecinos de Villariezo de una dehesa y un prado comunales se verificó en el *concilium* y así se trasladó al documento de compra-venta: «Nos namque nominati qui sumus concilium de villa prenomina-ta Villa de Eriezo, de minimus usque ad maximus, placuit nobis arque convenimus... propria nobis accesit voluntas, venderemus ad uobis...⁴¹». La convocatoria del *concilium* dentro del distrito corresponde a sus autoridades: «et pro temporali damno in quoacumque iudicio et fideli Concilio, a iudicibus vel potestatibus constrictus» –Fuero de Matanza 1046– y, ya posterior, «..., et etiam, si necesse fuerit, ante iudices et rectores terre cum nostra carta, et stent quedados et pagados usque ad directo compito per concilio...» –Noceda del Bierzo (1149) 9–. Reunido el *concilium* se procedería a la comunicación de las modificaciones legales, administrativas, impositivas, etc. que fueran pertinentes. A posteriori los asistentes actúan igualmente como difusores cuando de regreso a sus lugares de origen, en el caso de las reuniones territoriales, comenten con quienes no han asistido los pormenores de los hechos. También se sustanciarían aquellos pleitos que por su importancia, por decisión de las partes o por haber sido recurridos en apelación correspondiera resolver, para obtener así un general conocimiento por terceros interesados. Esta justicia es ejercida por el oficial real –*iudex, comes, merinus*– acompañado y aconsejado de *boni hominis* del distrito que por su conocimiento de sus usos, franquezas y privilegios de cada lugar actúan como *auditores* a la hora de tomar la decisión final. Esta participación popular no hace sino continuar con los patrones precedentes del mundo visigodo⁴².

El *concilium*, por tanto, no asume competencias judiciales simplemente actúa como mero espectador, pudiendo posteriormente los allí reunidos ser reclamados como testigos sobre el carácter del fallo emitido en caso de ulteriores discrepancias. El año 932 y presidido por el conde Fernán González tuvo lugar el juicio por discrepancias sobre el derecho de aguas entre el abad de Cardeña y las villas de Burgos, Santa María, Quintanilla, Villa Aiuta y Castañares. Junto a los veintitrés delegados de estas localidades citados en el diploma se cita la presencia de «alii multitudinem syne numerum⁴³». Del año 946 parecer ser el conflicto entre el obispo Oveco de

⁴⁰ M. ZABALZA, *Colección diplomática de los condes de Castilla*, Salamanca, 1998, n. 75, pp. 535-536.

⁴¹ L. SERRANO, *Cartulario de San Pedro de Arlanza*, Madrid, 1925, pp. 89-90.

⁴² LI 2,2,2: «Iudex autem si elegerit auditores alios secum esse presentes, aut forte causam, quae proponitur, cum eis conferre voluerit, suae sit potestatis» (*Fuero Juzgo en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciados códices por la Real Academia Española*, Madrid, 1815).

⁴³ M. ZABALZA, *Colección...*, cit., n. 8, pp. 174-175

León y un grupo de labriegos encabezado por Pedro que trabajaban unas sernas desde hacia varias generaciones: «Obinde preuiderunt, et ipsi iudices atque omni concilio, ut iurassemus, nos et nostras mulieres, quia nec sciebamus, nec tenebamus neque zelabamus qui exinde aliquid tenuisset. Et dum uenimus ad iuramentum, cognouimus nos in ueritate. Ante supradictos iudices, ...⁴⁴» El año 951 Nannino entregó una heredad al presbítero Melic en agradecimiento por la ayuda prestada por éste en un juicio: «Pro quo prebuisti michi adiutorium in concilio ubi me tenebant vinculatam pro iudicium facere; et pro tali causa dono tibi ipsa terra secundum quod de sursum resonat. Ita ut de isto die ipsa terra in vestro iure permaneat⁴⁵». Años después, en el 972, Enteco y Galindo fueron juzgados por no haber pagado el precio del vino y se les reconoció culpables: «in presentia Garcea Fernandiz comite vel omni concilio de Vurgensium civitate... et in facie multorum honorum omnium a minimo usque ad maximo, manifesti sumus culpabile⁴⁶». En 1037, tras la muerte de Ectavita Ovéquiz, Suero Eriz se apoderó de diversos bienes que Pedro Ovéquiz tenía en Villacorta, quien en contrapartida se incautó de las propiedades que el primero tenía en la localidad. El conflicto tuvo que resolverse por cauces judiciales «Et in primo die de iunio deuenerunt inde ad iudicium Petro Ouequiz et Suero Eriz, comite Petro Diaz uigario de Suero Eriz. Et fecerunt concilium in Uilla corta, pro illo ganato et pro illa hereditate. Et superauit illos Peytro Ouequiz per iudicium⁴⁷».

En los extensos archivos de la catedral de León y del monasterio de Sahagún donde se conserva pormenorizadamente el testimonio escrito de la formación de su extenso patrimonio inmobiliario los instrumentos de compra-venta y donación incluyen reiteradamente una cláusula por la que proclama la firmeza de la transmisión y se priva a las partes de entablar reclamaciones futuras por los bienes. «contra hanc kartulam uendicionis aliquis ad irrumpendum uenerit, aut uenerint uel uenerimus, an per nos, an per subrogita persona, quod nos in concilio uindicare non potuerimus⁴⁸» o bajo la expresión alternativa: «quod si aliquis omo ad iudicium vos inquietare voluerit pro ipsa terra ...qua[m] nos in concilio non valuerimus». El carácter abierto y, en ocasiones, multitudinario de estas reuniones era ideal para ratificar negocios privados⁴⁹. En el año 941 se verificó una permuta de heredades entre el abad Cipriano y los monjes de Cardeña con el matrimo-

⁴⁴ E. SÁEZ, *Colección documental de la catedral de León I*, León, 1987, n. 191, pp. 271-272.

⁴⁵ J. M^a. MÍNGUEZ, *Colección diplomática del Monasterio de Sahagún I*, León, 1976, n. 133, pp. 171-172.

⁴⁶ *Ibid.*, n. 38, pp. 355-357.

⁴⁷ M. HERRERO, *Colección diplomática del Monasterio de Sahagún II*, León, 1988, n. 451, pp. 108-109.

⁴⁸ En el año 912 Nonniti, Placenti, Egero y Todeya venden a Abozuleiman una viña, a orillas del Torio y junto a San Cosme y San Damian [de "Abeliar"], por la que reciben en precio tres bueyes valorados en cuarenta sueldos. (E. SÁEZ, E., *Colección...*, cit., n. 29, pp. 45-46). En el año 950 Lecinio y Sendino venden al monasterio de Sahagún un busto en Cansoles. (J. M^a. MÍNGUEZ, *Colección...*, cit. n. 120, pp. 154-155)

⁴⁹ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Repoblación del reino...*, cit., p. 757.

nio formado por Juan y Cixilo y sus cinco hijos «in providentia domni Fredenandi comitis, et omnium iudicium et seniorum» y ante «turbam ex concilio de Urgos⁵⁰». Más generosos son los citados archivos de León y de Sahagún llenos como están de estos documentos. Transmisiones patrimoniales como ventas, donaciones, permutas y testamentos, pero también actos íntimamente personales como profiliaciones aparecen amparadas por la memoria colectiva de quienes allí asisten y comprueban la plasmación escrita de estos negocios: «In concilio zibitas Zeia fuit scripta⁵¹». Habitualmente estas gentes aparecen como testigos y confirmantes en una referencia genérica al final del texto a continuación de aquéllos que aparecen individualizados para en caso necesario atestiguar la veracidad de lo allí acontecido. El año 979 Servando vendió una heredad en Ataula al monasterio de Sahagún ante «Detrico testis et aliorum multorum de concilio Sancti Andre Apostoli de Villa Mutarras⁵²». Siete años más tarde Bronilde donó, en remedio de su alma, varias suertes sitas en el valle de Covella ante «aliorum multorum que hic fuerunt in concilio Sancti Iohannis⁵³». En 1028 Fernando Móniz permuta con Rapinate, su mujer e hijos diversas propiedades «In quorum concilio Sancti Pelagii et alios plures manus nostras roborauimus⁵⁴». En 1040 Vimarano y Arias hicieron donación al monasterio de San Salvador de “Valle de Zaidi” de todo cuanto poseían en Monasteriolo «In concilio uilla nominata Monasteriolo, in aula Sancti Petri Apostoli,... Ioannes testes et aliorum multorum qui non sunt scripti⁵⁵». En 1047 Justa se entregó al monasterio de Sahagún e hizo donación de una heredad a orillas de Valderaduey para su salvación y a de su marido e hijo ante «Petro Iuequiz conf. Et alii plures de concilio Sancti Facundi testes et confirmant⁵⁶».

En algunas villas, como en Cirueña el señor utilizaba la asamblea para sus propios intereses nombrando entre los asistentes quienes debían desempeñar los cargos de juez y sayón que debían velar por sus intereses: «Preterea statuimus ut in tertia die Sancti Michaelis veniat advocates qui fuerit in monasterio supradicto et merinus ipsius ad concilium de Cironia, et dent illi iudicem et saionem qui adquirant negotia que pertinent ad monasterium supradictum⁵⁷».

El *concilium* comprendía sin duda a todos los hombres de la *villa*, por lo menos en las ocasiones solemnes lo que se corrobora en no pocos documentos del siglo X. En el año 958 el monasterio de Cardeña se comprometió con «Galvarra, Galindo Soliz, Gazo Laztago,... vel omni concilio de Villas Vascones⁵⁸» a cederles el aprovechamiento de las aguas del canal que desde

⁵⁰ M. ZABALZA, *Colección*, cit., n. 14, pp. 226-227.

⁵¹ 1032, agosto, 22. M. HERRERO, *Colección...*, cit., n. 433, pp. 87-88.

⁵² J. M^a. MÍNGUEZ, *Colección...*, cit., n. 300, pp. 362-363.

⁵³ *Ibid.*, n. 515, pp. 7-8.

⁵⁴ *Ibid.*, n. 844, pp. 447-448.

⁵⁵ M. HERRERO, *Colección...*, cit., n. 458, pp. 139-140.

⁵⁶ *Ibid.*, n. 501, pp. 174-175.

⁵⁷ N. HEGUERTA, «Fueros inéditos de Cirueña en el año 972» en BRAH 29 (1896), p. 349.

⁵⁸ L. SERRANO, *Becerro gótico de Cardeña*, Valladolid, 1910, p. 67.

la *pressa maior* abastecía de agua al molino de Manu Serrata, propiedad de los clérigos a cambio de que los labriegos realizaran los trabajos de mantenimiento del mismo. En el año 972 «in presentia de Garsea Fernandiz comité uel omni concilio de Uurgientium ciuitate, anima, adhuc, esse ciuitas et in facie multorum bonorum omnium, a minimo usque ad maximo» Enneco y el presbítero Galindo se reconocieron culpables de perjurio apoyados por los cojuradores aportados «et fecimus iudices et homines qui uerum auctorificaban fallaciosos⁵⁹» Ese mismo año «Nos totos omnes concilio pleno de Agusyn, maiores et minores, iubenens et senes, nostras spontaneas uolumptates⁶⁰» cedieron una dehesa al conde García Fernández a cambio de la exención de la castellería. Pero el ejemplo más claro de la universalidad de estas reuniones locales está plasmado en el fuero de San Sadornín, Berbeja y Barrio: «nos omnes qui sumus de concilio de Berbeia et de Barrio, et de Sancti Saturnino, varones et mulieres, senices et iuvenes, maximos et minimos, totos una pariter qui sumus habitantes, villanos et infanzones de Berbeia et de Barrio, et de Sancti Saturnini⁶¹».

Igualmente debía ocurrir en los lugares de señorío donde los dependientes tendrían el derecho de celebración y asistencia asamblearia. En este caso, todos los residentes tienen una misma condición personal derivada de su vinculación personal con el señor y han de coordinarse para el ejercicio de los derechos que tengan otorgados entre ellos y frente al señor. En La Rioja los labriegos de Cirueña parece que estaban en ciertas disputas con sus señores los monjes del cercano monasterio de San Andrés pues no se aclaraban respecto de las prestaciones que debían de abonarles. Reclamado, tanto por el colegio monacal como por el concejo local, el parecer del rey navarro Sancho II, éste confirmó la cesión del lugar que hizo su padre García II a favor de los monjes y estableció el contrato agrario de carácter colectivo por el que en adelante ambas partes debían de conducirse: «Deinde venerabilis Abbas Sanctins cum omni Collegio monachorum Sancti Andrea de Cironia, et cum concilio tam laicorum quam clericorum eiusdem villa, in presentia nostra constitutes, et clementie nostre supplicantibus ut nos, qui tantam donationem eis contulimus, forum per quod possent in pace et quiete vivere inter se statuere dignemur⁶²».

Sin embargo este igualitarismo que no reconoce diferencias de edad, sexo o posición entre los miembros de una comunidad comienza a quebrarse en los entornos del año 1000 en el reino de León. Un número cada vez mayor de documentos de la catedral de León y del monasterio de Sahagún presentan un *concilium* donde ya sólo participa un reducido grupo de personas representativas de la élite económica y militar de la sociedad. Las referencias genéricas del tipo «aliorum multorum de concilio⁶³» o «alios plures de

⁵⁹ M. ZABALZA, *Colección...*, cit., n. 38, pp. 355-357.

⁶⁰ *Ibid.*, n. 39, pp. 357-358.

⁶¹ *Ibid.*, n. 30, pp. 270-271. Vid. las reflexiones sobre su autenticidad en pp. 524-530.

⁶² N. HEGUERTA, «Fueros inéditos...», cit. pp. 345-354.

⁶³ J. M^a. MÍNGUEZ, *Colección...*, cit., n. 40, n. 300, n. 338,...; J. M. RUIZ ASENCIO, *Colección documental de la catedral de León III*, León, 1987, n. 515, n. 572, n. 577,...

concilio⁶⁴) que se hacían en la parte confirmatoria son cada vez sustituidas más a menudo por otras como: «In quorum concilio Sancti Mameti et Sancti Pelagii ubi fuerunt filios bonorum⁶⁵», «In quorum concilio de Sancta Cecilia Uirginis hic fuerunt plures et meliores⁶⁶». Mucho más claramente se manifiesta el caso cuando el ámbito del *concilium* rebasa una sola localidad y alcanza un distrito: «In concilio de Palaciolo et concilio de Ceia et alii plures qui ibi fuerunt homines bonos⁶⁷», «Qui preses fuerunt de concilio Sancte Marie:... De Sancte Columbe:... De Sancti Martini:... De concilio Sancti Pelagii:...⁶⁸»

En Castilla no se detecta aún este desplazamiento de las clases más humildes de los órganos decisorios, pero sí un creciente protagonismo de los infanzones en los asuntos públicos que los llevan a asumir la representación y defensa de la comunidad. En 1011 (febrero, 28) el conde Sancho acota unas tierras para pastos y lo hace en presencia de todos los vecinos de Tamayo y Oña⁶⁹: «cum omnibus uicinis uestris tam maioribus quam etiam minoribus» y un día antes este mismo conde al establecer el coto de unas tierras que había comprado a unos particulares individualiza a una serie de personajes que son citados por sus nombres y participan activamente en el documento⁷⁰: «Ego comes Sancius facio et pono cotum coram stantibus iudice Fanne Uermudez et Salito cum istos infanzones prenomatos... Nos uero infanzones mones, qui sumus in circuitu Onie, concedimus istud decretum et cotum... Nos uero infanzones supranominati, qui hanc scripturam cum domino nostro comité Sancio fieri decreuimus, legentem audiuimus et manibus nostris roborauimus coram testibus» Mientras tanto el resto de la población es citada con un escueto «et cum omnibus aliis qui sunt in ei uicinitate propter terminos et defesas et exitus de ipsa Onia».

Igualmente se comprueba esto mismo en el ya citado diploma de Berbeja, Barrio y San Zadornil, posteriormente adicionado en 1012⁷¹ y en los que ya van destacando algunos miembros de la comunidad a quienes se les ve defendiendo los privilegios otorgados a la villa. Así aparecen citados los infanzones Justa de Maturana y Alvaro Sarraziniz pero también los villanos Oveo Díaz, García Álvarez de Rabanos, Eita Valériz y Tello Sarraziniz. Éstos cuatro últimos carentes aún del reconocimiento social por su pertenencia a la pequeña nobleza pero ya desempeñando un papel principal en su localidad merced a su papel económico en la misma ya que ostentan la condición de propietarios acomodados o «hereditarios».

⁶⁴ J. M^a. MÍNGUEZ, *Colección...*, cit., n. 268, n. 298; J. M. RUIZ ASENCIO, *Colección...*, cit., n. 597, n. 784, n. 833,...

⁶⁵ J. M. RUIZ ASENCIO, *Colección...*, cit., n. 654.

⁶⁶ *Ibid.*, n. 691.

⁶⁷ M. HERRERO, *Colección...*, cit., n. 382.

⁶⁸ *Ibid.*, n. 455.

⁶⁹ M. ZABALZA, *Colección...*, cit., n. 69, pp. 501-503.

⁷⁰ *Ibid.*, n. 68, pp. 489-493.

⁷¹ *Ibid.*, n. 73, pp. 530-531.

La influencia del *conventus publicus vicinorum* en nuestro *concilium* castellano-leonés parece clara para los juristas medievales. Las versiones que hicieron del *Liber Iudiciorum* en su momento y conocidas como *Fuero Juzgo* ignoran en varias ocasiones las menciones al *conventus publicus* pero cuando, en dos ocasiones lo hacen la traducción es *concejo*. Ambos preceptos hacen referencia a la obligación en que incurre quien encuentra ganado ajeno mezclado con sus animales o halla un equino perdido de hacerlo saber a las autoridades o publicitarlo «in conventu publico» o «en concejo»⁷².

Esta particularidad del *conventus publicus* como órgano divulgativo también está presente en el derecho penal. Las penas corporales y la privación de la vida han de efectuarse públicamente ante sus convecinos, sólo así se puede conseguir plenamente la función infamante y ejemplarizante que se persigue con ellas. Para la pena capital existe un norma expresa: «Iudex quotiens occisurus est reum, non in secretis aut in absconsis locis, sed in conventus publice exercean disciplinam» –LI 7,4,7–. La traslación medieval no menciona la institución en concreto pero sí dice que el juez «que debe iusticiar algún omne, ó algún malfechor, non lo debe iusticiar en ascuso, mas paladinamente ante todos». Por su parte, la aplicación de la flagelación en el *conventus publicus* se encuentra expresamente citada en unos pocos ejemplos de los muchos casos en que se cita este castigo y normalmente consta el carácter público del castigo pero no el lugar donde se aplica. En el *conventus publicus* la reciben las siervas que ejercen la prostitución, pero también sus amos cuando habiendo sido declarados culpables no han impedido que ésta continúe ejerciendo su tráfico corporal siendo tratados por tanto como proxenetas⁷³; los siervos que participan en crímenes bajo la autoridad de un hombre libre que no es su señor⁷⁴ y, también los libres que no cumplen con sus servicios militares, evitando ir a la hueste o desertando de ella⁷⁵. En el texto medieval se dice en el primero de los delito que la prostituta «sea ferida de trescientos azotes delante el pueblo» y en el tercero el desertor ha de recibir «cient azotes en ó mercado, ante todos». En esta última cita se ve como en las ciudades importantes donde existe un mercado

⁷² LI 8,4,14: «... Quod si ad domum suam adduxerit, et iudicem non monuerit vel in conventu publico infra octavam diem non contestaverit, duplum satisfaciatur» y LI 8,5,6: «... ut qui invenerit denuntiet, aut episcopo, aut comiti, aut iudici, aut senioribus loci, aut etiam in conventu publico vicinorum». En castellano, respectivamente, «... E si lo adujere á su casa con su ganado, é fasta ocho dias no lo dixiere en concejo paladinamente, péchelo en duplo» y «develo luego facer saber al sacerdote, ó al sennor de la villa, ó al iuez, é decirlo paladinamente en concejo ante los vecinos».

⁷³ LI 3,4,17: «... CCC. similiter flagellis publice verberetur, et decalvata domino suo reformetur ... Quod si forsitan nec ad villam transmittere, nec vendere voluerit, et iterum ad civitatem reversa fuerit, huiusmodi dominus in conventu publice L. flagella suscipiat».

⁷⁴ LI 7,2,6: «... Ipse autem servi in conventu publice C. flagella suscipiat». y LI 8,1,3: «... Servi autem huius criminis socii, si alterius domini sunt, singuli in conventu publico ad aliorum terrorem extensi coram iudice ducentos ictus accipiant flagellos».

⁷⁵ LI 9,2,4: «... in conventum certantium publice centum flagella suscipiat, et reddat solidos X».

permanente puede utilizarse éste como sustituto del concejo a la hora de lograr la publicidad requerida.

Una cuestión apenas comentada en páginas anteriores ha sido la posible influencia de las instituciones autóctonas asturianas y cántabras en esta primitiva organización local altomedieval. Tanto unos como otros, alejados de la influencia homogeneizadora de Toledo en territorios secundarios del reino quizás debieron de gozar en la práctica de una cierta autonomía para sus propios asuntos.

Las distintas versiones de la *Crónica de Alfonso III*⁷⁶, obra auspiciada por dicho rey en pleno auge neogoticista, inciden directamente en la importancia del elemento astur. La versión albeldense –# XV,1–, al remontarse a la creación del reino se refiere a él como «reino de los astures»: «et Astorum regnum diuina prouidentia exoritur» y la rotense –# 8–, al tratar la asunción por Pelayo de la jefatura de los rebeldes indica el modo electivo de la misma en una asamblea: «Qui per omnes Astores mandatum dirigens, in unum colecti sunt et sibi Pelagium principem elegerunt».

Cuando San Millán⁷⁷ visitó a los cántabros para recriminarles sus muchos vicios y crímenes, les presentó sus recriminaciones directamente ante el Senado reunido a petición suya para el día de Pascua. Allí fue escuchado, con la excepción de un tal Abundancio que se burló de él, con atención y reverencia por los presentes que reconocían su santidad. Sin embargo, no llevaron a la práctica ninguna de sus recomendaciones y se vieron castigados poco después, el año 574, cuando Leovigildo ocupó Amaya y toda Cantabria. Como se aprecia por el relato los cántabros siguen gobernándose de forma comunal. Esta asamblea indígena como su homóloga asturiana acabaría fundiéndose con el *conventus publicus vicinorum* para dar lugar al *concilium* altomedieval. Esta idea así presentada no deja de ser una mera especulación. Carecemos de datos de este «*senatus*» indígena para establecer sus posibles influencias para con el *concilium*. Sin embargo, siendo las funciones del *conventus* sumamente reducidas y con un impacto escaso sobre la sociedad en su conjunto la competencia judicial principal largamente constatada en el *concilium* altomedieval más bien tendría que venir de una asamblea indígena que como vemos en el caso de Cantabria tiene entidad suficiente para debatir sobre las costumbres de una sociedad al completo.

4. - El renacimiento de la vida urbana (siglos XI-XIII)

A partir del siglo XI, con el hundimiento del Califato cordobés tras la muerte de Almanzor y la apertura de las nuevas vías comerciales y religio-

⁷⁶ J. GIL FERNÁNDEZ, *Crónicas...*, cit.

⁷⁷ SAN BRAULIO, *Vida y milagros de San Millán*, traducción de Fray T. MINGUELLA, en *San Millán de la Cogolla: Estudios históricos religiosos acerca de la patria, estado y vida de San Millán*, Madrid, 1976, pp. 11-40.

sas que se van abriendo en el norte peninsular se produce un nuevo renacer de la vida urbana. El sepulcro del Apóstol comienza a atraer grandes cantidades de fieles, muchos de ellos procedentes de Europa. Aprovechando las posibilidades económicas que se presentan, los pequeños centros de la ruta jacobea se van desarrollando mientras ofrecen los servicios necesarios a los peregrinos. Seguirán siendo de dimensiones modestas pero las formas de vida ya son sustancialmente diferentes, una buena parte de sus vecinos están dedicados a actividades comerciales y artesanales. Dos factores influyen sobremanera en su génesis y desarrollo: el aporte inmigratorio de los francos y la concesión de ventajas y franquezas de todo tipo por los soberanos.

Al sur del Duero y una vez constatada la situación de descomposición en que se encuentra sumida la España musulmana, los Estados cristianos se precipitan sobre las tierras en disputa al objeto de controlarlas definitivamente. Para llevar a buen término y de forma efectiva esta intención no sólo es necesaria la supremacía militar sino que se hace preciso el establecimiento de una masa humana que haga del territorio su hogar, traiga sus familias y realice sus actividades económicas en el mismo. Pero, ¿cómo atraer pobladores a unos territorios peligrosos que han estado siempre en una situación indecisa entre ambos bandos? Los beneficios que han de ofrecerse a esta gente tienen que ser superiores a los potenciales peligros que se les presenten. Se hace necesario pues la concesión de un fuero, instrumento escrito en el que se fijan las franquezas y ventajas que van a gozar estas gentes y que les situarán en una posición privilegiada respecto al resto de la población situada en zonas menos vulnerables. Aunque en algunos casos extraordinarios quedarán en una posición similar a los nobles, generalmente se optará por el procedimiento inverso y serán estos últimos quienes perderán su condición dentro del territorio de la villa asimilándose al resto de grupos sociales⁷⁸.

Este territorio recientemente ocupado será objeto de la atención preferente de Alfonso VI. Medina del Campo, Cuéllar, Sepúlveda, Arévalo,... nacen con el objetivo de vertebrar estas zonas y de presionar a la taifa toledana en la que tenía puestos los ojos el monarca. Mayoritariamente se trata de antiguas *civitates* romanas y visigodas, abandonadas en los últimos siglos. Su función será incluso más importante tras la toma de Toledo y la llegada de los almorávides que pondrá al reino castellano-leonés en una situación más que complicada. Estas localidades se constituirán en una segunda línea de defensa que defendería el hipotético paso de los ejércitos musulma-

⁷⁸ Miranda de Ebro (1099) 49: «Et omnes populatores qui modo sunt et de cetero erunt, generosi aut pedones, aut mauri, aut iudei, habeant istud forum, et magis habeant in omnibus forum de Lucronium». Belorado (1116) 13: «Et qui morador vel poblador fuerit in Bilforad francos, et castellanos, caballarios, atque villanos, unum forum habeant de calumniam dare». Paredes de Nava (1129) 1: «Os doy y concedo a todos los hombres residentes en Paredes de Nava, tanto los que agora son como los que adelante vinieren, estos fueros para que perpetuamente los tengáis y seais todos los vecinos de un fuero y de un uso...» Esta última norma es la que con pequeñas variantes se divulgará con habitualidad.

nes a la Meseta Norte si las localidades del frente: Toledo, Madrid, Ocaña, etc. eran ocupadas. El entramado defensivo se vería completado con las ciudades-fortaleza de Ávila, Segovia y Salamanca repobladas por Raimundo de Borgoña, yerno del monarca. Los vecinos de estas ciudades se dedicaron fundamentalmente a actividades militares y ganaderas, favorecidas por las grandes cantidades de pastos a su disposición y la menor exposición del ganado a los cambiantes avatares de la guerra.

La refundación de estas poblaciones siempre va acompañada de la constitución de unas instituciones de gobierno que regulen la vida cotidiana y resuelvan los conflictos que puedan darse entre los vecinos. Como dijo Lacarra en su momento «Para esta naciente vida urbana no hay que pensar en una restauración de instituciones pasadas ni de formas de vida pretéritas. El corte con la España visigótica ha sido total, absoluto⁷⁹». La estructura administrativa nacida al calor de estas nuevas circunstancias ha de mirarse por tanto en los patrones contemporáneos convenientemente renovados y adaptados y el único patrón aplicable es la administración territorial.

Estos elementos junto con otros surgidos en ese momento constituirán las instituciones locales de los siglos XI al XIII. Según los casos, el resultado podrá ser un municipio, es decir, una entidad local completamente autónoma y con una personalidad propia y reconocida por las autoridades; u otra entidad sometida en mayor o menor grado al rey o al señor. Herculano introdujo una minuciosa estratificación⁸⁰ basada en tres categorías principales: «rudimentaes–imperfetos–completos», la segunda de las cuales se subdividía en múltiples variedades: «A classe dos concelhos imperfeitos póde subdividir-se em seis generos, aos quaes correspondem seis formulas distintas. Dentro de cada um desses generos diversas circunstancias produzem uma grande variedade d'especies».

Tres van a ser en nuestra opinión los elementos que van a hacer de estas ciudades municipios en el pleno sentido de la palabra. El más importante de ellos es la concesión real de inmunidad, en virtud de un privilegio el rey se autolimita en el ejercicio de algunas de sus competencias cediéndolas a perpetuidad a una entidad vinculada a él que se encuentra así con grandes parcelas para su autogobierno y para la creación de sus propias leyes. Esta cesión desarrollada de forma muy variada va a traducirse en una pluralidad de modos de coexistencia entre rey y ciudades. Junto a este factor exógeno, los otros dos son plenamente internos, uno ya existente: el concejo, el otro nuevo: los oficiales municipales. Por un lado la asamblea municipal suma nuevas funciones a las que ya venía realizando, pero por otro lado razones de eficacia la obligan a traspasar parte de ellas a individuos elegidos entre los vecinos que conforman el *concilium*.

⁷⁹ «Panorama ...», cit., p. 352.

⁸⁰ A. HERCULANO, *Historia...*, cit., pp. 53-118.

4.1. *Autonomía ciudadana*

La administración local y, con ella, la vuelta de los municipios como entidades con personalidad propia y diferenciada de otros organismos de la Administración va a venir, paradójicamente, auspiciada no por ellos mismos sino por las ambiciones de los señores laicos y eclesiásticos que, poco a poco, han ido obteniendo la inmunidad para sus propiedades personales⁸¹. Esta nueva situación implicaba básicamente que los oficiales reales no podrían entrar en el territorio inmune —el denominado principio de *no-introito*— o hacerlo bajo determinadas circunstancias limitativas y, secundariamente, la exención impositiva.

Las repoblaciones llevadas a cabo por los reyes ovetenses iban «adornadas con el privilegio de inmunidad que implicaba, claro está, el ejercicio de una más o menos amplia jurisdicción pública sobre los moradores en el dominio acotado⁸²». En base a los diplomas que se conservan del monasterio de Sahagún se constata la concesión de la inmunidad como elemento integrante de la cesión de villas y aldeas que se hacen a favor de esta institución religiosa. Los ejemplos aportados por Sánchez-Albornoz⁸³ abarcan todo el siglo X y en muchos de ellos ya se transmite el gobierno implícito sobre los labriegos asentados en esos dominios. Para nuestro predecesor las franquezas concedidas a pequeñas aldeas no suponían para la monarquía una merma relevante ni de sus ingresos ni de su autoridad. El hecho de encontrarnos en Castilla ante un páramo documental no le parece suficiente para negar la más que posibles concesiones del privilegio de inmunidad en tiempos de Fernán González, y aún anteriores, que aumentarían en gran número en tiempos de Sancho Garcés «el de los buenos fueros⁸⁴». La edición de los diplomas condales castellanos por Zabalza constata lo manifestado por Sánchez-Albornoz. La mayoría de los documentos donde se recoge el privilegio de «sayonía», una vez estudiados y sometidos a crítica, reflejan una profunda manipulación por parte de los beneficiarios que le llevan a considerarlos como falsos o, cuanto menos, sospechosos⁸⁵, entre ellos todos los elaborados

⁸¹ Partiendo de la discutible veracidad de la concesión que hizo Ordoño a la ciudad de Oviedo el año 857 sí son plenamente constatables estos privilegios a lo largo de todo el siglo X (C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «La potestad real y los señoríos en Asturias, León y Castilla» en *Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales epsñaoles*, t. 2, Madrid, 1976, pp. 1280-1285). Con el paso del tiempo el volumen de los mismos aumenta considerablemente, la edición de las colecciones diplomáticas de Fernando I (P. BLANCO LOZANO, *Colección diplomática de Fernando I (1037-1065)*, León, 1987) y Alfonso VI (A. GAMBRA, *Alfonso VI: cancellería, curia e imperio*, 2 vols., León, 1997), cuyos reinados abarcan prácticamente todo el siglo XI, están cuajadas de estas franquezas.

⁸² C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Repoblación...*, cit., p. 665.

⁸³ *Ibid.*, p. 666.

⁸⁴ C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Despoblación...*, cit., p. 332.

⁸⁵ Serían sospechosos la donación en el 945 de la cuarta parte de Salinas de Añana al monasterio de San Millán (n. 18, pp. 249-250) y la confirmación en 1012 de los fueros de Nave de Albura (n. 72, pp. 516-518) y San Zadornín, Berbeja y Barrio (n. 73, pp. 530-531) por parte del conde Sancho García. Por otra parte son calificados como falsos la confirmación en el año 955 de los fueros de las antedichas villas por Fernán González

en el siglo X, con una única excepción. Se trata de la concesión por Fernán González de la creación del infantado y monasterio de Covarrubias donde profesará su hija Urraca y que se acompaña de la donación de numerosas villas y monasterios dotadas de múltiples privilegios, algunos de ellos inéditos hasta el momento y entre ellos el de gozar de sus propios oficiales: «ad ipsas uillas et ad ipsos monasterios cum sernas et palacios et cum suo saione quomodo seruibant ad illas sedes regales sic seruiant tibi filia nostra Urraca⁸⁶». Ya en tiempos de Sancho García encontramos otros dos privilegios indudablemente auténticos, la cesión en 1003 por parte de dicho conde al monasterio de San Millán de la Cogolla de la villa de Quintanilla de Bureba: «et libera absque homicidio et fornicio sine fossato vel nubdua et saionis ingressio per omnia secula⁸⁷». Unos años después en 1014, Sancho García cede al monasterio de Oña la villa de Nuez: «condonamus adque confirmamus ne ullo imperio ad parte commitis terre absque saione et absque anubtua cum tale foro electo⁸⁸».

Este proceso pronto será reproducido en el ámbito local, las asambleas aprovecharán los momentos de debilidad del monarca para reforzar su autogobierno. En otras ocasiones, será el soberano quien tendrá que ofrecerlo para conseguir apoyos o simplemente para repoblar zonas peligrosas que de otro modo no contarían con suficientes alicientes. A las franquicias de carácter personal como la inmunidad penal o las exenciones tributarias, se unirá la cesión de determinadas parcelas de la actividad pública administrativa o judicial.

El privilegio de inmunidad, «sayonía» o de «no introito» indica la autonomía municipal, la posibilidad que los magistrados municipales se encarguen de funciones administrativas y judiciales. Los oficiales reales, mayores y menores, —merinos, jueces, vicarios, sayones, *subricius*, *gallinarius*...— se van a encontrar con la prohibición expresa de entrar en determinadas localidades para gestionar los derechos regios. Esta prohibición abarca a todos ellos con independencia de su jerarquía: «entre en sus casas para tomar alguna cosa por fuerza; y esto mismo el señor cuyo fuere este lugar no les haga fuerza ni tortura, ni su merino, ni su sayón, ni les tomen ninguna cosa por fuerza sin la voluntad de ellos⁸⁹».

Con carácter general este privilegio se manifiesta de forma genérica con una expresión en la que se veta al oficial la entrada al municipio: «E non hi entre Merino en estas villas;...⁹⁰» o a un inmueble particular: «Ad

(n. 30, pp. 273-274), la cesión en el 972 del monasterio de San Miguel de Valbuena al monasterio de Cardaña (n. 47, pp. 377-380) y la permuta entre el conde Sancho García y Gómez Díaz del lugar de Oña, propiedad de este último, a cambio de varias posesiones (n. 68, pp. 497-499).

⁸⁶ *Ibid.*, n. 52, pp. 396-400.

⁸⁷ *Ibid.*, n. 62, pp. 449-450.

⁸⁸ *Ibid.*, n. 73, pp. 531-533.

⁸⁹ Balmaseda (1199).

⁹⁰ Melgar de Fernamental (950) 9.

hortum alicuis hominis non uadat maiorinus uel sagio inuito domino horti ut inde aliquid abstrahat, nisi fuerit seruus regis⁹¹» y «Et mandamus ut maiorinus, uel sagio, aut dominus soli, uel aliquis senior, no intrent in domum alicuii hominis in Legione copmmorantis, pro ulla calumpnia, nec portas auferat a domo ilius⁹²». En ocasiones esta franqueza va acompañada de otras varias que se conceden de forma paralela: «notum sit ab omnibus quia non habuimus fuero de peccare homicidio, neque pro fornicio, et neque pro calda, et non sayonis de rege ingreso⁹³». Más adelante la expresión por la que se prohíbe la entrada al oficial se reduce a un concepto técnico «sayonía»: «Neque habeant super se fuero malo de sayonia, neque de fonssadera, neque anubda, neque maneria, neque ulla uereda faciant, set liberi et ingenui maneant semper⁹⁴».

También es posible encontrar una relación de las actuaciones concretas que encuadradas bajo este término les están vedadas a los oficiales extraños: «nec pignorare nec occidere nec inquietare neque pro quacumque causa uel occasione iniuriam facere in perpetuum⁹⁵»; «neque pro calumpnia, neque pro aliqua alia fazendaria⁹⁶»; «Et in casa de cavallero de Casseda non intret saione; et sua porta non sit sigillata⁹⁷»; «Et concedo vobis quod alter merino vel alter salon non intret in vestro barrio pro prendare vel aliquo malo facere, nisi vester proprius, quam habeatis⁹⁸»; «per pignorare vel callonias perquirere⁹⁹»; «in eas entrare uiolenter seu contra populatores inde quidquam auferre uel alienare¹⁰⁰», «que non entre en el dicho lugar de Tórtoles, nin el merino del dicho Adelantamiento a emplazar nin llamar nin a prender, nin prendiar a ninguno de los vecinos del dicho lugar¹⁰¹»; «que en su villa ni en sus terminos no entre ministro ninguno por facer en el justicia mas los alcaldes que obieren do juzgar la vila lo fagan¹⁰²»...

La existencia del privilegio de *sayonía* sería en muchos casos una necesidad perentoria ante la actuación simultánea de varios de estos oficiales, extraños a la organización autónoma local, haciendo valer los distintos derechos –jurisdiccionales, tributarios, personales– debidos a cada uno de los señores con prerrogativas en la villa. Si tomamos como ejemplo este fragmento extraído del *Libro Becerro de las Behetrías*¹⁰³, posterior a la época que estamos tratando, se nos permite apreciar hasta tres jurisdicciones se-

⁹¹ León 38.

⁹² León 41.

⁹³ San Zadornín, Berbeja y Barrio.

⁹⁴ Logroño (1095) 3.

⁹⁵ Cervatos.

⁹⁶ Santoña (1122) 1.

⁹⁷ Cáseda / Soria 21.

⁹⁸ Toledo (1136) 3.

⁹⁹ Atapuerca 13.

¹⁰⁰ Mansilla 3.

¹⁰¹ Tórtoles.

¹⁰² Santa María de Ortigueira.

¹⁰³ G. MARTÍNEZ DÍEZ, *Libro becerro de las behetrías: estudio y texto crítico*, León, 1981, t. I, p. 139.

ñoriales interactuando juntamente con la real en la localidad de Castrillo de Oniello:

Castriell d'Oniello. En Palencia

Este logar es behetria e es de Iohan Rodriguez de Torquemada e de Iohan de la Penna e de Gomes su sobrino e son naturales estos: el sennor de Lara e don Pedro fiio de don Diego e Ruy Gonçalez de Castaneda, Lope Diaz de Almança, fiios de Lope Diaz de Madrigal e los d'Aça e otros.

DERECHOS DEL REY

La martiniega tienen en cabeça DCCCC maravedis dan al rrey los DC maravedis e a los sennores CCC maravedis; asi son DCCCC m.

Dan mas al adelantado que diz que a de auer por derecho de martiniega. XXIII m.

Pagan seruicios e moneda. Non pagan fonsadera nin yantar.

Dan al meryno de entrada cada anno con carta de pago. XXV m.

LOS DERECHOS DE LOS SENNORES

Al sennor de Lara yantar

A los rricosomes cada anno por la Sant Iohan. VI m.

A los otros: dellos a IIII maravedis e dellos a II maravedis.

Pero estos oficiales no sólo podían proceder de una autoridad superior con intereses en la localidad sino que también podían proceder de otras entidades similares que quisieran hacer valer los derechos de alguno de sus vecinos¹⁰⁴. Incluso se podría hablar de la existencia de este privilegio frente a los oficiales de otros barrios o comunidades sociales de la misma villa. En Toledo existían merinos diferenciados para cada comunidad. En la confirmación que se hace en 1136 a los francos de sus fueros particulares se establece: «Et concedo vobis quod alter merino vel alter saion non intret in vestro barrio pro prendare vel aliquo malo facere, nisi vester proprius, quem habetis».

Frente a las ilícitas pretensiones de los oficiales foráneos las localidades gozan de los instrumentos jurídicos necesarios para salvaguardar sus prerrogativas. El desarrollo concreto de este derecho de oposición está plasmado en un diploma de 1012 conocido como «De fuero de Nave de Albura¹⁰⁵». Esta villa gozaba de una serie de franquezas: «ex quo fui edificata, Nave de Albura, non habuit fuero de omicidio, neque de fornicio, neque de sagione de rege ibi intrante». En un momento dado, Vela Ovecoz, Braulio de Portilla y Gutiérrez de Valcavado, merinos del conde castellano Sancho García, intentaron cobrar en la villa la caloña por «homicidio» a lo que se opusieron las *potestades* del lugar, Nuño Álvarez y Justa de Maturana. Las divergencias entre todas estas autoridades se resolvieron ante el conde, Nuño y Justa aportaron «suo escripto quod habebant de suo foro» y juraron la veracidad del mismo. Hay que destacar, un punto singular en esta historia como es la posición de las autoridades locales, las *potestades* que ocupan su cargo por nombramiento regio, no sólo ejercen funciones a favor suyo sino que están vinculados a las gentes del lugar, defendiéndolas de oficiales

¹⁰⁴ Santa Juliana (1045) 2: «Et vetamus de eas merinos et iudices et saiones de villas vel de hereditates tam in Asturias sive in Chastella». Vid. también Miranda (1099) 10, Mansilla 3.

¹⁰⁵ M. ZABALZA, *Colección...*, cit., n. 72, pp. 516-518.

superiores cuando entienden que los derechos y privilegios locales son conculcados.

El recurso a la fuerza no está en ningún caso descartado y el corpus foral recoge en varias ocasiones la no imputabilidad o la punición simbólica del homicidio del oficial regio que ejerce sus competencias de forma manifiestamente ilegal¹⁰⁶. Un ejemplo concreto de la actuación violenta municipal en defensa de sus libertades está en una de las fazañas contenidas en el fuero de Castrojeriz [1100-1107] que relata la toma indebida de prendas por parte del merino de la, por entonces, infanta Urraca. Las fuerzas vivas de la localidad fueron en pos de los bienes tomados y actuaron con contundencia llegando a consumir el asalto de su villa de Yzinaz donde cometieron numerosos destrozos: «In tempore illo uenit merino de illa infanta domna Urraca et accepit ipsa pignora et misit illa in palatio de illa infanta in uilla Yzinaz, et fuimus post illa, et rumpimus villa et palatio, et bibimus illo uino quantum potuimus et illo quod non potuimus bibere dedimus de manu per terra».

Para evitar la superposición de jerarquías señoriales y, por tanto, las fricciones en los puntos tangenciales entre unas y otras únicamente una persona podrá ejercer las competencias señoriales, de cualquier tipo, como en Santa María de Valluerca donde se prohíbe la actuación de oficiales extraños de modo que sólo podrá actuar el enviado por la iglesia titular y acompañado de un vecino de la villa: «statuo ut nullus dominus uille, nec merinus regius nec sayon, nec aliquis alius homo nisi fuerit de prefata ecclesia, a prefata collaciis aliquod requirat nec aliquod grauamen uel uiolentiam eis faciat nec aliquod unquam penitus regi uel domino illi pectent nisi cum uicinis uille secundum uicinitatem uille» —# 1—.

Otra forma de soslayar futuros problemas es establecer desde un principio la exclusividad de la figura del *dominus* como hace el abad de Sahagún en el primer fuero (1085) que concedió a villa: «Et quod numquam habeatis dominium nisi Abbatem et Monachos» —# 2—. Años después, en 1152, tras las turbulencias de la primera mitad del siglo XII el precepto se mantuvo introduciendo nuevos matices en la cuestión: «In primis: Homines Sancti Facundi non habeant ullum dominium in villa, nisi Abbatem solum, uel quem ille in loco suo dimiserit, quando Abbas in villa non fuerit. Et si forte aliquis populator de villa intus in villa alium dominum, quod absit, reclamauerit, pectet Abbati solidos sexaginta» —# 1—. En otros numerosísimos fueros se introducen artículos del mismo tenor con unos señores preocupados de salvaguardar sus intereses y unos vecinos que no desean estar sometidos a varias jurisdicciones¹⁰⁷. Pero no nos encontramos ante un precepto

¹⁰⁶ Fenar 5: «Si maiorinus fuerit de alia terra et ex forte ibi occisus fuerit, pectent tres arienzos». Sepúlveda (1076) 12: «Qui merinum interfecerit, conceio non pectet nisi singulas coneiuernas». Vid. también Melgar de Fernamental 9, San Andrés de Espinareda, Valdesaz de los Oteros 9, etc.

¹⁰⁷ Valga a modo de ejemplo esta breve relación: La Serna de San Vicente; San Martín de Madrid; Villa Ermenegildo 15; Orense (1131); Sigüenza (1140); Oviedo (1145); Fresno

de exclusivo carácter administrativo sino también social. Se está prohibiendo cualquier tipo de relaciones de dependencia de carácter privado entre particulares, los únicos vínculos admitidos en el municipio son los que se establecen entre el señor del mismo y los residentes. Se evitan así los problemas derivados del solapamiento de lealtades. Y esto es así tanto en localidades de señorío, caso de Sahagún, como en aquéllas que gozan de una amplísima autonomía.

4.2. Tipos de ciudades según su grado de autogobierno

A medida que los reinos cristianos van extendiendo sus fronteras hacia el Sur las necesidades militares y repobladoras hacen a los monarcas más proclives a compartir o, incluso, a ceder sus competencias con los municipios, siendo así que las localidades más expuestas a las presiones musulmanas serán las que en cada momento gocen de una mayor autonomía al compararlas con sus contemporáneas. De la misma manera las villas regias dispondrán de mayores cuotas de autogobierno que las dependientes de otros señores laicos o eclesiásticos. Las variaciones que se puedan introducir tendentes a la reducción de este predominio señorial vendrán dadas por concesión real y siguiendo criterios estrictamente particulares para cada localidad. La misma forma de expresarnos estas cuestiones es diferente según los textos, unos estipulan expresamente las competencias de cada esfera de poder; otros, por su parte, se limitan a señalar la transmisión al concejo de la potestad, plena o compartida, de nombrar a los oficiales encargados de desempeñarlas.

4.2.1. Ciudades sin autogobierno

Se encuadrarían bajo este apartado todas aquellas localidades que como León sólo tienen capacidad para la gestión de la vida económica. Las competencias administrativas y judiciales son monopolizadas por oficiales señoriales y los vecinos tienen una limitada capacidad de respuesta frente a su actuación irregular.

El primer día de Cuaresma los leoneses todos, residentes en la villa y en el alfoz, van a reunirse en la iglesia de Santa María de la Regla y van a fijar los pesos estándares correspondientes a las mercancías de primerísimo interés así como los salarios pagaderos en la villa —# 29—. Igualmente autorizan el establecimiento de comercios y nombran a los zabazoques, funcionarios encargados de la vigilancia del mercado —# 35—.

La justicia va a ser ejercida en primera instancia por jueces nombrados por el rey y cuya autoridad se extiende a toda la población —# 18—. Las apelaciones y las causas en las que se encuentran directamente implicadas la Iglesia y el Estado se llevan ante una asamblea formada por los principa-

de la Ribera 13; Toledo [1166 ?] 34; Uclés (1179) 5; Palencia (1181) 4. Durante el durante el siglo XIII se sigue manteniendo la cláusula y se expande definitivamente con el fuero conquense (1,16): «Quod in Concha subtus regem non sit nisi unus dominus».

les personajes del reino: «omnes pontifices, abbates et obtimates regni Ispanie». En esta institución se constata una clara influencia de los concilios toledanos, tanto en su composición como en el modo de actuación, resolviendo en primer lugar los asuntos eclesiásticos, a continuación los estatales y, finalmente, las causas privadas —# 1—.

Administrativamente la ciudad también se encuentra bajo el gobierno y control de los oficiales reales: merino y sayón, quienes reciben las denuncias —# 37—, toman las prendas —## 17, 25, 39, 42, 46, 47, 48—, perciben las multas —## 30, 31, 32, 35— y los impuestos —## 44, 45—, etc. Gozan en el ejercicio de su cargo de la máxima protección castigándose las injurias y las agresiones contra ellos con la máxima calaña: quinientos sueldos, como los nobles —# 15—.

Esta organización del municipio leonés brevemente esbozada va a ser a grandes rasgos la más característica al norte del Duero a través de la enorme expansión de su fuero y del de Logroño, donde volvemos a encontrar el monopolio señorial en el nombramiento de todos los oficiales: «Senior qui suiugauerit ipsa uilla et mandauerit omnes homines, non mitat alio merino nisi populator istius villa. Similiter mitat alcaldes. Similiter saione¹⁰⁸». Como se ve aquí ya aparecen los vecinos, sobre los que recae el privilegio o la carga, según se mire, de ejercer la magistratura. Es ésta una cláusula muy interesante desde el punto de vista colectivo. La comunidad vecinal prefiere que sea uno de los suyos quien actúe de intermediario frente al señor y recaude sus derechos y ejerza sus competencias, ya que en caso contrario la opción pasa por someterse a un extraño, sin arraigo en la localidad y únicamente atento a servir al señor lo mejor posible para medrar a su servicio.

Sin embargo, en el plano individual lejos de ser algo querido, el cargo entraña desventajas ocultas que pronto lo van a hacer indeseable. El ejercicio del merinato es en realidad una más de las prestaciones personales que recaen sobre los vecinos. El firme ejercicio de las competencias anejas al cargo significa que la persona sobre la que ha recaído la obligación ha de ponerse en muchas ocasiones en contra de sus propios convecinos y responder con sus propios bienes del importe de los derechos señoriales, de ahí la exigencia de casas y fincas que se cita en varios fueros. Así ocurre en Miranda —(1099) 10—: «merinum populatorem de uilla qui habeat ibi casas et hereditates». Si por un lado apretaba el señor, por el otro estaban sus convecinos que no aceptaban que se excediera en su labor, llegándose al establecimiento de una cláusula penal que establecía la no punición del homicidio de este merino-vecino que entrara en casa ajena¹⁰⁹ o simplemente que fuera «mali aut superbi¹¹⁰» durante el desarrollo de sus funciones. Para evi-

¹⁰⁸ Logroño (1095) 24. Vid. también Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, Vitoria, Medina de Castilla Vieja, Antoñana, etc.

¹⁰⁹ Logroño (1095) 5: «Et si desuper hanc causam, siue merino siue sayone uoluerint intrare in illa casa de alicuius populator, occidantur et proinde non pecte[n]t homicidium».

¹¹⁰ San Vicente de la Sonsierra: 22: «Et non mitatur merinus nec saion nisi de sua villa;

tar problemas de este tipo en Agüero se establecía un turno rotatorio para el ejercicio del cargo por todos los vecinos¹¹¹. Este expediente no evitaba el deterioro de la vida local y sólo conseguía diluir el problema entre todos los vecinos que en algún momento de su vida se verían inmersos en una situación complicada nadando entre dos aguas igualmente peligrosas, tratando de guardar un delicado equilibrio entre señor y concejo en el que patrimonio y vida se encontraban en el alero.

4.2.2. Municipios incompletos. Prevalencia del poder real

Entendemos como tales aquellos que gozan de una limitada autonomía para la gestión de sus asuntos propios. A la posibilidad de gestionar su vida económica se une el ejercicio de las competencias ejecutivas hasta entonces ejercidas por los sayones señoriales. El municipio por tanto ya no está sometido a la, en muchos casos, actuación discrecional de estos funcionarios. Serán funcionarios nombrados por los vecinos quienes se encargarán de la recaudación de los derechos del señor en la villa y de la posterior entrega a su merino. Pero como en el apartado anterior se establecen garantías para el correcto ejercicio de la labor de estos oficiales autónomos. En el fuero de San Miguel de Escalada (1173) el merino del monasterio requiere a los vecinos cada año el nombramiento de un sayón y establece las multas a que se hace acreedor si no cumple adecuadamente con su labor y la responsabilidad total de las caloñas que deje de recaudar¹¹².

Un municipio de este tipo aún controlado en buena medida por la maquinaria regia es el caso de Nájera donde nos aparece un juez real encargado de las causas por homicidio: «Si aliquis homo occiderit hominem et illum homicidam potuerunt habere uel accipere usque in septem dies, ipsum dent ad iudicem, id est, ad uicarium regis, quia non debent amplius homicidium» –# 8–. No obstante, ni este juez ni sus subordinados van a poder aplicar la fuerza en el cobro de las caloña derivadas de este delito ya que en varias ocasiones al establecerse las cantidades a pagar por los distintos casos de homicidio siempre se cierra el precepto con la expresión «sine saionia» –## 1, 2, 3, 53–. El juez entonces se ve obligado a recurrir a oficiales locales para el cobro de estos derechos regios. Los únicos que nos aparecen nombrados son los sayones que en número de dos son otorgados por la asamblea vecinal: «Et concilium de Nagera debent dare pro fuero duos saiones unoquoque anno» –# 77–. ¿Qué método es utilizado para el nombramiento de estos oficiales municipales? De acuerdo con el fuero de Oca és-

et si fuerint mali aut superbi contra vicinos, occidantur, et non pectent homicidium, et habeant alcalde suum vicinum».

¹¹¹ Agüero 9: «El merino camies cada anno fata ches cumpla toda la villa e faga ruego de V solidos a cabo de uno anno, e las perdidas que fiziere el senor de las calonnas que acaescan o de sos derechuras por encobamiento del merino, ques las peche».

¹¹² San Miguel de Escalada 6: «Maiorinus monasterii queret in unaquaque villa sagionem, et dabunt ei, nec de maioribus nec de minoribus; usque ad annum, alium non dabunt ei. Si depossuerit post duos vel tres menses, persolvat unam reiam; si post medium annum, medium arietem; si annum integrum, arietem unum. Si calumpniam laxaverit, pectet eam».

te parece quedar al arbitrio del *concilium* que optará por la elección y en caso de falta de acuerdo o ausencia de candidatos por el sorteo: «neque saione non habeatis nisi quaecumque uos quiesieritis quae in concilio uestro ponatis aut extrahatis».

4.2.3. Municipios intermedios. División del poder

Un paso adelante en el creciente acaparamiento competencial por los órganos municipales, respecto del punto anterior, se comprueba en las localidades siguientes donde las autoridades municipales no se limitan a ejecutar las decisiones judiciales tomadas por los oficiales señoriales sino que participan en la toma de las mismas. Del quinquenio 1129-1134 tenemos los primeros ejemplos de estas novedades. Ahora los oficiales municipales van a resolver los litigios económicos hasta cierta cantidad, en tanto que los que superan la misma pasan directamente a la justicia real. Por su parte los asuntos de carácter penal han de juzgarse por un tribunal mixto.

El sistema viene a ser el mismo en los tres ejemplos que vamos a exponer: la identidad entre Escalona y Guadalajara se aprecia directamente en la distribución de las causas, y las semejanzas entre Escalona y Paredes de Nava son también manifiestas en el nombramiento de los oficiales, por más que la terminología de los mismos pueda inducir a la confusión¹¹³. Se comprueba cómo cada una de estas villas pertenece a cada una de las grandes regiones que se reconocen en el reino de Castilla: Paredes de Nava a Castilla la Vieja, Guadalajara a la Extremadura y Escalona a Toledo. Esta distribución espacial parece indicar que detrás del privilegio municipal concedido en cada caso particular subyace un deseo real de ganarse el apoyo de sus súbditos frente a los continuos conflictos que le enfrentan con los almórabides, pero también con otros reinos cristianos como Portugal y Aragón.

Un breve acercamiento a estos tres fueros nos permite apreciar como en Paredes de Nava los vecinos obtienen la prerrogativa de nombrar a cuatro jueces, aunque el señor se guarda la última palabra, mientras que el resto de oficiales son puestos por este último¹¹⁴. Sin embargo, aunque las competencias judiciales quedan en manos de los jueces el merino señorial preside el tribunal y se encarga de la aplicación de las penas¹¹⁵. De forma análoga en Guadalajara el conocimiento y fallo de las cuestiones judiciales queda repartido entre las autoridades municipales y las reales. Las lesiones

¹¹³ El juez real y los cuatro alcaldes municipales de la primera de estas localidades son exactamente los mismos que el merino real y los jueces municipales de la segunda.

¹¹⁴ Paredes de Nava (1129) 2: «Y el mismo señor vuestro tenga su mayordomo y su merino y su sayón; constituidos entre vosotros, cuatro jueces, y recíbalos el señor vuestro o su merino y no constituya éste otros sobre éstos, ni sean sus parciales; y cuanto ellos juzgaren entre vosotros y el señor vuestro sea estable y firme, y haya testigos, y no recibais otros legos del señor vuestro»

¹¹⁵ Paredes de Nava (1134) 2: «El merino tenga sus juicios ante los jueces y ellos dispongan del fiador, y sobre el juicio que iuzgaren cual deba ser, y este valga y no otro, y aquellos jueces den su testimonio». Paredes de Nava (1133) 8: «Si fuese ladrón o malhechor y los jueces juzgasen que debe ser ajusticiado, haga justicia de él el merino de la villa con los jueces y con el concejo, y no de otro modo.

y homicidios han de ser fallados conjuntamente por el juez municipal y el merino real¹¹⁶. Las disputas económicas menores serán resueltas por un alcalde municipal, aunque aquéllas en que el montante económico exceda de diez sueldos pueden quedar retenidas hasta que el rey aparezca por las cercanías¹¹⁷. Por su parte Escalona presenta rasgos comunes a las villas anteriores, el juez real juzga acompañado de cuatro alcaldes municipales elegidos por los vecinos¹¹⁸ y se establece la división competencial en los delitos económicos, aunque en este caso la cifra límite se sitúa en cinco sueldos¹¹⁹.

Dos décadas después, en 1152, Sahagún recibe por parte de Alfonso VII un nuevo fuero con el que se pretenden zanjar las violentas discordias que habían enfrentado a los vecinos contra el abad a todo lo largo de la primera mitad del siglo XII. El sistema organizativo en él recogido pronto se extenderá por otras villas de León y de Castilla, siempre en zonas norteñas: Alláriz [1153-1157], Ribadavia (1164), Bonoburgo de Caldelas (1172 y 1228), Santander (1187), Santo Domingo de Silos (1209) y Santillana del Mar (1209). En Sahagún los dos merinos de la villa reciben su cargo «per manum Abbatis et autoritate concilii¹²⁰», expresión un tanto críptica que el fuero de Mahudes nos aclara. Estos oficiales son elegidos por los vecinos para a continuación el señor, en este caso el monasterio de San Pedro de las Dueñas, ratificar la decisión: «Maiorinus sit de Mafudes tali quam uobis placuerit inter uos, postea forte eum ante priorem et mitat de manu sua» —# 15—. Es decir, los vecinos reunidos en *concilii* elegirán a los dos merinos, uno para los castellanos y otro para los francos, quienes como máximos oficiales de la villa y encargados de la recaudación de los derechos señoriales deberán ser aceptados por el abad. Pero además los merinos también se constituyen en jueces y así se les ve castigar, junto al *concilii*, al «traditor probatus et fur cognitus»¹²¹.

¹¹⁶ Guadalajara (1133) 6: «De caloñas y de llagas, si quier de homicidio, que voz debare ante el juez, e ante el merino, que peche al rey la septima parte, y asi el señor non firme sobrellos; et si aquella voz non fuere fallada, ni levada ante el juez e merino, faga cada uno su voluntad entre vecino y vecino, y peche toda aquella caloña el vecino al vecino, furto y traicion todo sea a la parte del rey».

¹¹⁷ Guadalajara (1133) 14: «Et si alguno oviere iudicio con su vecino, fasta diez sueldos esten a iudicio de su alcalde, y de diez sueldos arriba, si se donare al rey, esperen alli al rey fasta que venga a estas partes».

¹¹⁸ Escalona (1130) 1: «In primis, ut eligatis ex nobilissimis et sapientissimis vestris quator, qui semper sint una cum iudice ad examinandum iudicia populorum». El nombramiento de los alcaldes municipales se reitera en el precepto 37: «Et nos Concilio de Scalona habemus foro pro poner alcaldes annos colaciones: e diónoslo Didacus Alvariz pro foro». Esta reiteración y la ausencia de una mención parecida sobre el juez nos inclina a pensar que el nombramiento del juez no pertenece al ámbito local.

¹¹⁹ Escalona (1130) 32: «Ad directo, de V solidos aripa vadat ad Toletu; de V solidos (aiuso) prendat iudicio de alcaldes de villa».

¹²⁰ Sahagún (1152) 7. Vid también Alláriz 4; Ribadavia 4; Bonoburgo de Caldelas (1172) y (1228); Santo Domingo de Silos (1209). San Emeterio / Santander 8 y Santa Juliana / Santillana del Mar 8 siguen una fórmula cuasi-idéntica: «per manum abbatis et concessione concilii».

¹²¹ Sahagún (1152) 23: «Traditor probatus et fur cognitus sint in iudicio Majorini et concilii, et omnia illorum sint Abbatis. Sed de rebus latronis prius restituantur furta quae fecerat, domino cui furatus fuerat».

Un sistema análogo se da en Galicia, entre las villas dependientes del monasterio de Meira –San Esteban, Texedo, Monte Zandiu, Trabada y Vilanova de Archay y Albare–, donde nos encontramos también a dos «alcaldes» al frente del municipio, cargo que ya se ha consolidado en ese momento –1238–. En estos lugares nos encontramos con el reparto del nombramiento de los alcaldes, uno será puesto por el señor y el otro por los vecinos: «Et nos debemus mittere unum alcaldem et illi alterum per quos debemus istas uoces et alias directuras nostras accipere,...».

En las encomiendas que las Ordenes Militares detentan con abundancia por las Extremaduras y la Transierra, el sistema es también básicamente el mismo, pues nace del concierto entre señor y vecinos, aunque el modo concreto de elección de los oficiales es opuesto al de Sahagún. En Huerta de Valdecarábanos el comendador de la Orden de Calatrava nombrará juez y alcaldes tras una preceptiva consulta previa a los «bonorum hominum»¹²², análogo proceso es el que se da en los lugares emeritenses pertenecientes al arzobispo¹²³. En estas localidades el juez asume las funciones antaño ejercidas por el merino señorial: «In domo vicini nullus homo comendatoris intret pignorare pro ullis rebus, sed solus iudez pignoret et querat omnia que comedatoris sunt. Iudez querat calupnias et homicida per forum Toleti».

Extendido a lo largo de León y Castilla, topamos también con otra variante de este sistema organizativo como es el acuerdo de voluntades nacido de la reunión conjunta de los interesados¹²⁴: señores y vecinos. Todo el concejo como bien se encarga de señalar el fuero de Oña (1190): «Alcaldes uero, quos abbas cum omni concilio posuerit» y el de Villavicencio (1221): «Por la

¹²² Huerta de Valdecarábanos: «Comendator Castelli cum consilio bonorum hominum iudicem et alcaldes ponat, et nullus habeat alcaldiam, nec iudicatum nisi per unum annum, et isti sunt ex vicinis».

¹²³ Mérida 7 (1235): «Alcaldes vero ponantur annuatim per Archiepiscopum, & fratres cum consilio bonorum hominum de civitate, & quicumque morantur in civitate, vel termino, vel de catetero morabuntur, sint vasalli Archiepiscopi, & fratrum, & alcaldes debent esse iurati, quod sint fideles, & iusti». Fuera de nuestro ámbito de estudio, en la extremadura aragonesa, la Orden del Hospital sigue el mismo sistema aunque aquí el pláacet vecinal parece darse *a posteriori* –Cetina (1151-1157): «Et prior de Ospitali ponat iudice et saione, et sint vicinos, et placeant ad vicinos»–.

¹²⁴ Alhóndiga 15: «Iudex et alcaldes duos intrent pro manu senioris et concilii. Unoquoque anno mutetur iudicem et alcaldes in die Natalis». Quintanilla del Páramo 4: «Marinum ponere et sagionem in uilla per manum abbatissa et concilii». Dosbarrios (1192) 9: «Alcaldes et iudex pongan cada anno los seniores et el concejo». Belinchón (1198): «Insuper quoque majordomus noster simul cum concilio ponat annuatim iudicem et alcalles». Con carácter general para cualquier discrepancia surgida de la interpretación del fuero ya se prevee en Noceda de Cabrera esta reunión: «Et si inter nos et vos contemptio fuerit super ipsos foros, veniant de vestro concilio de illos melioribus ad nostrum capitulum qui deliberent nobiscum suo directo cum iustitia et veritate, et etiam, si necesse fuerit, ante iudices et rectores terre cum nostra carta, et stent quedados et pagados usque ad directo compito per concilio et ipse iudice de illa villa intret et exeat, cum voluntate et consilio abbatis et seniorum Sancti Petri et de vestro concilio» –# 9–.

fiesta de Sancti Johanis Babbiste a iuntarse el concilio con nos herederos, que furen ena villa, et pongan sos alchaldes et andador; e los cotos, que posieren, sean tenudos ata otrano, que pongan otros alchaldes» —# 45—. Un momento, ¡la duración de los cotos tiene una validez de un año hasta la renovación de los oficiales!, ¿estamos quizás ante una pervivencia del edicto pretorio romano o es una mera coincidencia?

4.2.4. Municipios plenos. Poder municipal desarrollado o completo

Un último grupo está formado por todas aquellas localidades que tienen plena independencia a la hora de nombrar sus magistrados y por tanto las competencias por ellos ejercidas no están supeditadas en modo alguno a la injerencia señorial. El municipio ya aparece configurado en la segunda mitad del siglo X como consta en el fuero de Salas de los Infantes (964)¹²⁵: «Habeant suum saionem et iudicem, et non vadant in fonsado nec pagant fonsadera» —# 4—. El desarrollo pleno del régimen municipal se va a dar al sur del Duero, en la Extremadura, y su prolongación más allá de la Cordillera Central, la Transierra. El sistema alcanza su momento culminante en los primeros decenios del siglo XIII y su testimonio más fiel es el fuero de Cuenca.

Sepúlveda (1076) 24: «Alcayde neque merino neque archipresbiter non sit nisi de uilla; et iudex [sit de uilla et a]nnal et per las collationes, et de cada homicidio accipiat V solidos».

Fresnillo de las Dueñas 12: «Et ut vos ipsos homines de Fresno ponatis vestro iudice et vestro saione per foro».

Molina 12: «Yo, el conde Almerrich, do a uos el fuero que uos el conçeio de Molina siempre pongades juez et alcaldes en cada vn ano de cada vna collación çompeçantlo a la fiesta de Sant Migaél fasta vn anno, acabando en aquella misma fiesta».

Cuenca 16,1: «Sequenti die dominica post festum Sancti Micaelis concilium ponat iudicem et alcaldes, notarium et questores, sagionem et almutazaf, quolibet anno per forum».

Simultáneamente se comprueba que los oficios señoriales se cubrían siempre por personas de fuera de la villa. Este proceso se inició en Palenzuela donde se logró una primera limitación al ejercicio del merinato al conseguir su ejercicio voluntario de la magistratura: «Nullus homo de Palencia sit celariero neque aerero nequed portero neque merino si ipse noluerit,...» —# 35—. Continuó en la extremadura oriental castellana y en las áreas navarras y aragonesas fronteras con ella donde se admitía el ejercicio del cargo pero el municipio imponía una multa de cuantía tan descomunal al audaz vecino que se atreviera a ello que raro sería aquél que lo asumiera¹²⁶. La prohibición absoluta que ya aparecía en el fuero breve de Sepúlveda continuaba cien años después en el fuero conquense: «Vicus Conche non sit

¹²⁵ Recientemente este texto ha sido puesto en duda (M. ZABALZA, *Colección...*, cit., p. 386).

¹²⁶ Calatayud (1131) 14: «Et nullo vicino non sit merino de rege neque de seniore; et qui ibi intraverit pectet M solidos ad concilio», también presente en los mismos términos en Soria / Cáseda 15: «Vicino de Casseda non sedeat merino, et si se fecerit merino peitet mille solidos ad concilium, et occidant illum».

telonearius, neque merinus, nec iudeus similiter¹²⁷» En el intervalo entre uno y otro texto son varios los fueros de la zona que se manifiestan de la misma manera¹²⁸.

De esta manera, al final se optó por la decisión de separar totalmente este cargo ejecutivo y señorial de la condición vecinal cediendo en el proceso sus funciones coercitivas a las magistraturas locales, de forma total o compartida, o manteniéndolas pero sometidas al control municipal¹²⁹. No obstante, la autonomía de algunos de estos concejos extremaduranos aunque bastante desarrollada no es absoluta y en los textos se encuentran menciones a la actuación conjunta de éstos con los oficiales señoriales. Es el caso de las villas del arzobispado toledano –Alcalá de Henares, Brihuega, Fuentes de la Alcarria– cuyos vecinos nombran a los principales oficiales del municipio: juez, alcaldes y jurados¹³⁰; e, incluso, llegado el caso también hacen lo propio con los pertenecientes al arzobispo; lo que ocurre cuando éste se demora en su nombramiento. En este caso quienes actúan son los jurados: «Si por abentura el señor detardare de poner aportelados los iurados aian acomendada la uila de tenerla a derecho fasta que el señor de aportelados en la uila» –# 193–. Aunque procedentes del mismo entorno social y obtenido su cargo oficial de la misma forma¹³¹ los jurados se diferenciaban

¹²⁷ Cuenca 1,17.

¹²⁸ Molina 11, Belinchón (1171) 28, Zorita (1180) 25, Santa María de Cortes [1180-1182] 13, Guadalajara (1219) 42,... La versión A del fuero latino de Sepúlveda, artículo 24, nos da una versión diametralmente opuesta de la cuestión: «Alcayde neque merino neque archipresbiter non sit nisi de uilla». Ante la duda preferimos la versión B, más ajustada a los usos extremaduranos y con una redacción casi coincidente con la del fuero de Molina: «Vezino de Molina non sea alcayat nin merino nin arcidiano nin dean».

¹²⁹ Estas restricciones que sufren los merinos reales se movieron hacia el Norte. Tanto en León como en Castilla asistimos en el tránsito de los siglos XII y XIII a una creciente tendencia a limitar su actuación individual a los delitos más importantes u obligándole a conseguir una autorización o haciéndole acompañar de autoridades municipales. En Belver de los Montes la actuación del merino sólo se producirá si éste está acompañado quedando obligado a custodiar la prenda en la localidad: «Maiorinus non vadat ad nullam calumpniam sine alcaldes, et firmet cum III omnes bonos postariis; et si in Belveer maiorinus pignoraverit, non levet pignora de villa, et si levaret de villa, concilio tollat eam sine calumpnia» –# 53–. En Villafranca del Bierzo sólo se puede realizar la prenda de forma directa en los delitos más graves: «Nengun merino, non mayordomo, no sea ousado de embargar nen de prender por nenguna calunna en Villafranca sen voz dada dalguen, salvo ende por homicio e por rouso» –# 3–. En Laguardia (1208) sólo se permite la prenda del merino o del sayón con la aquiescencia de los vecinos «non prengan deillos ninguna cosa por fuerça sino fuere por uoluntat deillos». En Puebla de Sanabria los oficiales señoriales no pueden entrar en casa de un vecino para hacer efectiva una caloña judicial si no van acompañados de los alcaldes de la villa y de cuatro hombres buenos: «Ningún merino o sayon no entre en la casa del poblador de Senabria por caloña ninguna, e nos tenemos por bien que no y entre si non con los alcaldes e con cuatro omes buenos de la villa» –# 14–. De forma similar en Oña este registro requiere de oficiales de ambas administraciones: «Scrutinium uero non detis in domibus uestris, nisi uestro concilio pariter cum merino».

¹³⁰ Alcalá de Henares (1223) 5: «Aportellatos in villa nos faciemus, sicut ipsos facere actenus consuevimus; sed Jurati et alcaldes et Judex sint annales» Análogamente en Brihuega (1223) 9.

¹³¹ Salamanca 281: «Et los alcaldes e las justicias sean en su portiello fasta un anno; e

netamente del juez y de los alcaldes y cada colectivo defendía intereses diferentes y respondía ante distintos superiores, rey y concejo, respectivamente. No obstante, unos y otros funcionaban codo con codo cuando no conjuntamente, lo que les estaba vedado: «Et si las iusticias e los alcaldes unos se fezieren sean alevosos e periurados de conceio e meta el conceio otro en su lugar» —# 300—.

La presencia de estos jurados o justicias, como también se les conoce, no es excepcional, sino que nos encontramos ante una institución de reconocido prestigio como lo delatan su presencia en otras localidades extremeñas y transerranas: Madrid (1202), Guadalajara (1219), Escalona (1226), Salamanca [s. XIII], etc.

El caso más completo de autogobierno local y el mejor documentado es el de Cuenca y el resto de poblaciones de realengo que asumieron con mayor o menor fidelidad su fuero. Éste nos muestra una ciudad plenamente autónoma y donde el rey queda con unas competencias muy recortadas, pero ello ha sido así por decisión suya para beneficiar a sus súbditos y, por lo tanto, su figura se mantiene incólume y goza de privilegios especiales y de la mayor protección. En Cuenca cuando los oficiales municipales presentan su juramento de fidelidad al concejo se ofrecen al mismo con la única salvedad del honor del rey¹³². Los delitos cometidos contra el rey o su representante revisten la mayor protección posible, siendo las penas recibidas objeto de una significativa dureza: pena de muerte y confiscación del patrimonio¹³³.

El rey puede intervenir en determinadas cuestiones del concejo¹³⁴, por ejemplo, puede ordenar al escribano la escritura o el borrado del «Libro» del municipio. Estaríamos ante cuestiones de muy alta importancia, relacionadas con cuestiones legislativas o judiciales, concesión y derogación de leyes, privilegios, franquezas,... o el ejercicio de la gracia real; ya que la mera gestión municipal, como es la llevanza de la contabilidad municipal y el padrón, la ejecuta el escribano de forma autónoma. En Cuenca los testamentos son ratificados por el juez y el sayón, junto con el merino real¹³⁵. En las cuestiones militares se establece la dirección conjunta: *dominus ville*, juez y alcaldes encabezarán las operaciones militares que se emprendan desde la villa¹³⁶. En este terreno el rey continúa detentando el derecho a la entrega del general musulmán a cambio de una gratificación de cien maravedís¹³⁷.

los otros que con ellos entraren, e vieden fuerça e virto commo lo an jurado». Vid. también Alcalá de Henares (1223) 5, Brihuega (1223) 9.

¹³² Cuenca 16,7.

¹³³ Cuenca 11,15; 12,2; 43,10 y 43,12.

¹³⁴ Cuenca 16,27: «Notarius sit fidelis in libro legendo, in computacione concilij, et in patrone concilij, quod semper eum teneat qualen illum cum adiurati scripserit. Caueat etiam, ne in libro aliquid abradat, aut scribat siue precepto regis, uel totius concilij. Computaciones iudicis et alcaldum fideliter teneat ne in eis fraudem faciat».

¹³⁵ Cuenca 10,10: «Huius rei testes sunt, quorum nomina subsecuntur, f. p. d. j. Era millesima ducentesima. Sub rege N.º Sub iudice N.º Merino N.º Sayone N.º».

¹³⁶ Carcastillo / Medinaceli 11: «Caballeros de Carocastello baiant illa tercera parte in

Pero se trata de casos excepcionales, la gestión del resto de los asuntos propios de la ciudad pertenece en su totalidad a las autoridades municipales. Por ejemplo, en la resolución de las causas judiciales, no se permite siquiera la presencia en la sala de vistas al señor de la villa, con objeto de que el juez o el alcalde no se sientan coartados o presionados con su presencia¹³⁸. El merino, a su vez, tampoco puede entrar en los juicios que se celebran a diario en la puerta del juez, en cambio sí está autorizado para intervenir en el tribunal de los viernes donde se ventilan cuestiones en las que le toca defender los intereses del soberano¹³⁹. No obstante, en cualquier momento, juez y alcaldes pueden declarar el secreto de las actuaciones y exigir la salida de los presentes, incluido el merino¹⁴⁰.

Al frente de la administración real está el *dominum* quien se verá auxiliado en sus funciones por un alcaide, como custodio del castillo, y un merino, al frente del pequeño aparato administrativo: «subtus regem unum dominum, et unum alcayat, et unum merinum habeatis¹⁴¹». Sin embargo para la ejecución directa de cuantas acciones sean precisas sobre los vecinos para hacer efectivos estos derechos el merino carece de competencia alguna y debe solicitar de las autoridades administrativas el ejercicio de tal o cual actuación y supervisar la misma. Tampoco puede recaudar los impuestos

fosado cum rege, aut cum seniore, quelque remangat de illa tercera parte, peitet fonsato V solidos». Carcastillo / Medinaceli 16: «Et cabailleros de Carocastello qui fuerint in fosado cum rege, vel cum suo seniore, dent una quinta». Estremera 14: «Cavalleros de Estremera qui fuerint in fonsado cum suo seniore dent una quinta». Cuenca 30,9: «Speculator qui in totam diem minguam fecerit qualencumque, penitus mercedem amittat. Dominus ciuitatis cum iudice et alcaldibus regat exercitum. Illi sint rectores quos isti preceperint esse».

¹³⁷ Cuenca 30,34: «Si maurus alcayat dominus, qui tunc teneat castellum, captus fuerit, si rex eum habere uoluerit, redimat eum centum aureis, et sit regis». Se trata de una norma antigua y extendida por todos los reinos peninsulares. Vid. también Calatayud 20, Cáteda 33, Guadalajara (1133) 19, Daroca 12a, Molina 11, Belinchón 18, Uclés (1179) 23, Santa María de Cortes (1182) 12, Coria 181, Teruel 430.

¹³⁸ Cuenca 24,19: «Dominus conche in curia alcaldum in die ueneris non intret: in alijs diebus intret, cum sibi placuerit. Tamen dum domines in curia steterit, nullus alius iudicet. Si iudex aut alcaldis domino presente iudicauerit in curia, pectet petitionem quereloso, pro qua iudicium datum fuerit. Hoc ideo stabilitum est, ne iudex aut alcaldis timore, aut uerecundia domini iudicet iniuste». Vid. también Uclés (1179) 27, Belinchón (1171) 34 y Estremera 27.

¹³⁹ Cuenca 24,20: «Si merinus in curia alcaldum intrare uoluerit, intret in die ueneris, et sit ibi, donec iudicia sint finita. Introitum curie in alijs diebus ob hoc merino defendimus, quia cum iudex debeat colligere calumpnias ad proficium concilij et palatii, et sacramento inde teneatur, non est opus, ut ipse in curiam intret in alijs diebus, cum pocius ad uisitandum, quam ad iudicandum intret. In die ueneris intrat ideo, quoniam merinus in compositionibus et solitionibus columpniarum palacij debet interesse». Vid. también Belinchón (1171) 34, Uclés (1179) 27, Estremera 27.

¹⁴⁰ Cuenca 24,21: «Cum iudex et alcaldes secreti loqui uoluerint, exeat a curia merinus, et sagio, et omnes deambulatores, quia numquam secretum erit quod ad aures alicuius istorum peruenerit».

¹⁴¹ Cuenca 1,16.

reales, ni proceder contra los viecos renuentes al pago, cuestión que compete en exclusiva al juez de la villa¹⁴².

5. - Organismos de poder municipal

5.1. *Concilium*

El *concilium* se perfila en estos momentos como heredero directo de sus homólogos altomedievales: la asamblea urbana y la reunión judicial de distrito, conserva todas sus funciones y las aumenta con otras nuevas. El *concilium* aparece configurado en la Edad Media como el organismo depositario del poder local en todas sus facetas y en él radica la personalidad de la población. No representa a sus habitantes, todos forman parte de él y participan en el mismo, siendo la asistencia obligatoria en determinadas ocasiones.

Todos los poderes emanan de él y pueden ser ejercidos por sí o delegados en los oficiales municipales sancionados ante él: «Concilio isto debet congregare in Uerruga pro suis foros et iunctas et iudicios et totos suos directos¹⁴³». Ejerce la potestad legislativa que se encuentra limitada a terrenos muy precisos, generalmente económicos y, en menor medida, penales y procesales y siempre en cuestiones donde no interfiera con la legislación real o señorial¹⁴⁴. En ocasiones esta competencia sólo se ejerce en comandita con el señor o sus representantes¹⁴⁵. Actúa en numerosos trámites del procedimiento judicial, siendo la última instancia de la administración de justicia¹⁴⁶. La razón de su omnipresencia viene dada por las limitaciones propias de la época a la hora de dar a conocer los pormenores y la situación en que queda una causa judicial. Es necesario lograr la máxima publicidad en estos casos y eso se logra únicamente haciendo intervenir a la asamblea como testigo de la celebración de todos los trámites procesales. Interviene como órgano validador de gran cantidad de negocios jurídicos que se formalizan ante él¹⁴⁷. Interviene en la economía¹⁴⁸, dirige la hacienda¹⁴⁹ y la administración local¹⁵⁰ y protege a los vecinos frente a los abusos de las autoridades señoriales¹⁵¹. Igualmente asume la representación del municipio encargán-

¹⁴² Cuenca 16,15. Vid. también ## 1,22 y 24,20.

¹⁴³ Fenar 12.

¹⁴⁴ Madrid 110,21, 111-116.

¹⁴⁵ El ejemplo más claro son las cláusulas sancionadoras de muchos fueros donde se reconoce el carácter contractual de estas leyes-marco. Aparte en el corazón de los fueros muchas normas conservan este carácter dual: Uclés 65, 107, 194 y 204.

¹⁴⁶ Yanguas 29, Cuenca 24,5.

¹⁴⁷ Cuenca 10,7; Brihuega 311; Alcalá de Henares 269 y 277,...

¹⁴⁸ Mayorga de Campos 9, Villafranca del Bierzo 10, Molina 26, Uclés (rom.) 180,...

¹⁴⁹ Paredes de Nava (1128) 4 y 5; Cuenca 16,12; Alcalá de Henares 167; Molina 5,...

¹⁵⁰ Madrid (1202) 87; Cuenca 10,39; 16,31; 16,35 y 16,47; Alcalá de Henares 139, 152 y 200; Brihuega 318 y 319;...

¹⁵¹ Sepúlveda (1076) 21, Guadalajara (1133) 7, Villaviciencio (1091-1136) 28, Yanguas 11,...

dose de su cohabitación con otras esferas de poder del propio reino o ajenas al mismo. Por ello nos lo encontramos decidiendo sobre la idoneidad de operaciones militares contra los musulmanes¹⁵², del establecimiento de treguas con éstos o con otros concejos¹⁵³, de autorizar la toma de prendas fuera de los límites del concejo cuando no de organizar expediciones para efectuarlas¹⁵⁴, de enviar comisionados ante el rey, etc.

El concejo está formado por la agrupación de los vecinos de la villa que se subsumen en él: «que todo el pueblo de Salamanca se(a) un concejo e uno¹⁵⁵». Se hace referencia a esta participación universal con independencia de su posición en el escalafón social en las cláusulas corroborativas de los fueros. Venialbó habla de «maiores et minores¹⁵⁶», Toledo de «militibus quam peditibus¹⁵⁷», Ocaña de «grandes y pequeños¹⁵⁸» pero la mayoría de los textos se limita a indicar la presencia de «toto concilio¹⁵⁹». Sin embargo, bajo estas referencias se oculta, en muchos casos, una amarga realidad, ya que no se refieren a la generalidad de los residentes. El *concilium* va a sufrir entonces así una importante merma de su carácter representativo respecto del período altomedieval del que como se ha comentado podían formar parte todos los habitantes de una localidad, en algunos casos incluso se citaba la presencia de mujeres. La condición de vecino y, por consiguiente, la pertenencia a esta entidad y la capacidad para intervenir en la totalidad de los asuntos de la villa sólo se admite para quienes cumplan determinados requisitos. Los miembros más prominentes de la sociedad local comienzan a acaparar el poder municipal rechazando a todo aquél que no lleve idéntico modo de vida. El establecimiento de estas limitaciones es proporcional al número de competencias cedidas por la autoridad. Cuanto mayores sean éstas y, consiguientemente, las posibilidades de enriquecimiento económico y promoción social, mayores serán las dificultades para acceder a los órganos de gobierno.

¹⁵² Cuenca 30,11 y 31,13; Brihuega 240.

¹⁵³ Cuenca 43,10.

¹⁵⁴ Carcastillo / Medinaceli 5; Belinchón (1171) 37; Uclés (rom.) 109; Cuenca 41,7;...

¹⁵⁵ Salamanca 273.

¹⁵⁶ Venialbó (1126): «Omnis Congregatio Sancti Thome cum abbate nostro Petrus ad vos, Concilio de Venialvo, maiores et minores, manus nostras roboramus».

¹⁵⁷ Toledo (1155): «... facio hanc cartam firmitatis et textum confirmationis toto Concilio de Toletto, tam militibus quam peditibus, sicut in carta avi regis Adefonsi, bonae memoriae, resonat:...»

¹⁵⁸ Ocaña (1251): «E nos concejo de Ocaña grandes y pequeños que somos y que seremos veyendo carta del rey don Ferran plomada del juicio que dio con consejo de su corte con otorgamiento de obispos y de ricos omes del reyno de Castiella e de Leon, entre nuestros procuradores».

¹⁵⁹ Fradejas: «Qui presentes fuerunt: Petrus Johannes confirmat. Petrus Cidez confirmat... Et toto Concilio Sancti Salvatoris confirmat». Pozuelo de Campos: «Qui presentes fuerunt: Martin Petriz de Villa Armenter et Martin Iohannes, Michael Cidez de Cabreros,... et toto concilio de Pozolo de Campos, qui viderunt et audierunt, et cum multis aliis confirmaverunt». Vid. también Molinaseca, Ibrillos, Noceda del Bierzo, Ifanes (1220), San Leonardo. Fuera de las confirmaciones formando parte de los preceptos del cuerpo del texto también aparecen referencias en Madrid (1202) 113, Ucles (rom.) 66.

En un privilegio concedido a los cristianos de Toledo por Alfonso VII en 1137 se establecían limitaciones para el pleno disfrute de las franquezas en él contenidas: «Istos foros quos supra diximus dono et concedo omnibus illis christianis qui in Toletto habuerint casam et hereditatem et mulierem¹⁶⁰». Por tanto, sólo quienes ostentaban la condición de propietarios y tenían familia en la localidad podían considerarse vecinos de pleno derecho. Se excluía por tanto no sólo a los que estén circunstancialmente en el lugar, sino a los menestrales que carecerían de *hereditatem*, también a los aldeanos que no tendrían casa en la ciudad y a los que estén bajo la patria potestad, en tanto que no formen su propia familia y se independicen. El *concilium* se reunía con carácter general todos los domingos tras la celebración de la misa y se celebraba en el mismo porche de la iglesia principal o de la catedral. Determinados domingos revestidos de un especial simbolismo sacro se consideraban inhábiles a estos efectos y la reunión se trasladaba al lunes inmediato¹⁶¹. En cambio, la reunión de la curia municipal se celebraba en la Hispania romana sin fecha fija, una vez alcanzado los asuntos pendientes un volumen determinado los duunviros procedían a su convocatoria.

En aquellas poblaciones de cierto tamaño y que contaban con varias parroquias el sayón pregonaba la llamada: «nos concilium uille Sancti Petri omnes insimul iunti iuxta portam beati Benedicti et uocati sub uoce preconis, prout est usus et consuetudinis¹⁶²». La razón de esta llamada está en que los distintos barrios o colaciones actuaban como unidades independientes y dotadas de su propio *concilium* en el que resolvían asuntos de carácter particular, fundamentalmente económicos y, secundariamente, administrativos. En tanto estas asambleas menores no se disolvieran no podría celebrarse el concilio mayor. Por tanto la llamada se constituye en un toque de atención para que los vecinos se apresuren y concluyan con celeridad. El pregón también implicaba una advertencia, la no asistencia lleva acarreada una multa: «Et qui preconis audierit et ad concilium non quesierit, pariat quinque solidos ad concilium¹⁶³». De forma análoga al concejo las colaciones tienen su propia asamblea, formadas por los vecinos de cada barrio. Se trata de un organismo en todo semejante al *concilium* pero de ámbito y competencias más reducidas. Todo vecino ha de estar asignados a una colación determinada que es aquella donde reside: «Todo vezino de Molina vaya a qual collacion quisiere» —# 6—. Análogamente el aldeano también ha de vincularse a alguna para no quedar indefensos en algunos trámites judiciales: « si

¹⁶⁰ A. GARCÍA GALLO, «Los Fueros de Toledo», AHDE 45 (1975), pp. 468-471.

¹⁶¹ Cuenca 41,8: «Omne donatium, quod concilium dederit, congregatum ad uocem preconis die dominica uel die lune post quolibet pasca, ratum habeatur, si nemo contradixerit. Quia nullum donatium concilii habebit effectum, quod quinque concilii uel deinde contradixerint. Contradiccio paucorum quam quinque in concilio friuola sit, et cassa».

¹⁶² San Pedro de las Dueñas (1191) 8.

¹⁶³ Villavicencio [1091-1136] 35.

mester les fuere de saluar con conombrados, por demanda de fuera de uilla¹⁶⁴».

Dos razones llevan a la creación de estas asambleas: por un lado su participación en los nombramientos de determinados magistrados, juez y alcaldes, y por otro el colapso en que debía encontrarse el *concilium* en las ciudades más extensas. En ciudades importantes como Molina, Uclés, Brihuega, Alcalá de Henares, Cuenca,... la ratificación de determinados negocios jurídicos ante el *concilium* habría llegado a un número tan elevado que las reuniones se prolongarían más allá de lo recomendable antes de que el tedio se apoderara de los presentes y no prestar la atención recomendable perdiendo toda razón de ser como futuros testigos. Ante esta tesitura se hizo recomendable la constitución de asambleas más reducidas, en cada barrio o colación, para que ante ella cada vecino adscrito ratifique la compraventa o pignoración de fincas e inmuebles¹⁶⁵ y la comunidad de bienes entre cónyuges¹⁶⁶.

5.2. Magistraturas

En aldeas y pequeños núcleos de población la asamblea se bastaba en la organización de la sociedad y en la resolución de sus conflictos¹⁶⁷. Esta situación se trastoca en las poblaciones de cierto tamaño, donde se hace precisa la presencia de oficiales y órganos pluripersonales especializados para estas cuestiones. Aún así, el *concilium* siempre retendrá la superior autoridad sobre todos ellos pudiendo en todo caso recabar por vía de urgencia y necesidad las competencias cedidas.

No obstante, con el paso del tiempo la tendencia creciente de asunción de funciones por parte de los oficiales municipales irá despojando al *concilium* de su razón de ser. Una parte de este proceso puede apreciarse en las últimas normas del fuero madrileño donde se ve como el *concilium* pierde su monopolio legislativo que pasa a compartir con los colegios de oficiales

¹⁶⁴ Brihuega 287.

¹⁶⁵ Cuenca 7,12. Vid. también Brihuega 158, Uclés (rom.) 43 y 136, Alcalá de Henares 278, Molina 11.

¹⁶⁶ Cuenca 10,36.

¹⁶⁷ Para el antropólogo Marvin Harris varias son las razones que explican la inexistencia de especialistas jurídicos en los pequeños grupos sociales: «(1) el pequeño tamaño de las sociedades organizadas en bandas y aldeas; (2) la importancia central de los grupos domésticos y el parentesco en su organización social, y (3) la ausencia de desigualdades acusadas en el acceso a la tecnología y los recursos. El tamaño pequeño supone que todos se conocen personalmente; por tanto, los individuos tacaños, agresivos y perturbadores pueden ser identificados por el grupo y sometidos a la presión de la opinión pública. La posición central del grupo doméstico y las relaciones del parentesco significan que la reciprocidad puede ser el principal modo de intercambio y que los intereses colectivos de la unidad doméstica pueden ser reconocidos por todos sus miembros. Finalmente, la igualdad en el acceso a la tecnología y los recursos naturales comportan que unos pocos ricos no puedan acaparar los alimentos y otras formas de riqueza mientras otros padecen escasez y penalidades». (*Introducción a la antropología general*, Madrid, 1999, p. 451.)

municipales. El precepto 111 del fuero, que sería posterior a 1202, reconoce aún su autoridad exclusiva a la hora de establecer normas: «Ad esto se auino el conzeio de Madrid ad honra de nostro senior Regi Allefonso et proueio del conzeio» y en 1218 aún aparece como único detentador de la soberanía popular: «A esto son auenidos *todo* el conzeio de Madrit» (la cursiva es mía) –# 113–. Sin embargo, en un momento posterior, quizás después de las reformas fernandinas de 1222, este organismo queda equiparado a los colegios de magistrados: «Ad esto son abenidos los jurados et los alcaldes et los fiadores, et el conzeio de Madrit» –## 112, 114, 115, 116–.

La concesión del privilegio de autoorganización para las comunidades urbanas no va a suponer la traslación de los oficiales señoriales a un nuevo ámbito, ya que éstos van a mantenerse como representantes y valedores de los intereses no cedidos por el titular del dominio. No obstante, los concejos municipales necesariamente van a fijarse en ellos a la hora de configurar sus propias magistraturas, de ahí que en algunos fueros todavía se siga manteniendo el binomio merino-sayón pero ya en un espacio estrictamente local¹⁶⁸.

Sin embargo, la mayoría de las localidades va a optar por introducir una remodelación de la nomenclatura administrativa y vemos aparecer en los textos nuevas figuras administrativas –fundamentalmente juez y alcaldes– van a desarrollar una completa gama de competencias originarias del ámbito señorial que en algunos municipios se van a incrementar con aquéllas que el propio *concilium* les va a ceder. La asamblea como órgano colectivo, en ocasiones tumultuoso, y de reunión periódica no permanente no puede hacerse cargo con la debida diligencia de las necesidades operativas que plantea una comunidad, particularmente en los grandes concejos que van surgiendo en las extremaduras. Si continúa manteniéndose el sayón reducido a un mero funcionario subalterno que sólo ejerce funciones secundarias, careciendo de toda autonomía¹⁶⁹.

En la nueva estructura administrativa el *iudex* representa la cúspide de la misma. Recupera así la posición preeminente que gozaba en tiempos visigóticos y en los primeros siglos altomedievales. No obstante, los municipios no se han fijado en estos precedentes a la hora de fijar las características del *iudex* municipal. Éste procede de una magistratura contemporánea, los *iudices* o personajes relevantes que como conocedores y custodios de los usos y costumbres locales acompañaban al merino señorial asistiéndole en los juicios¹⁷⁰. Esta participación judicial constituye de hecho el pri-

¹⁶⁸ Es el caso del texto otorgado por Alfonso VII donde confirma a los francos de Toledo sus fueros: «Ut habeatis vestrum proprium merinum et vestrum saionem». –Toledo (1136) 1–.

¹⁶⁹ Belinchón (1171) 25: «Et uos ipsos homines de Bellinchon ponatis uestro iudice et uestro saione per foro et uestros alcaldes...». Vid. también Haro (1187), Cuenca 16,53.

¹⁷⁰ Castillo de Peones 5: «Et ipsi iudices qui iudicauerint sint de uestro conzeio, et ut iudices ad forum de illis terris». Paredes de Nava (1134) 2: «El merino tenga sus juicios ante los jueces y ellos dispongan del fiador, y sobre el juicio que iuzgaren cual deba ser,

mer eslabón de participación ciudadana en la toma de decisiones de cualquier tipo dentro de la esfera pública. Cuando posteriormente en aquellas localidades privilegiadas con una autonomía más amplia se cuenta con una autoridad unipersonal que represente al concejo, ésta tomará el nombre de *juez*, lo que niega de inmediato esta denominación a sus compañeros que continúan ejerciendo las funciones jurisdiccionales y pasarán a denominarse *alcaldes*¹⁷¹. Cuestión ésta de la terminología que ya había sido captada rápidamente por el pueblo como nos indica el fuero de Balbás (1135): «*Judices etiam habeatis quatuor, qui vulgo alcaldes vocantur, et illi nullam faciant facenderam et nullam dent infurcionem*¹⁷²» —# 3—. En el fuero de Villadiego, se hace uso indistinto de ambos términos en preceptos consecutivos cuando regula la toma de prendas para peones y villanos¹⁷³.

En un primer momento todos los vecinos podían optar a estas magistraturas, los requisitos para acceder a los «portiellos» son los mismos que para obtener la vecindad: casa poblada y familia establecida en la localidad¹⁷⁴. A lo largo del siglo XIII en las villas fronterizas las limitaciones al acceso a los oficios municipales se incrementan. Ahora se asiste a un proceso continuo de control de los oficios municipales por parte de los elementos más belicosos de las ciudades, una clase militar enriquecida con el botín sustraído a los musulmanes. Se hace indispensable la tenencia de caballo de valor muy elevado que indica que nos encontramos ante un caballo de batalla y no un vulgar rocín¹⁷⁵. El control de los oficios municipales por parte de esta oligarquía militar se hace general a comienzos del reinado de Fernando

y este valga y no otro, y aquellos jueces den su testimonio».

¹⁷¹ Belorado (1116) 19: «*Et vos francos mittatis iudice franco, atque tollite ad vestrum talentum; et castellanos similiter tollite, et mittite vestro iudice a vestro talento de mea gente; et omnes in unum mittatis alcaldes ad discurrendum iudicium*». Escalona (1130) 1: «*In primis, ut eligatis ex nobilissimis et sapientissimis vestris quator, qui semper sint una cum iudice ad examinandum iudicia populorum*». Covarrubias (1148) 13: «*Et isti populatores ponant iudicem et III^{or} alcaldes et suum saionem et duos apreciadores, et omnes isti intrent in illo servicio per manum de illos populatores; et illi qui in isto servicio fuerint, non dent enfurcionem*».

¹⁷² Cincuenta años después, en 1187, el fuero de Belbimbre continúa expresándose de la misma manera: «*Addo etiam uobis quod iudices qui vulgo alcaldes uocantur nullam faciant facenderam, et excusatio ista et absolutio eis in premium laboris sui sufficiat*». Más tarde aún, en 1225, el fuero de Párrega hace uso indiferenciado de ambos términos: «*Qui alcaldes uel iudices denostauerit uel amenacauerit dismenierit in iudicio uel in aliquo profecto de villa pectet illi D solidos, si probare illi non potuerit quod non dicebat uel non iudicabat uerum*».

¹⁷³ [20]: «*Et in casa de pedone non pignoret nullus homo nisi suo iudice, et si ante pararet pinnos ad suo iudice sine directo pariat ad concilio quinque solidos et un carnero ad illo iudice*». [21]: «*Et in casa de cauallero nullus accipiat pinnos nisi suos alcaldes*».

¹⁷⁴ Molina 12: «*Non sea alcalde si non fuere vezino postero et que aya muger*». Brihuega 314: «*Tod omme de Briuega que touiere casa poblada en Briuega con mugier et con fijos ese tenga portiello, en Briuega, et otro no sea aportellado*».

¹⁷⁵ Cuenca 16,3: «*Quia quicumque casam in ciuitate populatam non tenuerit, et equum per annum precedentem non sit iudex... Similiter quelibet collatio supradicta die det suum alcaidem talem qualem iudicem assignauimus, habentem equum, et in uilla domum populatam habentem ab anno precedentem*». Vid. también Molina 12 y Uclés (rom.) 192.

III. Del año 1222 se conservan cuatro diplomas idénticos, que debieron ser mucho más, por los que estos cargos se reservan a los poseedores de casa poblada, caballo y armas¹⁷⁶. El período 1256-1262 trajo consigo la definitiva ratificación de la situación preeminente de la oligarquía militar que se avino en contraprestación a recibir la legislación alfonsina representada por el *Fuero Real*. Una serie de diplomas concedidos entre otras muchas ciudades a Soria, Ávila, Segovia, Cuenca, etc. garantiza una serie de privilegios fundamentalmente económicos a «los cavalleros que tovieren las mayores casas pobladas en la villa con mugieres e con fijos, e los que non ovieren mugieres con la compañía que ovieren,... et el cavallo de treynta maravedís arriba, e escudo e lança e loriga e brofaneras e perpunt e capiello de fierro e espada, que non pechen:...».

La *Crónica de la población de Ávila*, texto redactado entre 1255-1256¹⁷⁷, quiere sancionar esta eliminación de la administración local de los elementos no violentos de la sociedad abulense trasladando hasta los entornos del año 1100 este privilegio exclusivista. El texto establece en primer lugar la separación de la sociedad entre dos grupos bien definidos, uno dedicado a actividades materiales mientras que el otro asumía la defensa de la localidad: «E la mucha gente que nombramos, después metiéronse a comprar e a vender e a fazer otras baratas, e ganaron grandes algos; e todos los que fueron llamados serranos trabajáronse en pleyto de armas e en defender a todos los otros». La cobardía demostrada por los menestrales ante una incursión musulmana tuvo que ser solventada por los serranos. El reparto del botón obtenido por estos últimos acarreó duras discrepancias. Sabedor el conde Raimundo de Borgoña del problema se trasladó desde Segovia y falló a favor de los serranos: «e mandó que les non diessen nada de quanto ganaron a los que se tornaron, e sacolos fuera de la villa al arraval, e apoderolos en la villa aquellos que llamavan serranos que fueron adelante, e ordenólo ansí que alcaldes e todos los otros portillos que los oviessen estos, e non otros ningunos». Privilegio que años más tarde su hijo Alfonso VII mantuvo en vigor: «E confirmó la ordenación que el conde don Remondo fizo en razón de las alcaldias e de los otros officios».

Las magistraturas son cubiertas mediante elecciones llevadas a cabo en el *concilium*: «neque saione non habeatis nisi quaecumque uos quesieritis quae in concilio uestro ponatis aut extrahatis,...¹⁷⁸» El derecho a voto correspondía en un principio a todos los vecinos, pero, al igual que ocurrió con el sufragio pasivo, con el tiempo fue reduciéndose quedando excluidos los forasteros, los dependientes y los menores de edad o mayores no emancipados. Pero no es el único sistema. En los grandes concejos extremaduransos se comprueba la existencia de distritos electorales –colaciones, parroquias,

¹⁷⁶ Ávila (1222): «Qui uero non tenerit domum populatam in vila et non habuerit equum et arma non habeat portellum. Et omnes aportellati unoquoque anno mutentur donec sint omnes positi qui ad hoc fuerint conuenientes». Vid. también Uceda, Peñafiel, Madrid.

¹⁷⁷ A. HERNÁNDEZ, *Crónica de la población de Ávila*, Valencia, 1966.

¹⁷⁸ Oca. Villabaruz de Rióseco 15, Haro (1187), Guipuzcoa 1200.

barrios,...– El juez, como máxima autoridad del concejo, era un cargo que se ejercía de forma sucesiva por cada colación. Dentro de ésta los vecinos elegían libremente quien de entre ellos asumiría la magistratura¹⁷⁹, siendo posteriormente ratificado ante el *concilium*. Además cada uno de estos distritos elegía su propio alcalde¹⁸⁰ que se asociaba con sus homólogos para ejercer sus funciones de forma colegiada. En otras ciudades asistimos a un sistema diferente, serán los cargos salientes quienes se encargan de nombrar a sus sucesores¹⁸¹. En unos u otros casos parece que la tendencia al fraude debía ser habitual lo que obliga a establecer duros castigos para quien participara en la compra de oficios públicos¹⁸².

Por el contrario, en el *municipium* romano se seguía un principio totalmente diferente. No regía el principio un hombre, un voto introduciéndose una entidad intermedia, denominada *curia* en Irni y *tribu* en Urso. Estos distritos electorales se formaban al poco de recibir la *lex datae*, noventa días es el plazo que se da Irni para constituir las doce curias –L. Irn. 50–. Ganaba las elecciones el candidato que obtuviera la mayoría en más curias, en caso de empate se acudía a sus circunstancias personales –L. Irn. 56 y 57–. El sufragio activo correspondía a todos los residentes que tuvieran la ciudadanía romana o latina, los forasteros o *incolae* podían participar en las elecciones y a tal fin se les incluía a todos ellos en una de las curias –L. Irn. 53–. Pero existía una discriminación básica, entre *cives* e *incolae*, de modo que sólo los primeros, en cuanto pertenecientes a familias establecidas en la localidad, tenían el derecho pasivo de sufragio. En la Edad Media no se exige el arraigo del linaje en la villa, sino únicamente el personal. La diferenciación social existente, en este caso entre vecinos y no vecinos, es fácilmente soslayable con el cumplimiento de los requisitos señalados: casa, familia y equipo militar.

Los oficiales que se van a comentar a continuación guardan poca relación con los magistrados romanos. Ni por su número, ni por su naturaleza intrínseca, ni por sus funciones puede establecerse una relación directa entre unos y otros. El hecho de que en ocasiones los fueros medievales nos muestren un órgano pluripersonal de cuatro *iudices* o alcaldes como cabeza de la administración local no es razón suficiente para su inmediata asimila-

¹⁷⁹ Cuenca 16,2: «Eadem similiter die dominica collatio illa, unde iudicatus illius anni fuerit, det iudicem prudentem, circumspectum, scientem discernere inter uerum et falsum inter iustum et iniustum, et habeat domum in ciuitate et equum».

¹⁸⁰ Ocaña (1210): «Et comendator qui ibi fuerit habet miteri unoquoque anno iudicem et alcaldes ad vices collationum, videlicet mittendo in uno anno iudicem de una collatione et alcaldes de alia;...». Cuenca 16,3: «Similiter quelibet collatio supradicta die det suum alcaldem talem qualem iudicem assignauimus, habentem equum, et in uilla domum populatam habentem ab anno precedenti». Vid. también Sepúlveda (1076) 24 y Escalona (1130) 37.

¹⁸¹ Madrid (1202) 111: «Ad esto se auino el conzeio de Madrid ad honra de nostro senior Regi Allefonso et proueoio del conzeio: que los fiadores que fueren eso cognominen los otros;...» Yepes (1223) 3: «Conciliun de Alcaldibus ponat iudicem et alcaldes, et nemo habeat Alcaldiam nisi per unum annum, et isti sint de vicinis».

¹⁸² Cuenca 16,6; Brihuega 104; Alcalá de Henares 183, Molina 12.

ción a los *quatorviros* romanos. Son más las ocasiones en las que aparece un número distinto, variable en cada población, en función del número de parroquias que constituyan la misma.

La estructura hispanorromana del *cursus honorum*, no tiene cabida en estos momentos y los cargos que la constituían duunviros, ediles y cuestores, no pueden asimilarse al juez, alcaldes y sayón. Para empezar, el juez, va a acaparar en buena medida todas las competencias de los antiguos magistrados que además se ven incrementadas con otras varias en el campo judicial tanto actuando de forma individual, sólo en determinados municipios, como integrado en el cabildo de alcaldes.

La administración de justicia en Hispania quedaba adscrita a particulares nombrados por los duunviros. Para cada caso el juez hispanorromano era elegido por las partes dentro de este colectivo. En los asuntos importantes se hacía preciso el nombramiento de un tribunal colegiado por las autoridades que también tenía el mismo origen. En la Edad Media, el sistema es totalmente diferente. En los primeros siglos la justicia es ejercida por el oficial real que se hace acompañar de unos *iudices* elegidos de entre la totalidad de los habitantes del distrito o de la ciudad, sin que hayan sido previamente encuadrados en ningún grupo intermedio o decuria. En momentos posteriores, cuando el autogobierno municipal ya está plenamente establecido se ve actuar colegiadamente a todos los alcaldes en la resolución de los pleitos. También se permite a las partes la elección de juez o jueces por mutuo acuerdo. Son los jueces avenidores o jueces árbitros, particulares elegidos para el caso en cuestión y cuyas decisiones firmes están fuera del orden judicial.

El sayón, por su parte, es un cargo que en muy pocos casos parece derivar de un proceso electoral, estando ligada su presencia en la vida administrativa a la decisión del juez o de los alcaldes.

5.2.1. Juez

El juez es la figura principal de la administración local y por ello custodia los principales símbolos de la ciudad tanto en los períodos de guerra como en el desarrollo de la vida cotidiana: «y para sus apellidos, y para sus ayuntamientos y para sus cabalgadas adopten la bandera que quisieren, y pónganla en mano del Juez: ... y el sello de la ciudad y las llaves téngalas siempre el Juez¹⁸³». Se define por tres particularidades, de las cuales sólo la última venía a coincidir con las atribuidas a los magistrados romanos; en tanto que la segunda es notoriamente diferente entre ellos.

1.- Cargo a tiempo completo. El juez está dedicado de lleno a la defensa de los intereses del concejo por ello se le prohíbe que actúe en negocios privados, salvo los estrictamente propios, que le distraigan de su labor. No

¹⁸³ Córdoba (1241). Vid. también Alcalá de Henares 36, Alcaraz (1245), Sepúlveda 77, Salamanca 353.

puede por ello asumir la representación de ninguna persona salvo la de su propia familia y dependientes¹⁸⁴. Todas las mañanas entre las nueve y el mediodía, y previa llamada efectuada por el pregonero en las dos plazas de Cuenca, el juez llevaba a cabo su labor individual¹⁸⁵ y por las tardes formaba parte del cabildo de alcaldes. Para la adecuada realización se le asigna uno de los andadores del concejo para que le acompañe en todo momento¹⁸⁶.

2.- Remunerado. Consecuentemente con lo anterior, el juez al dejar de lado sus propias actividades ha de ser compensado económicamente¹⁸⁷.

3.- Permanente, por sí mismo o por medio de un sustituto, cuando el titular se encuentre fuera de la localidad, la magistratura ha de ser ejercida en todo momento¹⁸⁸.

Sólo una norma conquense ofrece una somera relación de las funciones realizadas por el juez que abarcan tanto el campo judicial como ejecutivo¹⁸⁹. Aparte el juez desarrolla otras muchas en el plano civil. La relación extensa de las mismas sólo puede conocerse a través del estudio de un número muy elevado de preceptos contenidos en los distintos fueros donde se tratan cuestiones muy diversas y donde vemos aparecer esta magistratura interviniendo en las mismas. Según los fueros y según las épocas se puede ver al juez municipal asumiendo la defensa de los débiles y de los hombres del rey¹⁹⁰ —incluyendo en éstos no sólo a los funcionarios, sino también a moros y judíos—, suscribiendo testamentos¹⁹¹, gestionando las prestaciones personales de los vecinos, tanto las debidas al rey¹⁹² como al concejo¹⁹³, pre-

¹⁸⁴ Madrid (1202) 96: «El iudize non tradat uocem nisi per homines de sua casa aut de homines de palazio, uel de moros uel de iudeos qui pertinent ad regem aut uocem de conzeio maior; sed sedeat in otero, et tradant los bozeros illas uoces, et iudicent los alcaldes; et de quo habuerit calumpniam apprehendere, prendat».

¹⁸⁵ Cuenca 16,16: «Hora preconandi, siue includendi placita sit a tercia usque ad sextam. Principium placitorum preconetur in ambabus plateis. Iudex iudicet ad suam portam cum alcaldes adiurato, et cum alio non».

¹⁸⁶ Cuenca 16,38: «Apparitores debent ire in mensagijs concilij, et in nuncijs ad que iudex et alcaldes ire preceperint eos, quia ipsi in omnibus et per omnia iudici et alcaldibus optemperare tenentur. Et etiam per forum a mane usque ad noctem stet ante iudicem unus apparitorum».

¹⁸⁷ Sepúlveda (1076) 24, Guadalajara (1133) 26, Molina 23, Medinaceli, Uclés (romance) 124, Cuenca 1,21 y 16,12, etc.

¹⁸⁸ Cuenca 16,17: «Si iudex pro aliqua necessitate extra ciuitatem perrexerit loco suo relinquat quemdam alcaldum adiuratorum, qui loco suo iudicet, et suppleat eius uices habundanter». Cuenca 30,1: «Et etiam remaneat duo alcaldes adiurati cum iudice facticio, quem iudex annalis uice sua reliquerit».

¹⁸⁹ Cuenca 16,15: «Iudex habet accipere fideiussos de saluo pro calumpnijs concilij. Debet colligere quintas et calumpnias, et ea que concilium pro seruicio regi siue alij dederit. Debet recipere superleuatores pro calumpnijs et querimonijs que uenerint ad eum. Debet recipere superleuatores deambulatorum, et domos cum pignoribus, per quas concilium habeat directa sua. Debet sare directum omnibus sibi conquerentibus. Debet pignorar eum qui pignora defenderit, uel abstulerit. Debet ad suam portam iudicare eos qui ad placitum uenerint».

¹⁹⁰ Madrid (1202) 96, Alcalá de Henares 123.

¹⁹¹ Cuenca 10,10.

¹⁹² Palenzuela 22, Atapuerca 2, Covarrubias (1148) 14, Brihuega 197, Alcalá de Henares 122.

¹⁹³ Castil de Peones 4, Villalonso 8.

sidiendo el *concilium*¹⁹⁴ y ejerciendo funciones policiales en aras de garantizar el orden público¹⁹⁵.

El juez se constituye así en el primer oficial del municipio acaparando el control de la administración de la villa y además interviniendo en el ejercicio de la justicia, generalmente como componente del cabildo de alcaldes, pero también como órgano unipersonal en Cuenca y villas afines. La mayoría de estas competencias tienen un origen señorial y proceden del merino y sólo en menor medida tienen proceden del ámbito local resultado de la cesión del *concilium*. Desde el momento en que una villa ha obtenido de su señor un determinado grado de autonomía, ésta se va a traducir en el empujamiento del oficial señorial, el merino, que quedará en mayor o menor medida postergado a favor de la nueva figura representada por el juez.

Pero esta posición preeminente del juez en la estructura municipal comienza a dar signos de agotamiento a comienzos del siglo XIII y en algunas ciudades pierde peso a favor de órganos colegiados, en lo que podría verse como un preludeo del sistema de regidores del siglo XIV. ¿Qué razones llevan a esta novedad? Por un lado habría que subrayar el lazo especial que une al juez con el señor de la villa, ya que aún tratándose de una autoridad municipal tiene unas obligaciones muy precisas con el señor al encargarse de la toma directa de sus derechos. El concejo desearía así que un grupo de vecinos supervisara su labor, cuando no que le sustituyera totalmente. Por otro lado estaría el deseo de las oligarquías locales de que ninguno de sus miembros destacara en demasía y se constituyera en una amenaza para el grupo en virtud de sus estrechos contactos con las autoridades reales.

En Alcalá de Henares la figura del juez comienza a diluirse a medida que los fiadores empiezan a arrebatarse competencias y su presencia se hace continua en los preceptos actuando conjunta e, incluso, alternativamente con él¹⁹⁶. En otras villas la tendencia se ha acentuado y el juez es simplemente un cargo honorífico cuyas competencias se limitan a la representación del concejo. Es su cabeza visible pero carece de poder efectivo. Es el caso de Salamanca donde la presencia continua a lo largo de su fuero de los alcaldes ejerciendo amplias y variadas competencias contrasta con la nula aportación que hace el juez a la vida municipal que ha quedado reducido a un mero alférez, custodio y portador de la seña del concejo. Parecida situación es la del concejo madrileño, el juez aparece ejerciendo sus funciones en tan sólo cuatro preceptos —## 57, 77, 96, 97—, mientras que contamos con abundantes menciones de otros funcionarios municipales y reales: alcaldes, fiadores y jurados que se ocupan de buena parte de las funciones que en otras villas corresponden al juez. Éste ya no aparece siquiera participando

¹⁹⁴ Cuenca 16,53.

¹⁹⁵ Lara (1135), Yanguas 25, Covarrubias (1148) 20, Sepúlveda 243.

¹⁹⁶ Alcalá de Henares 5, 15, 19, 91, 92, 100, 115, 130, 132, ...

en la elaboración de los preceptos que cierran el fuero madrileño —## 114-117— siendo suplantado por los citados oficiales.

5.2.2. Alcaldes

El nombre técnico de estos funcionarios se toma de la España musulmana o más bien de la España mozárabe, donde el *qadi* es el encargado de dictar justicia. Esta similitud competencial es su único elemento común, divergiendo en el resto de rasgos que conforman su naturaleza. El más importante radica en que el funcionario musulmán depende de una autoridad central, el *cadí* de Córdoba en el caso del califato o el de la capital de la taifa correspondiente; el alcalde castellano es una autoridad autónoma, no sometida a nadie, y elegida por sus convecinos. El *cadí* juzga solo, aconsejado en su caso por los *ulemas*; la actuación de los alcaldes es en muchas ocasiones colegiada y no cuentan con asesores. El *cadí* actúa tanto en el campo civil como religioso; en la España cristiana los conflictos religiosos tienen su propia jurisdicción. Por otro lado, el *cadí* puede ejercer una multiplicidad de funciones y así se le puede ver gobernando una ciudad, pronunciando discursos en los funerales de las personas relevantes, dirigiendo la oración principal de los viernes, fijando el comienzo y el fin del Ramadán o administrando el tesoro de los creyentes, entre otras varias funciones. En la España, los alcaldes se centran fundamentalmente en cuestiones judiciales y sólo en los grandes concejos extremaduranos es frecuente verlos actuar en otro ámbito, casi siempre de forma conjunta, integrando un colectivo en el que también es habitual encontrar al juez.

Los alcaldes en las villas castellano-leonesas prácticamente no tienen personalidad propia y definida de modo que casi siempre los encontramos actuando como un organismo colegiado. Las citas que se hacen de esta magistratura son casi siempre en plural y el sentido de la frase también se entiende de este modo, como institución pluripersonal. Esta institución recibe diversos nombres: en Uclés y Alcalá de Henares «corral de alcaldes», en Medinaceli «capillo», en Sepúlveda «cabildo», en Molina y Brihuega «cámara» y en Cuenca se refieren al mismo como «curiam alcaldum».

El juez forma parte de este cabildo: «*Iudex et omnes alcaldes conueniant ad curiam in die ueneris ad iudiciandum ea que dicta sunt*¹⁹⁷». El origen común de ambas magistraturas se ha tratado anteriormente y se ha visto como existen órganos colegiados cuyos integrantes aparecen denominados textualmente como jueces, y a los que la gente de la calle también llama alcaldes. La omisión del juez en muchos preceptos no implica en absoluto su ausencia del órgano, sino la falta de profesionalidad del copista.

En el fuero conquense al regularse al duelo judicial se comprueba como no existe ninguna regla fija a la hora de referirse a los integrantes del cabildo, ora como juez y alcaldes, ora como alcaldes únicamente. Incluso, cuando se trata el amojonamiento del campo donde se va a combatir, una

¹⁹⁷ Cuenca 24,9.

norma menciona al juez junto a los alcaldes: «Cum fueri[n]t in campo, iudex et alcaldes hostendant eis metas campi; deinde diuidant eis solem.¹⁹⁸» y otra le omite: «Ille mete quas alcaldes tammilitibus, quam peditibus in prima die posuerint¹⁹⁹». Esta alternancia aparece nuevamente cuando se detalla el nombramiento del corredor, en una ocasión se dice que es nombrado por el juez y los alcaldes: «Iudex et alcaldes statuunt uenditorem publicum mercium uenaliū, quem uulgo uocat corredorem²⁰⁰» y en la otra por los últimos únicamente: «Venditor, quem alcaldes instituerint, primo iuret fidelitatem in curia alcaldum²⁰¹».

Alguna localidad como es Alcalá de Henares separa un tanto ambas magistraturas de modo que los alcaldes pueden acordar cuestiones sin la presencia del juez o de cualquier otra figura, como los fiadores. Llegado el caso todos ellos son «invitados» a abandonar la sala: «Quando los alcaldes dixieren al iudez delexanos que fablar nos queremos e si non quisiere exir pendrenle los fiadores e peche I mencial a los alcaldes e prendan dend los fiadores el quarto²⁰²».

Por último, algunas villas permiten la asistencia de oficiales señoriales, los jurados, en el cabildo. En Brihuega esta presencia pasa a tener un carácter habitual: «Jvez, o alcaldes o iurados, que desmintiere uno a otro seyendo en camara iudgando²⁰³». En Madrid sólo se permite en casos excepcionales la entrada de los jurados cuando la falta de acuerdo entre los alcaldes impide resolver un litigio: «Et si los alcades per alguno iudicio non se habinieren, o los mais se otorgaren eso pase; et si los medios se otorgaren alo uno et los otros a lo al, pora dereio mays escoiere metan los quatro iurados del rei cum illos, et o los mays se otorgaren, per ipso pase²⁰⁴».

Para las cuestiones judiciales estos magistrados se reunían el viernes: «In die ueneris in curia alcaldum nichil aliud agatur nisi dare iudicia, recipere firmas, placita dare eis qui firmas recipere debuerint in sequentem diem ueneris, adque iuratores²⁰⁵». Análogamente otros varios fueros extremaduranos se decantan también por el viernes como día judicial por excelencia²⁰⁶. Sin embargo, esta reunión pronto debió de hacerse insuficiente para resolver todos los asuntos presentados de modo que se trasladaron a una segunda sesión, que se celebraba los sábados²⁰⁷, algunos trámites se-

¹⁹⁸ Cuenca 22,6.

¹⁹⁹ Cuenca 22,17.

²⁰⁰ Cuenca 16,25.

²⁰¹ Cuenca 16,47.

²⁰² Brihuega 134. Vid. también Brihuega 139.

²⁰³ Brihuega 139.

²⁰⁴ Madrid (1202) 37.

²⁰⁵ Cuenca 24,6.

²⁰⁶ Guadalajara (1219), Brihuega 222, Molina 20, Salamanca 133, Sepúlveda (rom.) 31, 32, 45, 46, 51, 78,...

²⁰⁷ Cuenca 22,1: «Quicumque pugnare debuerit, parificentur in die sabbati, et non in die ueneris, sicut superius dictum est». Cuenca 24,8: «Propter hoc mandamus, quod equationes pugilum seu pugnatorum fiant in die sabbati, et non in die ueneris».

cundarios como el emparejamiento de los participantes en un duelo judicial. En Alcalá de Henares la distribución temporal de las actuaciones de los alcaldes se fundamentan en la categoría de las personas implicadas. Así si el viernes el cabildo de alcaldes resuelve los asuntos en los que estén implicados otros magistrados locales como el juez municipal o los fiadores reales, el sábado se dedica a las cuestiones presentadas por el común²⁰⁸.

Como consecuencia de la necesidad de tramitar cuestiones posteriores derivadas de su actuación durante los días anteriores nos hallamos con la celebración de reuniones diarias. Si el derecho a demandar prescribe a los nueve días desde que se produjo la conducta punible²⁰⁹ parece claro que el cabildo ha de estar disponible en todo momento. Igualmente ocurre con las juras de los fiadores que han de renovarse en el mismo plazo²¹⁰; la reclamación de prendas al juez²¹¹... Análogamente ocurre con la presentación de par en el duelo judicial se abre un plazo de nueve días que se podrá prorrogar por otras dos novenas, hasta dar con el candidato correcto²¹²; y con los plazos para el pago de las caloñas que han de abonarse por terceras partes cada nueve días y en distintos bienes: ropa, ganado y oro, respectivamente²¹³.

Su actividad también se extiende fuera de la villa. Los conflictos por términos discutidos entre las aldeas requirieron de la presencia física de juez y alcaldes para el examen de los mojones²¹⁴. Del mismo modo, las tasaciones de heredades hacen precisa un desplazamiento a las mismas a fin de constatar sus características: localización, calidad, extensión, etc.²¹⁵ En los supuestos de homicidio algunos fueros mencionan la obligación de realizar una investigación previa a la aceptación del desafío para constatar la oportunidad de la denuncia, etc.²¹⁶

¿Cómo compaginar la realización de todos estos cometidos que pueden darse cualquier día de la semana y en todo lugar? Los alcaldes deberían de distribuirse se alguna manera para compaginar todas estas funciones en caso de coincidencia. En este sentido podríamos hablar de la existencia de

²⁰⁸ Alcalá de Henares 130: «Los alcaldes tengan el corral el biernes al iudez e a los fiadores e el sabbato al poblo».

²⁰⁹ Cuenca 2,19: «Si uero uineam plantauerit, aut domum hedificauerit, uel aliud opus istis consimile fecerit, si postea pro radice conuictus fuerit, dimittat eam cum calu[m]pnia predicta. Set tamen postquam dominus calumpniam colligat, redimat opus estimatione duorum alcaldum, uel uicinorum; vel si laborator maluerit, faciat ei querelosus tantum ac tale opus, et in consimili loco».

²¹⁰ Cuenca 19,17.

²¹¹ Cuenca 20,15.

²¹² Cuenca 16,5 y 6.

²¹³ Cuenca 14,41.

²¹⁴ Cuenca 2,30: «Si concilia aldearum super terminos litigauerint, iudex uel alcaldes uadant ad uidendos terminos utriusque, et desternent eos secundum metas iam positas».

²¹⁵ Cuenca 2,21: «Siquis hereditatem quam exegerit timore eundi ad regem, uel timore reptationis hereditatem minoris precij fecerit quam uiginti menkales; aprecentur eam alcaldes, si fuerit in urbe».

²¹⁶ Cuenca 14,2; Alcalá de Henares 5; Molina 24; Uclés 65.

comisiones o subcabildos compuestos de dos alcaldes o de un alcalde y el juez que acá y allá van salpicando los fueros. Un único testimonio nos indica que será el azar quien distribuirá la actuación de unos y otros: «E de los quatro alcaldes, echen sortes quales duos sean en la pesquisa con los iurados²¹⁷».

Sólo en ocasiones pueden actuar solos y más parece por cuestiones de urgente necesidad que han de abordarse con presteza o como testigos. Muy raramente se constata esta actuación en solitario. Se le encuentra inspeccionando molinos²¹⁸, separando a los participantes en altercados²¹⁹, o tomando prendas junto con el vecino que le ha requerido²²⁰ o acompañándole cuando quiere interponer un pleito en otra villa²²¹.

Las labores puramente administrativas tampoco le son desconocidas a los alcaldes y se les puede localizar a lo largo del fuero conquense en las más variadas situaciones: asumiendo funciones de policía²²², interviniendo en la defensa de los más desprotegidos²²³, recibiendo las quejas sobre el mal estado de los inmuebles²²⁴, nombrando los oficiales menores del concejo²²⁵, etc. La razón de esta intromisión en ámbitos de actuación propios del juez viene dado por la presencia de este último en el literal de la mayoría de estas normas. La expresione «iudex et alcaldes» indica como el primero está habilitando a los segundos en la prestación de estos servicios a la comunidad. Los alcaldes como tales sólo parecen tener competencias administrativas en aquellos lugares donde la figura del juez aparece minusvalorada²²⁶ o directamente no existe en el organigrama municipal²²⁷.

En último lugar hay que mencionar brevemente la exhaustiva regulación que hace el título 30 del fuero de Cuenca de las actividades militares de la mesnada concejil y donde viene recogido el mando compartido de la misma: «Dominus ciuitatis cum iudice et alcaldibus regat exercitum»²²⁸.

5.2.3. Fiadores

Los fueros de Madrid y Alcalá de Henares citan con mucha frecuencia un tipo particular de oficiales, los fiadores. Este cargo representaba una

²¹⁷ Alcalá de Henares 5.

²¹⁸ Sepúlveda (rom.) 98.

²¹⁹ Sepúlveda (rom.) 243.

²²⁰ Cuenca 24,16.

²²¹ Medinaceli.

²²² Cuenca 14,46. Brihuega 59.

²²³ Cuenca 10,38; 10,39; Escalona (1130) 28; Santa María de Cortes (1182) 32, Molina 11.

²²⁴ Cuenca 6,9.

²²⁵ Cuenca 16,4; 16,5; 16,7; 16,25 y 16,47.

²²⁶ Alcalá de Henares 68, 207. Sepúlveda 99. Salamanca 41, 275, 277, 358, 360, 363. 366.

²²⁷ Párrega.

²²⁸ Cuenca 30,9. Vid. otros aspectos de la administración de la hueste en ## 30,9; 30,11; 30,12; 30,18.

obligación que pesaba sobre los vecinos y cuyo desempeño era irrenunciable so pena de fuertes penas económicas: «et si algunos destes que estos cognominaren non quisiere ibi seder, cada dia pecte X morabetinos»²²⁹. Su nombre deriva de su función principal ya que se encargan de «afianzar» esto es garantizar el cobro de las caloñas de ahí que a lo largo de ambos textos en la mayoría de las ocasiones aparezcan como encargados de su recepción: «et cumplant el iudicio los fiadores, et aiudent illos el conzeio...»²³⁰

Secundariamente se les ve prestando otros servicios a la comunidad de carácter ejecutivo, en todos los cuales subyace el ejercicio de la coacción como herramienta fundamental en sus actuaciones. En este sentido reciben la presentación de la causas²³¹, citan a los acusados²³² y ejercen cuantas medidas sean necesarias para asegurar esas caloñas: tomando prendas y custodiándolas²³³, obligando a los desafiados a presentar fiadores particulares²³⁴ y privando de libertad al contumaz²³⁵. También se le puede ver en uso de estas facultades coercitivas actuando de policía municipal en los delitos más importantes²³⁶, registrando a las personas sospechosas de portar armas prohibidas²³⁷, custodiando la puerta del tribunal de alcaldes²³⁸. Son también los encargados de aplicar directamente la pena capital²³⁹. Los fiadores no ejercen en ningún caso funciones judiciales ordinarias y su presencia en el cabildo de alcaldes está taxativamente prohibida en la villa alcalaína: «Los fiadores non sean con los alcaldes in lur corral ni mayordomo de fiadores que baraiare la uoz de los fiadores...» —# 130—. Si parece en cambio que pudieran actuar como árbitros en las disputas vecinales de carácter económico que se iniciaran ante ellos²⁴⁰.

6. - Oficiales reales

6.1. «Senior», «Dominus ville»

La estructura administrativa que el rey despliega en el ámbito local se configura en tres escalones situados jerárquicamente: «Nullus senior qui

²²⁹ Madrid (1202) 111.

²³⁰ Madrid (1202) 14. Vid. también Madrid (1202) 1, 4, 5, 6, 7, 9,... y Alcalá de Henares 1, 5, 6, 8, 9, 15.

²³¹ Madrid (1202) 11; Alcalá de Henares 132, 150 y 186.

²³² Alcalá de Henares 131.

²³³ Madrid (1202) 23, 24, 39; Alcalá de Henares 59, 90, 92,...

²³⁴ Madrid (1202) 34, Alcalá de Henares 118.

²³⁵ Madrid (1202) 114.

²³⁶ Alcalá de Henares 15, 194.

²³⁷ Madrid (1202) 109.

²³⁸ Madrid (1202) 53, Alcalá de Henares 134.

²³⁹ Alcalá de Henares 100.

²⁴⁰ Alcalá de Henares 129: «De todas las rencuras que a fiadores metieren de las que rancharen prendan los fiadores el quarto e el rencuroso prenda lo al e palacio non prenda den nada e todos los cotos de los fiadores sean e el iudez non aia hy nada si ellos non fizieren abenencia e enlos cotos del iudez non aian hy los fiadores nada».

sub potestate rregi ipssa villa mandauerit non faciat eis virtum nec forca, neque suo merino nec ssuo saione non accipiat ab eis ullam rrem sine uoluntate eorum²⁴¹». En el más elevado está el «senior» o «dominus ville», como representante cuando no traslación de la propia persona del titular de la localidad. Por ello cuando se le menciona en los textos no suele aparece como ejecutor directo de las competencias cedidas por el monarca sino como detentador de los derechos regios inherentes a la titularidad de la villa, como es el caso de las contribuciones económicas²⁴². En cambio, sí aparece disponiendo de los hombres de la villa para que efectúen los servicios establecidos en el fuero: «Si ille dominus qui mandauerit Palenciolam Comitibus uoluerit enuiare in mandaderia militem aut pedonem de Palenciola²⁴³». Entre estas prestaciones personales la más importante era la asistencia a las campañas militares cuya dirección le corresponde. En la medida en que las competencias ejecutivas recaigan en las autoridades locales el sistema se simplifica quedándonos únicamente el «senior» y el merino, es el caso de Cuenca.

En cambio en el ámbito nobiliario y eclesiástico los señoríos se estructuran en dos escalones, cuando no en uno solo si el municipio ha obtenido el privilegio de «sayonía» como se ve en la cita del final del párrafo. La razón de ellos es puramente cuantitativa, el número muy superior de localidades de realengo hace que el rey delegue la autoridad de varias de sus ciudades en una persona de su confianza, el «dominus ville» quien a su vez dejará en cada una de ellas a su subalterno, el merino, quien será el que directamente velará por los derechos regios. Al igual que el caso de las localidades de realengo el «senior» no interviene en los asuntos municipales siendo el merino quien cohabita y se interrelaciona con los vecinos y las autoridades locales: «Senior non peindret, nec audiat iudicia sed merinus; et si extraxerit pignora sine saione, predat sua pignora sine calumnia²⁴⁴».

6.2. Merino

El merino es una institución municipal de nuevo cuño sin entronque alguno con el mundo local romano o visigodo. El término «merino» deriva de la expresión latina *maior domus* –el principal, el primero de la casa–, más adelante transformada en *maiorinus* y, finalmente, romanceada en *merino*. Originalmente hacía referencia a un cargo de la administración central merovingia, el administrador jefe del palacio, quien desde mediados del siglo VI fue superando sus iniciales limitaciones para merced a su cercanía al monarca hacerse con las riendas del poder. En los diplomas astur-leoneses

²⁴¹ Logroño (1095) 2. Vid. también Paredes de Nava (1134) 7 y Burgos 1181. En otros muchos casos no se hace esta relación de cargos pero los mismos se deducen del contenido de las normas forales.

²⁴² Ocaña (1156): «Et toto cavallero vel pedone qui in Occaniam accepit talegas in ullo loco non det quintam nisi al senior de Occaniam. Et hoc meum factum semper sit firmum». Vid. también Pampliega y Cuenca 16,12

²⁴³ Palenzuela 4, Pampliega.

²⁴⁴ Yanguas 7.

aparece hacia el año 940 en tiempos de Ordoño I²⁴⁵ evolucionando de una forma diferente a la de su tierra de origen, al perder a lo largo de este siglo X y principios del XI su primitivo significado y convertirse en un cargo honorífico como se deduce de sus múltiples detentadores simultáneos. Bajo su autoridad se encontraban los *villicus* o *praepositi*, administradores de los dominios reales, quienes por su vinculación con el *maior domus* fueron paulatinamente denominados por su diminutivo *maiorinus*. Estos cargos menores rebasaron sus iniciales funciones de gestión económica y su marco de actuación dominical para ocuparse de funciones públicas dentro de las entidades locales. En esta nueva faceta pasarán a encargarse de la recaudación de los impuestos y de la correcta prestación de los servicios personales y, progresivamente, irán asumiendo otras funciones de carácter judicial, presidiendo las asambleas y ejerciendo funciones de carácter administrativo y policial.

El ámbito de actuación del merino señorial se va a desarrollar preferentemente al norte del Duero, donde podemos encontrar múltiples municipios controlados por estos funcionarios. En cambio al sur del mismo el panorama es muy diferente. En la Extremadura y la Transierra el amplio autogobierno conseguido por las ciudades de realengo dejó la inmensa mayoría de sus funciones públicas en manos del juez o de los colegios de fiadores y jurados. Sólo en los señoríos particulares conserva todavía una parte relevante de sus competencias primigenias pero compartidas con las autoridades locales. En Yanguas el señor de la villa sólo puede prender en los delitos regios con el acompañamiento del sayón municipal: «Senior non peindret, nec audiat iudicia sed merinus; et si extraxerit pignora sine saione, predat sua pignora sine calumnia». —# 7—. Análogamente si el merino del señor de Molina si se desplaza hasta las aldeas del alfoz con intención de prender debe ir con un andador: «Todo omne que fuere a aldea a pendrar con el merino peche cient maravedises aquellas pendras sean dobladas; et si mataren el merino, non pechen omeçilio nin calonna. El merino, si fuere pendrar, va ya con el andador et que pendre;...» —# 14—.

Conforme a su origen como gestor y administrador de la vida de palacio, el merino cuida de los derechos regios en la localidad a la que ha sido adscrito, administrando los bienes privativos que el señor posee en la villa²⁴⁶, recaudando sus impuestos²⁴⁷, organizando la prestación de los servicios personales a que están obligados los vecinos²⁴⁸ y asegurando el cobro de las caloñas judiciales²⁴⁹.

Rebasando el aspecto puramente económico los merinos se concentrarán también en otras funciones públicas. Su figura aparece mencionada de forma descoordinada en múltiples momento del procedimiento judicial ejer-

²⁴⁵ E. FLOREZ, *España Sagrada* XXXVII, p. 39.

²⁴⁶ Cirueña.

²⁴⁷ Guadalajara (1133) 26, Nora 3.

²⁴⁸ León 30, Villa Ermenegildo 12, Almaraz de Duero (1175) 3, Abelgas 12, Monzón 8.

²⁴⁹ Ribadavia 33.

ciendo la totalidad de funciones reservadas a la administración de justicia²⁵⁰.

6.3. Jurados o Justicias

Un grupo de oficiales característico de la Extremadura y la Transierra son los jurados o justicias. Como ya se ha dicho se trata de oficiales elegidos entre los vecinos pero que asumen la defensa de intereses reales, por ello en Madrid se les llama «los quatro iurados del rei» —# 37— y en Haro «iusticias regis²⁵¹». Ello acarrea automáticamente la no existencia del merino. Este calificativo ayuda a distinguirlos de los oficiales municipales habituales que también en algún texto aparecen denominados como «jurados», lo que no es sino un apelativo genérico que indica la obligación en que incurren de jurar fidelidad al concejo cuando toman posesión de su cargo. Este requisito es el que les distingue de otros vecinos que ejercen funciones de carácter temporal como los jueces avenidores, los comisionados para ir fuera de la villa representación del concejo u otros que con el apelativo de «hombres buenos» aparecen acompañando a los oficiales municipales en pesquisas y otros trámites judiciales.

Se les reconoce participando activamente a lo largo de todo el proceso judicial: en la presentación de los litigios²⁵², comprobando la corrección de la acusación por homicidio²⁵³, citando a las partes para que acudan a los órganos judiciales²⁵⁴, analizando las alegaciones²⁵⁵, etc. Igualmente toman prendas por sí mismos²⁵⁶ o por intermediación de sus propios funcionarios: «Et qui emparare pennos a andador de los jurados²⁵⁷» y las autorizan en casos especiales como las de recua de mercaderes, en concejo mayor o fuera de la villa²⁵⁸. Juzgan solos o acompañados por los oficiales municipales, según la gravedad del delito y según el estatuto de cada localidad. Los delitos importantes como homicidios y violaciones son de su exclusiva incumbencia como indica la no participación en las caloñas de los alcaldes²⁵⁹. En cambio para delitos menores, como la tenencia de armas²⁶⁰ y el juego ilegal de dados²⁶¹, actúan conjuntamente con los alcaldes locales.

²⁵⁰ Pueden seguirse diversos momentos de las actuaciones judiciales del merino en los siguientes artículos: León 5, 38; Logroño (1095) 8; Yanguas 7; Torre de Mormojón 24; Villacelama 8 y 10; Sahagún (1152) 18, 21, 23; Palencia (1181) 27;...

²⁵¹ Haro [1158-1214]: «Omnis iudeus possit se alçare de iudicio alcaldum de Faro et ad las iusticias regis».

²⁵² Alcalá de Henares 181.

²⁵³ Andaluz, Alcalá de Henares 5.

²⁵⁴ Brihuega 223, Salamanca 107, Salamanca 121, Sepúlveda 210.

²⁵⁵ Salamanca 203.

²⁵⁶ Salamanca 22, 97 y 292.

²⁵⁷ Guadalajara (1219) 93, Brihuega 221, Salamanca 128 y 220.

²⁵⁸ Madrid (1202) 64, Molina 28, Salamanca 192 y 241.

²⁵⁹ Escalona (1226) y Molina 24.

²⁶⁰ Escalona (1226). Salamanca 41.

²⁶¹ Escalona (1226).

El fuero salmantino ofrece una muestra de materiales mezclados que permiten distinguir dos estadios sucesivos en el reparto de las competencias municipales de justicia. En un primer momento las justicias tienen una labor limitada a la defensa de los intereses reales y para ello se ocupan de la correcta sustanciación del proceso y de las prendas judiciales mientras los alcaldes resuelven y el merino del concejo procede al cobro de las calañas: «Et por estas calonnas apierten las iusticias, iulguen los alcaldes e cóialas el majordomo de conceio e por scripto e délo por escripto hu mandar el concejo; e den la tercia al quereloso²⁶²». Esta distribución competitiva parece afectar únicamente a los delitos más relevantes como los homicidios, lesiones, violaciones, robos o quebrantamiento de la paz del camino, mientras que en los delitos menores los alcaldes se ocupan de todo el procedimiento judicial²⁶³. Posteriormente, en tiempos de Fernando II, se produce una remodelación de las competencias municipales de tal modo que la estricta separación anterior quiebra y justicias reales y alcaldes municipales ejercen las funciones colectivamente²⁶⁴. En la esfera administrativa se les puede ver gestionando el padrón²⁶⁵ y controlando la actuación de los oficiales municipales asumiendo sus funciones en caso de omisión²⁶⁶ o cuando no han sido renovados²⁶⁷. En un plano superior se ocupan del nombramiento de los oficiales menores²⁶⁸. Persiguen conductas indecorosas²⁶⁹, ejercen funciones de orden público²⁷⁰ y registran domicilios privados en busca de objetos robados o de delincuentes²⁷¹. Deciden sobre el itinerario que han de seguir las murallas de las villas²⁷² y se encargan de la defensa del término municipal²⁷³. Funciones más amplias son las que desempeñan en Salamanca donde se puede ver que desbordan los ámbitos anteriores pasando a constituirse también en los auténticos directores de la vida económica. Esto se apre-

²⁶² Salamanca 300.

²⁶³ Salamanca 177: «Pennos que las iusticias presieren non se mortigüen si non por armas o por muerte o por feridas o por virto o por forcia o por mercader de fuera de la villa o por la voz manda barayar; e esto a IX días». Salamanca 270: «Forcia nen virto nin furto nin aquella cosa que es de concejo que pertenesce a las justicias non ayan ferias; e aquella cosa que pertenesce al pan e non an ferias, plazos e prindas en tierra». Salamanca 303: «Por esto encoten los alcalles: por buelta e por baralla, que metan bestias en casas de las justicias, e por ál non; e por muerte de omne encoten las justicias e por bestia cavallar o mular».

²⁶⁴ Salamanca 264: «Conpanna que demandaren los alcaldes e las iusticias que tajamiento fezieren por matar o por messar o por ferier, que todos se paren al pl(e)yto;...» Salamanca 273: «E los alcaldes e las justicias de Salamanca sean unos a servicio e a proy de nuestro sennor el Rey don Ferrando e de todo el conceio de Salamanca. Et sean unos pora vedar forcias e virtus e superbias e ladrones e traydores e alevosos e todo mal en Salamanca o se conseiar por fazer, todos sean unos por desfazerla».

²⁶⁵ Coria 313 y 319, Salamanca 300.

²⁶⁶ Brihuega 228. Alcalá de Henares 173.

²⁶⁷ Brihuega 193.

²⁶⁸ Salamanca 175, 176 y 300; Guadalajara (1219) 56.

²⁶⁹ Brihuega 96.

²⁷⁰ Madrid (1202) 9. Guadalajara (1219) 30. Salamanca 104 y 190.

²⁷¹ Brihuega 304.

²⁷² Salamanca 172.

²⁷³ Salamanca 127.

cia en las ordenanzas relativas a la industria metalúrgica regulando calidades y precios²⁷⁴, en el establecimiento de los plazos de vendimia²⁷⁵ o en la regulación exhaustiva de la labor de los carniceros²⁷⁶.

7. - Sayón

El último eslabón de la cadena tanto en la administración señorial como municipal está representado por el sayón. Según el diccionario de la Real Academia Española la etimología de la voz *sayón* procede del latín tardío *sagio*, *-ōnis* y éste a su vez del germano *sagjan*, decir, notificar. Se trata de un funcionario secundario que actúa en defecto de sus superiores o ejecutando las instrucciones que reciba de éstos. En el *Liber Iudiciorum* ya aparecía este oficial subordinado a los *iudices* ejerciendo funciones ejecutivas a su discreción²⁷⁷.

En su mismo nombre nos encontramos con la competencia original de este oficial, la comunicación a los interesados de las decisiones tomadas por las asambleas o por los oficiales superiores. Por ello se les encuentra en los fueros entregando las citaciones judiciales²⁷⁸. En la esfera judicial también se les puede ver realizando su competencia más renombrada que es la toma de prendas²⁷⁹. Ejercen competencias policiales persiguiendo delitos y se les ve registrando domicilios en busca de objetos robados²⁸⁰ y apresando delincuentes²⁸¹. Recaudan en nombre del señor las caloñas judiciales²⁸² así como cualquier otro derecho²⁸³. A la llegada del señor o de sus oficiales a la villa son los encargados de darles alojamiento y vituallas siguiendo las instrucciones del juez, es decir ejecutan materialmente los servicios de posada²⁸⁴ y yantar²⁸⁵ que detenta el señor.

Tan extensas funciones corresponden a su época dorada, los siglos XI y XII, como se colige de las fechas de los preceptos citados en las notas anteriores. Con el tiempo su vida administrativa se volverá totalmente anodina. Los extensos fueros extremaduranos del siglo XIII han reducido su categoría convirtiéndoles en meros pregoneros que comunican a la comunidad los objetos perdidos o encontrados, las ventas de determinados bienes, el co-

²⁷⁴ Salamanca 40, 41, 43, 44, 45 y 46.

²⁷⁵ Salamanca 69 y 71.

²⁷⁶ Salamanca 366.

²⁷⁷ LI 2,1,16.

²⁷⁸ Logroño 30.

²⁷⁹ Cirueña, León 16, 38, 41, 44 y 47, San Juan de Piscaria, Oca, Paredes de Nava (1135) 4, Lara, Oviedo (1145), Yanguas 7 y 27, San Pedro de las Dueñas (1162) 5, Palencia (1181) 6, Santa María de Cortes (1182) 9.

²⁸⁰ Sepúlveda (1076) 15, Nájera (1076) 56.

²⁸¹ Yanguas 25.

²⁸² León 24 y 46.

²⁸³ León 39,44 y 45.

²⁸⁴ Torre de Mormojón 13, Covarrubias 12, Haro (1187).

²⁸⁵ Palenzuela 22, Nájera (1076) y 50, Lara (1135), Covarrubias (1148) 24

mienzo de las sesiones del concejo y de los juicios del juez, así como de cualquier otra cosa de interés que consideren las autoridades municipales haya de ser de conocimiento público²⁸⁶.

8. - Conclusiones

En las páginas anteriores se ha trazado una panorámica de la evolución de las estructuras administrativas de los entes locales desde la romanización hasta la primera mitad del siglo XIII. Hemos distinguido cuatro etapas en la misma cada una de ellas caracterizada por una forma distinta de entender el gobierno de las ciudades. La plena autonomía de las *civitas* del imperio altorromano poco a poco se va diluyendo hasta que quedan convertidas en meras prolongaciones de la estructura estatal. Este proceso continúa durante el reino visigodo mientras la administración municipal va dejando por el camino sus magistraturas y, finalmente, desaparece incluso la curia. Para cuando se produce la invasión musulmana ya no quedaba rastro alguno del *municipium* clásico.

En los siglos altomedievales no se puede hablar siquiera de ciudades. La vida urbana permanece estancada, no existe un comercio ni un artesanado organizado y las únicas actividades económicas relevantes son la agricultura y la guerra. El gobierno de las poblaciones por el rey no difiere en nada del que un particular acomodado lleva a cabo en sus tierras dominicales. De hecho el término «merino» que se da a la autoridad local deriva del administrador principal de las propiedades personales del rey. Y en esencia esa es su naturaleza un gestor que dirige una empresa económica y trata de rentabilizarla al máximo con el añadido de las dos únicas funciones públicas significativas en ese momento: la justicia y, en las zonas fronterizas, la defensa. Las limitadas competencias de este oficial real hace que los residentes de cada localidad actúen por su cuenta para resolver pequeñas cuestiones privadas derivadas del uso de bienes comunes.

Cuando en tiempos de Alfonso VI se produce la gran eclosión ciudadana, ésta viene acompañada de distintos grados de autogobierno. Las localidades se transforman en municipios y se hace necesario dotarlos de unos órganos de gobierno. ¿Dónde buscarlos? El reino visigodo de Toledo queda muy lejos y Roma aún más, sólo queda el recuerdo muy fragmentario de su administración en forma de preceptos sueltos en los viejos textos legislativos, en los formularios judiciales y en las obras historiográficas. Al-Andalus, esto es, los cada vez más escasos mozárabes que permanecen allí, sólo puede ofrecer una evolución de las estructuras municipales visigodas pero adaptadas a unas circunstancias sociales y económicas completamente diferentes a las del norte hispano.

²⁸⁶ Cuenca 16,53 y 22,24. Alcalá de Henares 284.

En esta tesitura no existe nada parecido a un intento coordinado por la administración real para homogeneizar el gobierno local. Los municipios tendrán que dotarse por su cuenta de una organización completamente nueva mirando a sus inmediatos precedentes: la asamblea local, los *iudices* y el merino real. La primera se transformará en *concilium* y pasará a regir los destinos de la localidad y los segundos se transformarán en un cargo permanente y cambiarán su nombre por el de alcaldes. El último quedará como mero supervisor de los derechos del señor, en tanto que sus competencias en el gobierno local pasarán a una figura de nuevo cuño, el *iudex*, precedente como indica su nombre del órgano pluripersonal que aconsejaba al merino señorial en la sustanciación de los pleitos. Este *iudex*, cabeza visible del concejo, dirigirá el día a día de su vida administrativa. Este es el esquema general, pero no único. Otras localidades: Madrid, Salamanca, Alcalá de Henares, etc., despojan a éste último de sus atribuciones y lo reducen a una simple figura representativa; y algunas, como Párrega, ni siquiera consideran su existencia.

Esta multiplicidad de formas de autoorganización es algo característico de la Edad Media y que contrasta fuertemente con el mundo romano más homogéneo. Las ciudades indígenas privilegiadas que reciben el *ius latii* o, directamente, la ciudadanía romana miran siempre hacia Roma a la hora de formar su estructura administrativa. Las villas medievales que han recibido su particular privilegio de «no introito» gozan de libertad a la hora de configurar sus magistraturas. El señor no se mete en estas cuestiones mientras queden garantizados los derechos de los que es titular. Son muy escasas las diferencias entre la Lex Ursonense, de tiempos de César, y las correspondientes a las ciudades de Irni, Malaca y Salpensa otorgadas en la época flavia siguiendo una ley marco. Por su parte, las ciudades medievales se estructuran sin seguir ningún patrón definido, existirán como se ha indicado varios tipos más o menos definidos que fluctúan entre la sujeción señorial y la más amplia autonomía. Su situación es fruto de un privilegio de «no introito» por el que se elimina la injerencia de los oficiales señoriales en la villa y, paralelamente, se habilita la creación de organismos locales propios que garanticen al señor el cobro de sus derechos. Con el tiempo a este beneficio básico se suman otras muchas franquizas individuales. Si se constatan ciudades organizadas de forma más o menos semejante ello es producto del éxito de unas fórmulas privativas, originariamente de una localidad y que tras demostrar su adecuación al entorno político, social y económico del momento pasan a ser copiadas por otras.

El resultado será la formación de un complejo mosaico de entidades locales cada una titular de un diferente grado de autogestión, fruto de una evolución única que carece de modelos específicos en los que fijarse. En este sentido, el objetivo de los municipios medievales no es convertirse en tal o cual ciudad de referencia, sino conseguir el mayor grado de autonomía con independencia del modelo administrativo.